

Nicaragua, los avatares de una democracia pactada

NAYAR LÓPEZ CASTELLANOS



NAYAR LÓPEZ CASTELLANOS

NICARAGUA, LOS AVATARES DE UNA DEMOCRACIA PACTADA



N
321.8
L864 López Castellanos, Nayar
Nicaragua, los avatares de una
Democracia pactada / Nayar López
Castellanos. -- 1a ed. -- Managua :
UCA Publicaciones, 2013

112 p.

ISBN : 978-99924-36-31-8

1. NICARAGUA, POLITICA Y
GOBIERNO2.FORMAS DE GOBIERNO
3.CULTURA POLITICA

Nayar López Castellanos
Nicaragua, los avatares de una democracia pactada

Derechos de autor: Nayar López Castellanos y UCA
Publicaciones, Universidad Centroamericana



Primera edición, 2013

Fotos: Nayar López Castellanos

Diseño: Eduardo Herrera Scott
Diagramación: Francis Mejía
Edición: Hebé Zamora
Producción: Wendy Bellanger
Impresión: Complejo Gráfico TMC

Para los héroes y mártires de la Revolución Popular Sandinista

*Para mi hermano Ali,
por la alegría de compartir esta vida*

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Presentación | 1 |
| Prólogo | 7 |
| Introducción | 11 |
| I El sandinismo en la época neoliberal | 17 |
| Nicaragua después de la Revolución | 17 |
| La ruptura del Frente Sandinista..... | 26 |
| El MRS, un difícil camino | 32 |
| Las nuevas configuraciones políticas del FSLN..... | 35 |
| Las esferas sociales del sandinismo: organizaciones populares y ONG | 43 |
| II La derecha neoliberal en el gobierno | 47 |
| Violeta Chamorro, neoliberalismo y cogobierno..... | 47 |
| Arnoldo Alemán, corrupción y consolidación oligárquica..... | 53 |
| Enrique Bolaños, el presidente contra | 56 |

La derecha neoliberal en el gobierno, una época regresiva 59

III La democracia de las elites 65

La ruta de los pactos..... 65

Caudillismo y pragmatismo en la cultura política nicaragüense 70

Las elecciones presidenciales de 2006 y el regreso de Daniel Ortega 76

2011: la reelección cuestionada. La hegemonía del danielismo 83

Nicaragua, los avatares de una democracia pactada..... 90

Conclusión 99

Referencias bibliográficas 103

PRESENTACIÓN

Es un honor para mí que Nayar López Castellanos me haya pedido un prefacio para su libro: *Nicaragua, los avatares de una democracia pactada*. El libro pretende analizar el período político de Nicaragua que transcurre entre 1990 y 2011, sin perder de vista el contexto social y económico en que se inscribe este período. Identifica los principales actores políticos, sus características y prácticas, y las repercusiones de su quehacer político en la vida socioeconómica y democrática de la sociedad nicaragüense. En particular, el autor se preocupa por explicar

“el proceso y los elementos que permitieron el regreso de Daniel Ortega al gobierno en 2006 y su cuestionada reelección en 2011, a fin de demostrar que la actual democracia en Nicaragua se constituye a partir de un pacto entre las elites políticas y económicas, esto es, la nueva oligarquía forjada desde 1990, pero que también, tras las elecciones de 2011, el país retrocede sustancialmente en su institucionalidad democrática al concretarse la imposición de Ortega en la presidencia, aun cumpliendo la formalidad del proceso” (p. 14).

Como muchos otros, Nayar López Castellanos quiere explicarse cómo es que Nicaragua ha llegado donde está ahora, luego de haber sido una de las construcciones revolucionarias más promisorias del continente. Así, nos dice el autor: (con este libro) “...buscamos contribuir a desentrañar la realidad política actual de esta nación centroamericana, determinando sus coordenadas temporales a partir de la derrota de la Revolución Popular Sandinista” (p. 14).

Y en esa labor de desentrañar acuciosamente la realidad política nicaragüense de entre 1990 y 2011, el autor buscará mostrar cómo en los avatares de los intereses políticos de las élites, la democracia en el país ha entrado en un proceso involutivo que está teniendo altos costos sociales y éticos.

Más adelante me referiré más explícitamente a esta alusión a la ética.

Destaco, mientras tanto, la caracterización que hace el autor del actual gobierno en el contexto del momento político que vive América Latina. Su análisis lo lleva a ubicar a Nicaragua como un caso particular dentro de las luchas de América Latina contemporánea y en el auge de los movimientos de izquierda que gobiernan el continente. Así nos dice:

“Aunque algunos estudiosos incluyen a Nicaragua en el bloque de países con gobiernos revolucionarios y progresistas a partir del triunfo de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales del año 2006, el caso merece una atención específica ante el cúmulo de indefiniciones y equívocos políticos y económicos. Como se expondrá en este texto, el nuevo período de gobierno de Daniel Ortega representa un modelo político e ideológicamente *híbrido*, que se desenvuelve contradictoriamente con todas las posturas regionales del desarrollismo, a pesar del discurso *radical*, nacionalista y antiimperialista que le caracteriza. Lo mismo defiende la integración latinoamericana a partir de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América Latina y el Caribe (ALBA), impulsada por Cuba y Venezuela, que cumple obedientemente con las condiciones impuestas por Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA) y con el Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá)” (p. 14).

La caracterización del nuevo gobierno de Daniel Ortega, de ideológicamente “híbrido” y “contradictorio”, a que alude Nayar López Castellanos, plantea de otra manera un debate muy conocido en Nicaragua que se inició con el interrogante sobre si existían fuerzas de izquierda en nuestro país. Ese debate se levantó precisamente a partir de posiciones ideológicas equívocas y de prácticas contradictorias con fines o ideales de modelos alternativos de sociedad que ha mantenido el nuevo partido FSLN para acceder y mantener el poder, cuando a la vez se reivindica como el único partido de izquierda en el país.

Las posiciones contradictorias y las prácticas inconsecuentes hacen difícil decir con certeza de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a esa vieja ubicación de derecha e izquierda surgidas en la Revolución francesa para ubicar desde un centro a las fuerzas políticas por la defensa del *status quo* o por el cambio favorable a las mayorías. En el caso de América Latina ello ha llevado a que, por ejemplo, actualmente se prefiera hablar de “izquierdas” y de “fuerzas progresistas” para referirse a las fuerzas políticas que han accedido al gobierno en al menos diez países de América Latina, sin definir con precisión en todos los casos qué gobiernos están en una u otra clasificación.

Yo no pretendo resolver en este prefacio este debate sobre la izquierda y la derecha en América Latina. Tampoco creo que esta distinción importe mucho a las inmensas mayorías que hoy buscan alternativas de sobrevivencia frente a la crisis global que amenaza con hundir el planeta. Creo, sin embargo, que es posible decir que, en todo caso cuando se habla de izquierda en Nicaragua

debería aludirse a fuerzas políticas ubicadas en el bando de la justicia, pero también de la congruencia entre el discurso y los hechos; en el bando de los que lucharon y siguen luchando por el cambio en Nicaragua sin pasarle facturas por bienes, tierras ni pernadas a la revolución; en el bando de los desheredados; en el bando de mayores cargas de humanidad, de respeto a la naturaleza, de respeto a la diversidad y al pluralismo; en el bando de quienes combinan la política con la ética, de quienes creen de verdad en la democracia, en la mejor calidad de vida y en la vigencia de las libertades y derechos de todos los seres humanos y su entorno.

Es decir, creo que en Nicaragua las fuerzas que se quieran llamar de izquierda deberán demostrar que les importa la democracia y que no la ven como una fachada formal detrás de la cual se puede seguir manteniendo el viejo autoritarismo y la represión a los disidentes. O lo que es lo mismo, que ya no aceptan dictaduras bajo ningún pretexto, así sean las de sus amigos, y menos las de sus líderes. Que ya no aceptan como admisible cambiar libertades por migajas clientelares, si no que buscan construir ciudadanías, fortalecer autonomías y mejorar calidad de vida con libertades para todos. Que tampoco aceptan la teoría de la conspiración como justificación del autoritarismo y la represión a los que no coinciden con sus posiciones. Que aceptan la existencia de una oposición verdadera y que no la pervierten con halagos o amenazas desde el poder, y que creen que ella debe mantener su rol de control y vigilancia del poder, que deben criticar a los gobernantes y enriquecer las decisiones con sus propuestas, que están ahí como alternativa siempre presente al oficialismo, como minoría que se puede convertir efectivamente en mayoría si el partido de gobierno incumple sus promesas o pierde la voluntad ciudadana por su mala gestión, porque el sistema le da las condiciones y las garantías para hacerlo. Que creen en una democracia con libertad de expresión y libre movilización sin golpeadores a sueldo del poder contra los que defienden sus derechos de propuesta, de protesta y de crítica.

Una fuerza que se presume de izquierda no debería temerle a la autonomía que dan los derechos a los ciudadanos ni a sus organizaciones; debería creer en la descentralización y en las autonomías regionales y locales como espacios de libertades para el ejercicio ciudadano de derechos más allá del poder central; debería creer en la separación iglesia-Estado y no debería necesitar, para sentirse a gusto, crear desde el poder sus propias oposiciones ni sus propias iglesias con sus propios clérigos, sus propias sociedades civiles sometidas al poder, sus propios sindicatos o movimientos sociales, sus propios ejércitos policías, sus propias organizaciones sociales o sus propios poderes. Debería respetar la autonomía de los otros poderes, alentar la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales, creer en los derechos para todos y no sólo para sus afines, creer en el pluralismo y la diversidad como ideal de convivencia en las sociedades de futuro. En síntesis, creer que es posible la convivencia de todos con alta tolerancia basada en la igualdad y la equidad sociales.

Nayar López Castellanos parte en su análisis desde esa posición de la nueva izquierda que reivindica un nuevo modelo de sociedad con democracia, equidad y valores éticos.

Destaco en este caso esa preocupación ética de López Castellanos en la práctica de los partidos políticos y en el mismo análisis político, porque ella no ha sido siempre compartida por todas las izquierdas del continente. Por el contrario, para algunas de ellas la ética suele considerarse como un valor propio del campo “religioso” sin ninguna aplicación en el campo de la política, a pesar de que estas mismas izquierdas reivindican el uso legítimo del discurso religioso con fines políticos y consideran la religión cristiana como un componente fundamental de su ideario político. Por el contrario, para otras posiciones de izquierda, como la del autor, la ética en la política es concebida como una posición distintiva y como un aporte a la nueva manera de hacer política de las fuerzas de la izquierda en el continente y que, por tanto, al igual que la democracia, los proyectos políticos de sociedad futura no pueden prescindir de ella. De ahí que a la par de que es observable un esfuerzo en estos nuevos gobiernos de América Latina de no renunciar a lo ideológico- entendiendo por tal la preocupación por imaginar y hacer posibles modelos de sociedad alternativos a las sociedades que tenemos actualmente -, esos nuevos modelos de sociedad no serán tales si no incorporan en su ideario y su práctica política la democracia y la ética.

La importancia que desde la izquierda se reivindique la ética en la política reside en que con esta posición se sale al paso al pensamiento dominante de todo el siglo XX de separar ambos campos y aún establecer a la política como dominante sobre la ética. Es cierto que la política no es reductible a una lectura únicamente ética. No se puede ignorar que la mediación política es compleja y tiene su especificidad. Pero tampoco se puede, en nombre de la política y su rol mediador, pretender que la ética no tiene ningún espacio en la política. Porque sería legitimar sin más el oportunismo pragmatista como la forma única de hacer política. Por ello, si bien no se debe renunciar a los fines ideológicos, es decir, a pensar y proponer modelos alternativos de sociedad a la sociedad que vivimos, tampoco sería válido que en la consecución de esos modelos se prescindiera de la ética.

Los abusos del poder, la corrupción, los excesos de los gobernantes y hasta los holocaustos, que de alguna manera han entronizado los fines sin ajustar los medios, han sido unas de las lecciones claves de los problemas de convivencia en el siglo XX. Por eso esa nueva izquierda postula que la opción a la derecha no es sólo de cambio a un régimen más justo, sino también de cambio de valores para la convivencia y el bien vivir. Y que por tanto la izquierda no puede actuar en el campo político de la misma manera antiética como lo hacen a veces sectores de la derecha, porque entonces: ¿qué de nuevo ofrece la izquierda en el hacer de la política? Y no es que se pretenda que los militantes de izquierda sean ángeles en la tierra. Se pretende sólo que esos militantes que se dicen revolucionarios

aporten algo nuevo y distinto a la política, mostrando que es posible conquistar y mantener el poder con métodos que no están divorciados de los valores y los derechos humanos.

Esta posición ética en la política, según López Castellanos, implica de hecho una nueva concepción sobre el poder. Es lo que afirma en otro de sus libros recientes, *Perspectivas del socialismo latinoamericano en el siglo XXI*, cuando destaca el principio zapatista de *mandar obedeciendo*. Este principio, nos dice el autor, es “una reformulación de cómo pensar el poder en términos de una relación entre ética y política en la que no exista un dominio o subordinación, pero sobre todo que el desempeño de una posición administrativa o legislativa sea entendida como una responsabilidad frente al colectivo, una función de “servir y no de servirse, de representar y no de suplantar, de construir y no de destruir, de proponer y no de imponer, de convencer y no de vencer” (López Castellanos, 2012, pp. 88-89). Ello implica la transparencia en el ejercicio del poder y consecuencia entre los principios y las prácticas, restituyendo la ética a su lugar en la política.

He llamado la atención y comentado estos dos puntos de la obra de Nayar López Castellanos para decir que estamos frente a un nuevo tipo de análisis que saca lecciones de nuestras realidades y que para ello no abandona el instrumental crítico de las ciencias sociales. Por ello, esta obra surgida desde el análisis de una posición de izquierda latinoamericana es probable que no le guste a algunos que se autoproclaman de izquierda, porque se atreve a criticar a los antiguos amigos, algo muy difícil entre los analistas de izquierda, al decir de Atilio Borón. Es, por lo tanto, un análisis que desafía la descalificación del poder con el manido argumento de que la crítica le hace el juego al enemigo, cuando en realidad ha sido la falta de crítica oportuna desde adentro la que le hace el juego al adversario.

Es este pues un libro crítico, como compete a los académicos, cuya función es investigar la sociedad y develar las trampas del poder más allá de las relaciones visibles y la propaganda encubridora, que sabe ver tras el papel celofán y los lazos dorados los productos fallidos que se quieren vender con envolturas de excelencia.

Cabe indicar que no es la primera vez que Nayar López Castellanos escribe sobre Nicaragua. Su primer libro, publicado en el año 1996, fue dedicado a *Nicaragua: La ruptura del Frente Sandinista* (Plaza y Valdés-UNAM, 1996). Posteriormente, en 2009 aborda nuevamente la problemática nicaragüense desde la perspectiva regional en su libro *Del Plan Puebla Panamá al Proyecto Mesoamérica: Un espejo de la globalización neoliberal* (Plaza y Valdés, 2009). Y ahora este libro que aborda un período especialmente crucial de nuestra historia.

Y es que, para el autor: “Nicaragua tiene una historia singular que atrapa, sin duda, a propios y extraños.” Sus libros sobre Nicaragua muestran que en efecto, López Castellanos está atrapado por este país de poetas, escritores, guerrilleros, güegüences, anancys; por este país de escenarios de atracción de

colonialistas, imperialistas, piratas, filibusteros, aventureros, revolucionarios, contrabandistas, misioneros de toda causa, dioses de distinto signo y pobres de solemnidad. Ojalá y el autor siga atrapado por este país y nos siga ayudando a encontrar el hilo de Ariadna de nuestro laberinto. Un laberinto construido por dictadores, caudillos, colonizadores, imperialistas, y deshilvanado en periódicas sublevaciones, levantamientos e insurrecciones populares en un proceso que pareciera no tener fin. Ojalá y sus aportes contribuyan a que encontremos al fin la salida del laberinto: un país donde todos podamos convivir con justicia, equidad, fraternidad, autoestima y dignidad.

Manuel Ortega Hegg

Managua, enero de 2013

Referencias

López Castellanos, N. (2012). *Perspectivas del socialismo latinoamericano en el siglo XXI*. México: Ocean Sur.

PRÓLOGO

Nicaragua: un pueblo patriota y valeroso

En muchos países se permite la reelección, y esa disposición constitucional no suele ser objeto de mayores enfrentamientos. Sin embargo, en casos como el de Nicaragua, la figura genera un escalofrío que estremece la memoria y la conciencia ciudadana, porque la dictadura dinástica de los Somoza se construyó con base en repetidas y fraudulentas reelecciones.

Por esa razón, allá por los años 80, la Revolución Sandinista (de cuyas volteretas ya ha dado cuenta el cronista/analista Nayar López) tuvo la precaución de redactar una Constitución que prohibiera la reelección presidencial continua y un tercer período presidencial. Con esos mecanismos se buscaba conjurar cualquier tentación a perpetuarse en el poder, y la llamada “Constitución Sandinista” establece -hasta hoy- que para reformar esa disposición constitucional se requiere una mayoría calificada de diputados.

Aunque el reelecto presidente Ortega no logró reunir esa mayoría calificada, eligió acortar camino por la senda de una resolución judicial. Contra la voluntad de la Constitución, contra la voluntad de la mayoría de los parlamentarios de esa nación centroamericana, y contra las señales de alerta que envía la historia más reciente, el danielismo logró un grupo de magistrados que emitieron una resolución “legalizando su derecho a la reelección”.

De estos avances y retrocesos de la democracia nicaragüense -algunos impensables-, y de la deriva de la ética que distinguía al sandinismo revolucionario de los años 80, es que trata este trabajo de investigación. En una paráfrasis de Dante, a quienes osen la lectura les señalaría: “Ustedes que van a leer, abandonen toda esperanza”.

“Ya en el teatro de los acontecimientos me encontré con que los dirigentes políticos, conservadores y liberales son una bola de canallas, cobardes y traidores, incapaces de poder dirigir a un pueblo patriota y valeroso”. Esta frase no es de Nayar López ni de cualquiera de nosotros que pudiera viajar en estos tiempos a Nicaragua. Pertenece a Sandino y pronto va a cumplir un siglo, pero sigue siendo el retrato más fiel de una clase política que maniobra por décadas de décadas a espaldas de los intereses del pueblo nicaragüense, tan “patriota y valeroso” como traicionado por sus elites dirigentes.

Recorrer las páginas del libro con el que López Castellanos contribuye a la reflexión, termina convirtiéndose en un desafío con aristas dolorosas, y el tema de la calidad de los políticos nicaragüenses viene al caso, porque al mismo tiempo que este texto ve la luz, el pueblo nicaragüense queda enfrentado y polarizado por un resultado electoral que ~más allá de reelegir a Daniel Ortega~ se entiende por muchos analistas como un retroceso en el proceso de transformaciones democráticas que Nicaragua había iniciado.

Daniel Ortega se presentó como candidato presidencial del FSLN por sexta ocasión. Declarada su victoria, gobernará nuevamente sobre una nación dividida y enfrentada a urgentes disyuntivas económicas y sociales. Se sustenta en una tesis, con aromas de chantaje: cualquier otra opción traería un retroceso a Nicaragua y la sumiría una vez más en el enfrentamiento.

A estas alturas de la vida política del sandinismo contemporáneo, se le podría preguntar a sus adeptos: ¿Qué es ser sandinista? Y me temo que la respuesta más recurrente sería: el que acepta el liderazgo de Daniel Ortega. Y es que el caudillismo sigue siendo uno de los mayores conflictos internos de nuestras luchas populares, no somos capaces de renovar nuestras direcciones, no generamos nuevos líderes, y menos aún, estamos dispuestos a mandar obedeciendo.

Ya las formas de gobierno puestas en práctica por Daniel Ortega, en su anterior reedición como Presidente de Nicaragua, se sustentaban en una marcada centralización de las decisiones, lo que no contribuye a desarrollar la cultura democrática de los nicaragüenses. Contrario a las viejas aspiraciones de la Revolución Popular Sandinista, de que la vida política de la nación se fuera democratizando, que pudieran las bases poner límites a sus dirigentes en el ejercicio de su poder, se involucionó a un trato clientelista con las bases sociales, a un aumento de los métodos autoritarios, en otras palabras, a una reedición del caudillismo.

Del otrora poder popular sandinista ya solo queda el recuerdo glorioso. Hoy predomina la supresión de los derechos individuales, un progresivo aumento del recurso a la represión y un incremento de la centralización del poder.

Junto a la reelección de Daniel Ortega, al obtener el sandinismo un porcentaje de votos superior al 60%, logra una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, con lo cual el FSLN obtiene el control de todos los

poderes e instituciones del Estado. Con esta correlación, Daniel Ortega puede efectuar todos los cambios legales y constitucionales que estime convenientes, incluyendo el cambio del sistema político y el legitimar futuras reelecciones.

En las democracias contemporáneas, el papel de la oposición es considerado un factor necesario, en la medida en que contribuye a que el grupo en el poder se vea permanentemente estimulado a gobernar, considerando los intereses de toda la ciudadanía. El compromiso de los gobiernos hegemónicos es contemplar los intereses de la nación por encima de los de la mayoría. Asimismo, la ausencia de una oposición sólida reclama de los propios gobernantes cuidarse de caer en tentaciones como la del poder absoluto.

Si las oposiciones son manipuladas desde el poder, no tardan en surgir otras nuevas. En el caso de Nicaragua, el surgimiento de una oposición despojada de los vicios del pasado es previsible, así como la conveniencia de que el sandinismo le reconozca espacios y le ofrezca un entendimiento.

La contribución del libro de Nayar López Castellanos es que nos pregunta cuál fue el costo para la democracia nicaragüense de los anteriores pactos políticos, y cómo se comportará la futura oposición. Responder al cuestionamiento no es fácil, en especial si se estuvo ligado con el pueblo nicaragüense desde sus primeros pasos dentro de la Revolución, pero creo que se debe intentar como una responsabilidad y como un acto de consecuencia.

Daniel Martínez
México, agosto de 2012

INTRODUCCIÓN

América Latina es una región marcada por cambios profundos en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, cuyas intensidades y características hacen imperativo el análisis de su historia reciente y de su realidad actual, particularmente en un contexto donde se debate la continuidad de un modelo neoliberal en crisis profunda, y un posneoliberalismo que va de las resistencias autonómicas indígenas a los gobiernos que buscan definir un socialismo del siglo XXI.

Este debate se produce en una coyuntura en la que la política del gobierno de Estados Unidos pretende imponer nuevamente su influencia sobre América Latina, apoyando a los gobiernos neoliberales en México, en Centroamérica y en la región andina (sobre todo, en Colombia). Así, renueva su histórica intervención en las otras naciones latinoamericanas, amenazando los procesos de cambio democrático que existen en la región. Recuérdese que tras la edificación del Estado nacional desarrollista en la década de los 30 del siglo pasado, se vivieron arduas batallas por establecer la democracia representativa como norma general de convivencia política. No obstante, con el inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), se dejaron sentir los efectos de ese enfrentamiento entre dos modelos de sociedad y los intereses económicos y políticos de las dos potencias mundiales, producto de ello, América Latina vivió con intensidad la polarización entre *capitalismo* y *socialismo*.

El primer país latinoamericano que experimentó el impacto de esta polarización fue Guatemala, cuando el gobierno nacionalista de Jacobo Arbenz -acusado de querer “implantar” el comunismo- fue derrocado en 1954, por medio de un golpe de Estado alentado y apoyado por Washington a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Con el triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, y una vez definido el carácter socialista de sus transformaciones, América Latina ingresa en un período de luchas revolucionarias y democráticas que desembocan en experiencias armadas (de las cuales solo llega a triunfar plenamente la de Nicaragua en 1979), y en elecciones democráticas como las que llevaron al triunfo a Salvador Allende, en Chile, en 1970. En este caso, la esperanza de cambio del pueblo chileno hacia el socialismo por la vía pacífica e institucional duró escasos tres años, ya que la maquinaria subversiva estadounidense, en complicidad con la oligarquía de esa nación sudamericana, fraguaron de nuevo el derrocamiento de un gobierno democrático por medio de un golpe de Estado, dirigido por el militar Augusto Pinochet, en 1973, quien impuso casi 20 años de dictadura.

Durante el período abierto por el triunfo de la Revolución Cubana, Estados Unidos aplicó diferentes estrategias de intervención para proteger sus múltiples intereses en la región. En un principio, Kennedy intentó terminar militarmente con la pretendida amenaza cubana, con la invasión militar a Cuba en 1961, pero la derrota en Playa Girón, lo obligó a redefinir su política para contener esa revolución y su ejemplo para el subcontinente, ahora, por medio de programas como la *Alianza para el Progreso*, sustentados con fondos millonarios que se destinaban, supuestamente, a disminuir los niveles de pobreza y de marginación en América Latina. También acude a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que convierte en una estructura de control político de los regímenes de la época.

A fines de la década de los 60, los magros resultados de este programa y el avance de las luchas populares hacen que Estados Unidos opte por la vía fascista a través del apoyo de cruentas dictaduras militares, sobre todo, en el Cono Sur, frustrando procesos revolucionarios de signo socialista e incluso limitados procesos que buscaban ampliar la lucha por la democracia, como el caso mexicano, y diversificar la participación popular en la búsqueda de nuevas alternativas.

En la década de los 80, el avance del modelo neoliberal es incontenible, provocando a la larga una profunda transformación del Estado benefactor, y, supuestamente, iniciándose la *transición a la democracia*. En realidad, se trataba de un viraje de las políticas del gobierno estadounidense, orientadas a que los militares *regresaran el poder a los civiles* ante el avance de la lucha de los movimientos populares para poner fin a las dictaduras. Ejemplos de ello son el proceso social y político que obliga al plebiscito que Pinochet pierde en 1988, y el de las movilizaciones obreras y de las Comunidades Eclesiales de Base, en Brasil, que al final logran una transición a un gobierno civilista. Sin embargo, el peso de los pactos inter pares fue determinante en la medida en que el poder, a cambio de la impunidad para los militares, finalmente quedó entre las elites, y, a la vez, se *atendía y cumplía* la demanda central de la sociedad: el paso a la *democracia*. En ese proceso de *restauración democrática*, ubicamos el arribo por la vía electoral de Jaime Roldós en Ecuador, en 1979; de Fernando

Belaúnde en Perú, en 1980; de Raúl Alfonsín en Argentina, en 1983; de Julio María Sanguinetti en Uruguay, en 1985; de José Sarney en Brasil, en 1985, y de Patricio Aylwin en Chile, en 1990.

En contraste con esta transición sudamericana, los países centroamericanos vivían un proceso diferente. En Nicaragua, en 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a través de la insurrección armada urbana y rural y de una amplia alianza pluriclasista, pone fin a la dictadura de los Somoza tras 45 años en el poder, dando inicio a lo que conocemos como Revolución Popular Sandinista (RPS), durante la cual el FSLN gobernaría hasta 1990, cuando es derrotado electoralmente por la derecha opositora apoyada por el gobierno de Estados Unidos; todo ello, después de resistir la agresión armada que esta potencia desarrolló durante esos 10 años a través de la contrarrevolución, del sabotaje, y de un bloqueo económico y político encaminado a evitar construir un nuevo modelo político, económico y social de base nacional y popular.

En El Salvador y en Guatemala, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), también desarrollaban procesos revolucionarios para terminar con los gobiernos represivos, bajo el objetivo ~de acuerdo con los documentos fundacionales~ de edificar el socialismo. Ambas guerrillas terminaron firmando la paz en 1992 y en 1996, respectivamente.

Para la década de los 90, ya sin Guerra Fría ni URSS, y sin sandinismo gobernando en Nicaragua, con un modelo neoliberal que impone la *barbarie* y la *depredación* bajo el capitalismo, surgen y se desarrollan movimientos sociales que se convierten en protagonistas políticos en el propio terreno del adversario: el electoral, a partir de la reconfiguración partidaria de la izquierda en la región.

El tiempo de las nuevas *rebeldías* inicia con el histórico levantamiento de los mayas zapatistas, en 1994, y con el triunfo electoral de Hugo Chávez, en Venezuela, en 1998; seguido por la victoria a nivel presidencial de múltiples gobiernos de izquierda de variadas orientaciones políticas, económicas y sociales. En orden cronológico: Luiz Inácio *Lula* Da Silva, en Brasil, 2002; Néstor Kirchner, en Argentina, 2002; Tabaré Vázquez, en Uruguay, 2004; Evo Morales, en Bolivia, 2005; Daniel Ortega, en Nicaragua, 2006; Rafael Correa, en Ecuador, 2006; Fernando Lugo, en Paraguay, 2008; Mauricio Funes, en El Salvador, 2009, y Ollanta Humala, en Perú, 2011. En los procesos electorales presidenciales posteriores, en todos los casos, la izquierda repitió el triunfo tanto con los mismos protagonistas como con candidatos nuevos.

Entre estos gobiernos, son los de Venezuela, Bolivia y Ecuador los que han adoptado programas sociales, económicos y políticos de mayor alcance y profundidad. En ellos se han desarrollado procesos populares y nacionalistas que han creado mecanismos para constituir un nuevo Estado, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, y que con diferentes estrategias buscan edificar un sistema democrático y socialista.

Lejos de estas iniciativas de cambio sociopolítico se encuentran los gobiernos progresistas de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, El Salvador y Perú. La orientación de este bloque de países es más bien un desarrollismo con fuerte presencia del Estado, la convivencia con el capitalismo neoliberal y el impulso de políticas sociales de corte asistencialista, que no modifican las relaciones de explotación del sistema capitalista y la extrema desigualdad que existe en la región.

Aunque algunos estudiosos incluyen a Nicaragua en el bloque de países con gobiernos revolucionarios y progresistas a partir del triunfo de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de 2006, el caso merece una atención específica ante el cúmulo de indefiniciones y de equívocos políticos y económicos. Como se expondrá en este texto, el nuevo período de gobierno de Daniel Ortega representa un modelo político e ideológicamente *híbrido*, que se desenvuelve contradictoriamente con todas las posturas regionales del desarrollismo, a pesar del discurso *radical*, nacionalista y antiimperialista que lo caracteriza. Lo mismo defiende la integración latinoamericana a partir de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América Latina y el Caribe (ALBA), impulsada por Cuba y Venezuela, que cumple obedientemente con las condiciones impuestas por Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA), y con el Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá).

Por ello, buscamos contribuir a desentrañar la realidad política actual de esta nación centroamericana, determinando sus coordenadas temporales a partir de la derrota de la Revolución Popular Sandinista. Se trata de reconocer, entre 1990 y 2006, al sandinismo opositor y a la derecha antisandinista gobernante, con todo y los cambios sociales, económicos y políticos que se produjeron durante este período, identificando algunas características de las prácticas políticas de ambas corrientes y sus repercusiones en la vida democrática de la sociedad nicaragüense y sus condiciones socioeconómicas, así como el proceso y los elementos que *permitieron* el regreso de Daniel Ortega al gobierno en 2006 y su cuestionada *reelección* en 2011, a fin de demostrar que la actual democracia en Nicaragua se constituye a partir de un pacto entre las elites políticas y económicas, esto es, la nueva oligarquía forjada desde 1990, pero que también, tras las elecciones de 2011, el país retrocede sustancialmente en su institucionalidad democrática al concretarse la imposición de Ortega en la presidencia, aun cumpliendo la *formalidad* del proceso.

En el primer capítulo se abordan las características del sandinismo en la época neoliberal, describiendo la vida democrática en Nicaragua después de la Revolución, las causas de la ruptura del FSLN, el surgimiento del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), así como la reestructuración del Frente y los parámetros en los que se desenvuelven los sectores sociales organizados, los cuales eran parte fundamental del poder revolucionario.

En el segundo capítulo se analizan las características centrales de la derecha nicaragüense en el gobierno, de 1990 a 2006, describiendo las políticas y las medidas tendientes a desarticular las conquistas sociales de la Revolución, y a continuar desarrollando el modelo neoliberal, además de las formas de corrupción que distinguen sus administraciones, en medio de una pobreza generalizada en la sociedad y de la extrema dependencia económica del país frente al capital extranjero.

En el tercer y último capítulo se establece la ruta de los pactos en la historia de Nicaragua, y, en particular, en la época contemporánea tras la derrota del sandinismo en 1990; se abordan los mecanismos, protagonistas y procesos relacionados con la cultura política nicaragüense y su sistema *democrático*, enfatizando dos aspectos centrales: el caudillismo y el pragmatismo, que sin duda marcan el desarrollo de la política en esta nación durante las últimas dos décadas. De igual forma, se explica de manera general el contexto que permite el regreso de Daniel Ortega a la presidencia, y algunas características de su nueva Administración, así como su cuestionada reelección en los comicios de noviembre de 2011. Finalmente, se plantean las razones centrales para entender el actual contexto de la democracia nicaragüense, y cómo esta experimenta un grave retroceso a partir del último proceso electoral, con el cual, al final, el poder queda concentrado casi de forma absoluta en un solo grupo político: el danielismo, situación tras la cual el pacto Ortega-Alemán queda por completo rebasado.

Así, *Nicaragua, los avatares de una democracia pactada* intenta aproximarnos a la realidad política de una nación que, frente a la acción avasalladora de enemigos internos y externos, perdió las conquistas de una revolución popular con un alto costo social y ético, envolviéndose en un complejo entramado de batallas políticas marcadas por el pragmatismo, la cultura del pactismo, las traiciones, y un clima de polarización que hoy la tienen inmersa en un contexto de incertidumbre, y, sobre todo, de desesperanza.

I. EL SANDINISMO EN LA ÉPOCA NEOLIBERAL

Nicaragua después de la Revolución

Nicaragua es representativa de la historia latinoamericana y caribeña en la búsqueda de libertad, de independencia y de un orden más justo, pero también es sinónimo de los peores referentes del desarrollo político, económico y social de la región: pobreza, corrupción, autoritarismo e intervencionismo externo. Nicaragua es América Latina: mundo indígena, presencia africana, colonia española, protectorado británico, independencia, dominación oligárquica, procesos nacionalistas inconclusos, intervencionismo estadounidense, resistencia nacional-popular, dictadura militar de corte dinástico, revolución popular, gobierno revolucionario, construcción democrática, internacionalismo, movimientos sociales, autonomía indígena, neoliberalismo...

Desde el surgimiento formal del país, en 1844, tras la desintegración de la Federación Centroamericana en la que también estaban Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, Nicaragua ha vivido un permanente conflicto político, expresado a través de enfrentamientos armados internos e invasiones militares por parte de Estados Unidos.

Entre el siglo XIX y las primeras tres décadas del XX, la batalla nacional estuvo protagonizada por liberales y por conservadores, bajo el escenario de permanentes intervenciones militares estadounidenses. En la última de estas, que va de 1927 a 1933, aparece la figura de Augusto C. Sandino, quien habiendo creado el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN), obliga el retiro de las tropas yanquis.

Los *marines* abandonan Nicaragua, pero antes crearon una estructura militar, la Guardia Nacional, en la que colocan como jefe a Anastasio Somoza García, el primero de la dinastía que gobernaría al país como incondicional de

Estados Unidos, hasta el triunfo sandinista en 1979. Somoza inicia la dictadura familiar con el acto infame de asesinar a Sandino, acción ejecutada el 21 de febrero de 1934. El General de Hombres Libres no solo es recordado por su gesta patriótica, sino por su ideario de justicia social y por su congruencia antiimperialista, pensamiento que, en su conjunto, inspiró años más tarde la formación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Así, transcurrieron 45 años de somocismo. Primero, Anastasio Somoza García, luego Luis Somoza Debayle y por último Anastasio Somoza Debayle. Los tres ocuparon el poder en Nicaragua, gobernando como presidentes, o detrás de los que formalmente lo eran, y cultivando una fortuna económica de enormes proporciones. La política se resolvía a través de la represión, del asesinato y de la corrupción. Durante el terremoto que destruyó Managua en 1972, por ejemplo, el último de los Somoza se apropió ilegalmente de la ayuda internacional, y terminó vendiéndola en sus tiendas departamentales. Tanto el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt (1933-1945) como el Secretario de Estado, Henry Kissinger (1969-1977), en su momento, señalaron de forma descarada sobre el Somoza en turno: “Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

En 1961 se forma el FSLN para derrocar a la dinastía bajo los principios de Sandino, la influencia de la Revolución Cubana, y las ideas del socialismo y de la liberación nacional que existían en esta época, marcada por la Guerra Fria, que protagonizaban Estados Unidos y la Unión Soviética.

Al igual que en la experiencia cubana, la guerrilla sandinista rompió los esquemas dogmáticos del marxismo, esto es, que los obreros (el proletariado) representaban el sector *iluminado* (la vanguardia) destinado a liberar a la sociedad nacional y arribar hacia el modelo socialista. En Nicaragua, fueron campesinos, estudiantes, profesionales, sacerdotes, indígenas, grupos de la clase media, y también contingentes del sector obrero, quienes empuñaron las armas. Incluso, el FSLN hizo alianzas con parte del empresariado conservador que había sido afectado por Somoza (sobre todo, aquel cuyo ámbito financiero se vio mermado por su intervención en esta actividad después del terremoto). En síntesis, se trató de una revolución pluriclasista que, junto con la mexicana (1910-1917), constituyen las únicas de su tipo dentro de la historia latinoamericana, independientemente de los diferenciados rumbos y destinos que tomaron con el paso del tiempo.

Según Córdova & Benítez (1990), la Revolución Popular Sandinista (RPS) ~que derrocó a la dictadura somocista en julio de 1979~ marcó a la segunda generación de la izquierda latinoamericana y transformó radicalmente las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales de Nicaragua.

El triunfo sandinista del 19 de julio de 1979 plantea una conversión total del Estado. Del Estado contra la sociedad, base del esquema de dominación del régimen político somocista, se pasa al Estado de la sociedad. El proyecto sandinista, sobre esta idea, fusiona sus intereses

con los de la sociedad civil nicaragüense, principalmente con los sectores populares de ella, solo aislando y anteponiéndose a aquellos que eran el punto de apoyo de la dictadura de Somoza y que rápidamente salen del país, buscando refugio principalmente en Estados Unidos. El Estado sandinista, así, es revolucionario, es popular, y por primera vez en la historia de Nicaragua, el Estado se plantea como un Estado-Nación (p. 529).

Bajo un programa revolucionario ubicado alrededor del pluripartidismo, la economía mixta y el no alineamiento internacional, en el contexto de la agonizante Guerra Fría, el FSLN construyó un Estado nacional democrático con fuerte contenido social.

En lo político, existió un pluripartidismo integrado con sectores de todas las tendencias, que ejercieron los derechos básicos establecidos en cualquier sistema democrático representativo, a pesar de que en los momentos más intensos de la agresión estadounidense se dieran ciertas restricciones a la derecha, ante la complicidad que tuvo con la Casa Blanca, y su apoyo a la *contra*, buscando permanentemente la destrucción del proceso revolucionario y el irrespeto a las instituciones establecidas (aceptadas por ellos mismos desde un principio), así como al apoyo mayoritario que tuvo durante gran parte de la década el FSLN. Tales restricciones, sobre todo, se ubicaron en el terreno de sus medios de comunicación, particularmente con el periódico *La Prensa*, y con la negativa a realizar modificaciones a las instituciones políticas que permitieran un mayor espacio de acción a la oposición derechista.

En la economía mixta existieron tres áreas de propiedad: la del Estado, la colectiva, a través de cooperativas denominadas Área Propiedad del Pueblo (APP), y la privada. Las dos primeras se integraron básicamente con todas las propiedades y empresas confiscadas al somocismo.

En el ámbito internacional, el gobierno sandinista mantuvo relaciones exteriores plurales, no obstante su clara inclinación hacia el campo socialista. A pesar de esta postura abierta, Nicaragua fue ubicada por Estados Unidos desde un principio como un enemigo al que había que destruir, sobre todo a partir del peligro geopolítico que su ejemplo representaba, pues de ninguna forma se podían “tolerar” nuevos gobiernos populares hasta la frontera con México, aunado a que una vez desatada la agresión militar, las armas para la defensa del país llegaron desde el bloque socialista.

Entre las principales acciones de la Revolución encontramos la Cruzada Nacional de Alfabetización, el impulso a diferentes mecanismos de la democracia participativa, la construcción de una amplia red de escuelas y de hospitales, la Reforma Agraria y el reparto de propiedades urbanas; la creación de fábricas y de cooperativas con participación directa de los trabajadores, la gratuidad de la educación, el reconocimiento de los pueblos indígenas a través de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica (aunque

fueron promulgados hasta en 1987), y el acceso popular a la cultura en sus diferentes manifestaciones, entre otras tantas acciones. La mayor parte de estos avances se dio durante los primeros seis años del proceso revolucionario, pues a partir de 1985 la agresión militar estadounidense se intensificó, la guerra comenzó a afectar gravemente la economía, y el gasto social disminuyó de manera sustancial.

La Revolución Popular Sandinista creó un nuevo Estado en Nicaragua, una institucionalidad nunca antes vista. No solo se trataba de garantizar elementos sociales inexistentes en el pasado, sino un conjunto de reglas de participación política, aun a pesar de las restricciones generadas por la agresión militar estadounidense y de la lógica de la defensa del proyecto revolucionario. En suma, el país tuvo una Constitución aceptada por todos los sectores nacionales, aprobada en 1987, en la que se plasmaba finalmente una nueva concepción de la democracia, que para ese período histórico, sin duda, era de avanzada a nivel regional. García Laguardia (2001) se refiere a lo antes expuesto, cuando destaca:

Existen una serie de principios generales que permiten sostener que se define el régimen como una democracia pluralista y representativa. El artículo 7° indica que “Nicaragua es una república democrática, participativa y representativa”, el 5°, que el Estado “garantiza la existencia del pluralismo político, la economía mixta y el no alineamiento” y que el pluralismo político “asegura la existencia y participación de todas las organizaciones políticas en los asuntos económicos, políticos y sociales del país, sin restricciones ideológicas, excepto aquellos que pretenden el retorno al pasado y propugnen por establecer un sistema político similar”. En esta misma línea se fortalecía la decisión al reconocer expresamente la existencia y función de los partidos políticos en el artículo 55 que se dice que los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho a organizar y afiliarse a partidos políticos, con el fin de participar, ejercer y optar al poder, y no hay ninguna referencia a un partido hegemónico, único o guía como en los regímenes socialistas (pp. 147-148).

Fueron 11 años de transformaciones estructurales que encontraron el límite de su profundidad en la agresión económica, política y militar que la Casa Blanca impuso a Nicaragua como precio por tomar su propio camino como nación independiente. Esta agresión se desarrolló bajo la estrategia de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) -tema sobre el que profundiza Bermúdez (1987)-, que consistió en un bloqueo económico, la creación y el financiamiento de una oposición interna, civil y armada (la *contra*), y el hostigamiento político internacional. Hacia el final de la década de los 80, el gasto militar del gobierno sandinista representaba alrededor del 60% del presupuesto nacional, lo que se tradujo en un franco deterioro social ante la disminución sustancial de recursos públicos para el desarrollo, aunado esto a la crisis económica regional, marcada,

sobre todo, por el endeudamiento externo. A este período se le conoce como la *década perdida*.

Como resultado de esta táctica intervencionista, en las elecciones presidenciales del 25 de febrero de 1990 ~fijadas para noviembre de ese año, pero adelantadas para esta fecha por el FSLN como parte del proceso regional de paz, expresado en los Acuerdos de Esquipulas~ el partido sandinista pierde el gobierno frente a una candidata creada y financiada por Washington: Violeta Barrios viuda de Chamorro, Violeta Chamorro, “doña Violeta”. Estos comicios fueron considerados como los más transparentes de su historia.

Muchos elementos determinaron la derrota del sandinismo en esos comicios, pero destacan tres fundamentales: las consecuencias de la guerra de agresión de la contrarrevolución financiada por Washington, incluyendo decenas de miles de muertos y lisiados; los errores del FSLN y su gobierno frente a la conducción del proceso político; y el cansancio de la sociedad nicaragüense frente al clima de enfrentamiento y crisis económica vivido durante la mayor parte de la década de los 80. Martínez Cunill (2004) considera que:

La guerra contrarrevolucionaria, financiada y respaldada por Reagan, que corrompió todo el sistema interamericano y puso en evidencia la doble moral de la “democracia” norteamericana, comenzó a socavar los recursos materiales de una nación pobre y asediada. El FSLN, o por lo menos su Dirección Nacional que seguía sin renovarse, comete un error de apreciación que será decisivo a futuro. Pierden la brújula y no comprenden que la violencia que les había permitido tomar el poder no les permitiría conservarlo y se dejan arrastrar a una guerra de desgaste imposible de ganar. Con esto no quiero decir que no había que hacer frente a la ofensiva reaganiana, pero el drama reside en que la vanguardia omitió convertirse en un partido democrático, popular y participativo y así hacer entender a la nación nicaragüense que esa no era una guerra del FSLN, sino de todo el país.

De igual forma, el contexto internacional tuvo también una influencia determinante en la derrota electoral del sandinismo, destacando dos sucesos centrales: en primer lugar, el bloque soviético se estaba desmoronando a partir de la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, lo que implicaba una enorme pérdida de soporte político, económico y militar para el gobierno sandinista, sobre todo para seguir resistiendo el embate guerrillero de la Casa Blanca; en segundo lugar, la invasión de Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre de 1989, realizada para “detener” a Noriega y probar un nuevo armamento, que luego utilizaría en la Guerra del Golfo (contra Irak, 1990-1991), pero sobre todo para amenazar al pueblo nicaragüense, en cuanto a que si el Frente Sandinista ganaba los comicios de febrero de 1990, los *marines* podían desembarcar en su patria, como ya lo habían hecho en el pasado.

En este contexto, Nicaragua inició a partir de 1990 un período de una evidente fragilidad institucional, caracterizada por la continuación del enfrentamiento de las dos grandes fuerzas que protagonizaron el escenario político de los últimos 40 años: sandinistas y somocistas. Sin embargo, destaca que pese a las causas centrales de la derrota sandinista, reiterando el peso de la agresión de Estados Unidos, la entrega del gobierno se realizó por vías institucionales, hecho sin precedente en la historia del país, sobre todo tratándose del traspaso a una fuerza opositora. Al respecto, Ortega Hegg & Córdova Macías (1996) expresan que:

La decisión del FSLN después de su derrota en las urnas de convertirse en un partido que acepta el juego electoral como la única vía de acceso al poder, ha impactado el proceso de institucionalización, creando condiciones para la estabilidad del sistema político al rechazar la vía armada y la violencia como método de lucha y acceso al poder. Esta decisión civilista ha ratificado la acción del FSLN en 1990 de entregar el poder al perder las elecciones, lo que representa un hito en la historia del país, siendo la primera experiencia de este tipo en el presente siglo (p. 61).

La transición -tras los comicios presidenciales del 25 de febrero de 1990- estuvo marcada por sendos acuerdos para la entrega del gobierno entre el FSLN y el equipo de Violeta Chamorro, plasmados en los llamados *Acuerdos de Transición*, en los que se priorizaba la desmovilización y el desarme de la “contra”, la autonomía del Ejército y su subordinación al poder civil, la estabilidad laboral de funcionarios públicos, la seguridad jurídica de las diferentes propiedades entregadas al pueblo, y el respeto a las estructuras sindicales.

Paralelamente, del 25 de febrero al 25 de abril, fecha formal de la entrega del gobierno, desde la cúpula del FSLN se impulsó las leyes 85 y 86, que legalizaban la posesión de miles de propiedades en manos de familias beneficiadas por la Revolución a través de diferentes mecanismos. Sin embargo, en ese mismo paquete, una parte de la dirigencia sandinista se quedó con propiedades, empresas y medios de comunicación. Lo que parecía una acción normal, terminó en un verdadero desastre político que dejó profundamente cuestionada la ética de una fuerza que presumía de su integridad, y por la que en el pasado miles de nicaragüenses dieron su vida. Zibechi (2006) alude a esta situación, que marcó profundamente al FSLN:

El primer gran escándalo posterior a la retirada del poder en 1990, fue la denominada “piñata”. Se llamó así al reparto de bienes que se hizo después de la derrota, y que benefició a miles de campesinos con tierra y a pobladores de la ciudad con vivienda, pero que escondió también el reparto ilícito de capital entre altos funcionarios sandinistas que resultaron ilegalmente enriquecidos. Ya en 1992, 30 grandes empresas eran propiedad del FSLN o de sus dirigentes. Y con el tiempo, la cúpula del sandinismo continuó enriqueciéndose gracias a pactos y alianzas con los poderosos del país.

En realidad, la “piñata” representó la punta del *iceberg* de prácticas de corrupción y privilegios que la dirigencia sandinista había logrado mantener en segundo plano durante la etapa final de su gobierno, sobre todo en la lógica de priorizar todos los esfuerzos para enfrentar la agresión armada de Washington, relegando en todo momento la autocrítica en torno a sus diferentes errores. Ernesto Cardenal (2004), uno de los grandes críticos de estas irregularidades, expresaba:

Hubo el robo de las propiedades del Estado que hicieron los dirigentes para adjudicarlas al Frente Sandinista, y el robo de las propiedades del Estado que los dirigentes hicieron para adjudicárselas a ellos mismos, y posteriormente el robo de las propiedades del Frente Sandinista que los dirigentes también se adjudicaron. Así fue como la mayoría de los miembros de la Dirección Nacional (aunque no todos) y otras autoridades del partido o altos funcionarios del gobierno y líderes sindicales se quedaron con cuentas bancarias, casas, vehículos, empresas comerciales, supermercados, haciendas cafetaleras y ganaderas, ingenios de azúcar, fincas bananeras, restaurantes, televisión, radios, empresas comercializadoras de carne y de banano, y empresas financieras y bancarias. El pueblo fue ajeno a todo esto (p. 595).

Lo que el sandinismo estaba perdiendo era el Poder Ejecutivo, la administración formal del Estado, pues el poder real continuaba en sus manos. El mando del Ejército, de la Policía y del Poder Judicial, buena parte de la burocracia del Estado, así como importantes medios de comunicación, empresas y las más grandes organizaciones de masas del país, quedaban bajo el control del FSLN. (René Herrera, en conversación en 2008 expresaba: El hecho es que perdieron el gobierno, no el poder. En las estructuras de cada secretaría, de cada poder del Estado, la estructura del Frente quedó ahí; lo que hicimos los que ganamos en el 90 para acá es colocar a nuestras gentes en la parte superior, pero en la estructura formal el Frente siempre estuvo en el gobierno. Hoy lo que hemos visto es que sus jueces pasan a magistrados, que los funcionarios de cada ministerio pasan a ministros, pero estuvieron siempre ahí, enclave en el Ejército, enclave en la Policía, enclave en el Poder Judicial y enclave en la burocracia. Nunca perdieron el poder, perdieron la gestión gubernamental).

Aún con el poder real en manos del FSLN, Nicaragua deja de tener el sello del sandinismo a partir de hechos concretos e irreversibles. Si bien el Estado estaba nutrido ampliamente por los *cuadros* sandinistas, la jefatura de los diferentes espacios empezó a marcar la diferencia. Por ejemplo: las Fuerzas Armadas cambian su denominación de Ejército Popular Sandinista (EPS) a Ejército de Nicaragua; la Policía Sandinista se convierte en Policía Nacional; la política económica y social es modificada sustancialmente, incorporándose de lleno al camino del neoliberalismo. Nicaragua se integra al conjunto de países latinoamericanos incondicionales de Estados Unidos, que para 1990 reforzaba

su hegemonía en la región, aparentemente hasta 2006, cuando regresa Daniel Ortega a la presidencia.

El panorama del país se modifica de manera radical después de la Revolución. No solo se interrumpe un proceso de transformación acotado por el intervencionismo estadounidense, sino que se establece un sello generacional que abandona sustancialmente los motivos para luchar de forma colectiva, y traslada sus esfuerzos para sobrevivir de forma individual en el nuevo esquema neoliberal que la derecha neosomocista termina imponiendo.

A pesar de esta nueva identidad conservadora que permea al país, se da una continuidad en la democracia creada por la Revolución en su vertiente representativa, cumpliendo a cabalidad las citas electorales establecidas por la Constitución, a pesar de los enconos y de los enfrentamientos políticos, hasta que se da el escenario de las elecciones de 2011, en las que ignorando lo establecido en el texto constitucional se impone la reelección de Daniel Ortega.

La Nicaragua posrevolucionaria incorporada de lleno al neoliberalismo, también se convierte en el país de la democracia pactada por las elites, esto es, una democracia limitada y restringida, de la cual se desprendió paulatinamente una cultura política totalmente alejada de los parámetros participativos y populares que la Revolución estaba impulsando en los años 80.

Las modificaciones de la democracia nicaragüense, a partir de 1990 -en lo referente a la pérdida de sus elementos participativos-, son observables desde la perspectiva de Norbert Lechner (2003) en torno al concepto que desarrolla como *democracia restringida*, en el cual enfatiza que esta se limita únicamente a la celebración de elecciones periódicas, sin ningún tipo de participación colectiva en torno a las decisiones de quienes son seleccionados para gobernar, sobre todo en la época neoliberal. Así, señala:

En los países latinoamericanos (como en otras partes) se tiende a restringir la democracia electoral (elección de autoridades políticas y la correspondiente competencia entre los partidos) y paralelamente fortalecer el poder ejecutivo para que pueda imponer libre de presiones populares los <<imperativos>> de la modernización económica.

Guillermo O'Donnell (1994) -quien sostiene el concepto de *democracia limitada*- define los niveles de la democracia a partir del cumplimiento de un conjunto de normas con las cuales esta puede valorarse. Esta visión forma parte de una corriente de la ciencia política en la que destacan las ideas de Bobbio (1985) y de Dahl (1989), para quienes se puede hablar de democracia en un país o en un contexto determinado, sí y solo si se cumplen los preceptos señalados.

De acuerdo con Dahl (1989), el ideal de democracia se condiciona a los siguientes requisitos:

1. Libertad de asociación; 2. Libertad de expresión; 3. Libertad de voto; 4. Elegibilidad para el servicio público; 5. Derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo; 5a. Derecho de los líderes políticos a luchar

por los votos; 6. Diversidad de fuentes de información; 7. Elecciones libres e imparciales; 8. Instituciones que garanticen que la política del gobierno depende de los votos y demás formas de expresar las preferencias” (p.15).

Desde una perspectiva crítica de la democracia, consideramos que esta no puede reducirse a un conjunto de normas procedimentales y requisitos generales, ignorando además las particularidades de las realidades nacionales latinoamericanas. La democracia implica una plena participación política de la sociedad, pero también una igualdad social, esto es, democracia social y económica, tal como lo plantea Roitman (2005):

Todos los adjetivos propuestos en el debate dominante no contemplan a la democracia como social y económica. Aunque señalan que de la democracia política se derivan aspectos sociales y también económicos, defienden que en ningún caso, la democracia es esencialmente una categoría histórico-social determinada política, social y económicamente. El ejemplo más claro de esta propuesta lo constituye Angel FlisFlisch cuando señala que la democracia debe responder a ciclos de representación donde en unas ocasiones se vaya a favorecer la acumulación y en otras la redistribución. Unica (sic) manera de lograr la gobernabilidad democrática, realizar el progreso y garantizar el orden (p. 146).

Cuando hacemos referencia a una *democracia tutelada* en Nicaragua, destacamos su lógica limitada y restringida, en la que la inclusión de lo económico y de lo social queda cancelada, sobre todo por la transformación del Estado hacia el modelo neoliberal, aunado a su esencia elitista. López y Rivas (2010), plantea al respecto que:

El proyecto conservador pretende que haya democracia, sin justicia social, sin liberación nacional, sin derecho a escoger una política económica distinta de la neoliberal, ni un gobierno democrático con fuerte apoyo popular. Propone una democracia sin opciones en la que vote la minoría de los ciudadanos para escoger entre un pequeño grupo de políticos profesionales cuyas diferencias ideológicas y programáticas son insignificantes.

Compartimos la concepción de una *democracia incluyente*, en la que estando presentes los “requisitos” políticos de una plena participación ciudadana, también tengan la misma importancia lo económico y lo social, a partir de lo cual se podría hablar de la existencia de una verdadera democracia, esto es, la plena igualdad política y social de todos integrantes de una nación.

Además, también utilizamos la noción de una *democracia pactada*, para el caso nicaragüense, entendiendo su apropiación ilegítima (no ilegal) por parte de una elite política, una oligarquía multifacética, enfrentada superficialmente en el discurso y en algunos planteamientos ideológicos, pero compartiendo plenamente la concepción sobre el poder y la forma de utilizar la bandera de la democracia para proteger sus intereses.

La ruptura del Frente Sandinista

Tras la derrota electoral del 25 de febrero de 1990, el FSLN inicia un complejo camino de descomposición interna que lo llevará cinco años después a una división que no tuvo marcha atrás, y que, con el paso del tiempo, se profundizó.

Para entender la ruptura del Frente Sandinista habrá que ubicar el origen de su propia formación, con la existencia de tres corrientes históricas que finalmente se unificaron en las postrimerías de la caída de la dictadura somocista, en 1978. La Guerra Popular Prolongada (GPP), la Tendencia Proletaria (TP) y la Tendencia Tercerista o Insurreccional (TT o TI), fueron surgiendo en distintos momentos dentro del FSLN desde 1961, año de su aparición formal. Aunque las diferencias ideológicas y estratégicas impidieron que tales corrientes actuaran de manera conjunta, las tres coexistían dentro de la misma organización, con mínimos niveles de coordinación.

La GPP ubicaba su fuerza fundamental en el campesinado y en las regiones agrarias, y seguía la táctica de una acumulación paulatina y permanente de fuerzas en este entorno, a partir del foquismo (estrategia que surgió como resultado de una perspectiva distorsionada de la experiencia cubana), para después llevar la lucha hacia las ciudades. La TP planteaba a los obreros como la vanguardia del movimiento, priorizando su labor en las ciudades y con este sector, por medio de la guerrilla urbana. Y la TT o TI, en realidad surge como un punto de equilibrio entre las dos anteriores, enfatizando la orientación de la Revolución hacia la unidad de todos los sectores sociales, incluso abriendo el abanico a otros espacios políticos opositores a la dictadura, como los conservadores y su ámbito empresarial, a partir de una estrategia que llevaría el grueso de la lucha armada contra la dictadura hacia los centros urbanos. Esta corriente será la que finalmente se convierta en hegemónica dentro del FSLN, y autora de las acciones militares claves que llevan a la derrota de Somoza. Martí i Puig (2004), enfoca así las tendencias:

La Tendencia Proletaria y la Tendencia Guerra Popular Prolongada lideraron las alianzas en las que se integraban partidos de izquierdas y organizaciones de carácter popular. La Tendencia Tercerista, por su lado, estableció múltiples conexiones con sectores de la oposición civil moderada y creó una amplia red de contactos internacionales (p. 141).

A partir de 1978, en una reunión que unifica a las tres tendencias, se conforma una Dirección Nacional conjunta, colegiada, con tres comandantes de cada expresión (GPP: Tomás Borge, Bayardo Arce y Henry Ruiz; TP: Luis Carrión, Jaime Wheelock y Carlos Núñez; y TT: Humberto Ortega, Daniel Ortega y Víctor Tirado López). Esta Dirección Nacional conjunta será la que dirigirá el último período de la lucha. Desde el 19 de julio de 1979, y a lo largo de los 11 años de gobierno revolucionario, la distribución del poder se dará

bajo la misma lógica, aunque el peso del liderazgo recayó en los terceristas, bajo la figura de Daniel Ortega. Se forma así una unidad interna que se convirtió, con el paso del tiempo, en la justificación central para negar cualquier tipo de democratización dentro de las filas del sandinismo, ante la adversidad de los conflictos en turno.

(Martínez Cunill, en conversación en marzo de 2010, señala que el vicio de origen está en que el FSLN se negaba a abandonar sus estructuras y costumbres verticales, propias de la guerra, y en lugar de abrirse a una militancia que daba sus primeros pasos democráticos, se encapsulaba en una dirección nacional jerárquica y progresivamente autoritaria, que a nombre de una necesaria unidad cultivaba el culto a la personalidad. La unidad, en lugar de ser motor de un nuevo partido, se convirtió en un pretexto inmovilizador para negar la democracia al interior del partido, ya que toda eventual crítica ponía en peligro a la unidad).

Este es el origen concreto de la posterior ruptura del sandinismo. A pesar de la postura compartida en torno al ejercicio del poder (pluripartidismo, economía mixta y no alineamiento internacional), las diferencias de las tres tendencias se proyectaban en las políticas públicas del gobierno sandinista, esto es, a pesar de ubicarse bajo esos parámetros centrales, en la práctica cada ministro o viceministro desarrollaba su gestión de acuerdo con los postulados de su tendencia. Además, la lógica de las *tres partes*, incluso, afectaba la propia gestión gubernamental.

Hassan (2009), expone así el origen de lo antes referido:

Por un número de causas –entre las que figura a la cabeza la necesidad de que los miembros de la Dirección Nacional mantengan sus respectivas cuotas de poder– muchas decisiones importantes se vuelven lentas, otras son contradictorias, y no pocas son cambiadas drásticamente de la noche al día, incluso, algunas decisiones nunca llegan a tomarse. Es obvio que tan torpe proceso decisional trae gravísimas consecuencias a la marcha, en todos los órdenes, del país. No veo cómo esto pueda ser resuelto (p. 435).

Varios estudios coinciden en que este factor influyó en la derrota y en la división del FSLN, aunque sin duda los efectos de la guerra de agresión estadounidense marcaron el desenlace final de la RPS, que llevó al desplazamiento de los sandinistas del gobierno, a la llegada de la derecha neosomocista y a la imposición del modelo neoliberal, que terminó con mucho de lo alcanzado por la Revolución, dejando al país en la extrema pobreza y en una completa dependencia económica del exterior.

Tras la derrota electoral del 25 de febrero de 1990 y luego de la entrega formal del gobierno el 25 de abril, dentro del FSLN comienzan a generarse debates, reflexiones y críticas en torno a lo sucedido, y sobre todo con respecto al futuro de la organización. Es el inicio de la ruptura. Aunque ya había discusiones

internas, sin duda la debacle en las elecciones fue el detonante central para que estas se profundizaran y, sobre todo, para que se hicieran de manera pública.

(Mónica Baltodano, en una conversación en abril de 2008, expresa: A partir de la derrota electoral, yo considero que empezaron los problemas de conducción del Frente Sandinista, una parte de la gente se desmoralizó, algunos dirigentes incluso se desmovilizaron. Y comenzó un proceso de transición en el que el país se reinstaló plenamente a la economía de mercado. Ya en el mundo estaban de moda las privatizaciones, pero aquí, en Nicaragua, pues tuvo mayor impacto, porque nosotros habíamos hecho un proceso muy importante de nacionalización. Comenzó un proceso que yo le llamo una transmutación, el cambio del Frente Sandinista y de algunos dirigentes; a mi juicio, algunos empezaron a pensar más en el cinismo que en los objetivos, que en los principios, que en las maneras en que habíamos levantado durante tantos años la lucha, porque la lucha fue muy larga, casi 20 años, para poder derrotar a la dictadura).

El 17, el 18 y el 19 de julio de 1991, el Frente Sandinista, ya inmerso en el debate interno, realiza su Primer Congreso Nacional para redefinir sus estructuras, renovar la Dirección Nacional y rediseñar los parámetros programáticos ante el nuevo contexto político nicaragüense, ahora desde la oposición.

En ese congreso, el primero que se realizaba desde la fundación del FSLN, después de 30 años, y de su transformación de estructura político militar (pues nunca dejó de ser un frente) a una de carácter partidario, con instancias internas teóricamente democráticas, se dieron ciertos avances, como el fortalecimiento de la Asamblea Sandinista en su calidad de autoridad máxima entre congresos, y una modesta ampliación de la Dirección Nacional. Sin embargo, la semilla de la ruptura ya estaba sembrada por la lógica de mantener las estructuras de dirección bajo la hegemonía de la corriente de Daniel Ortega, quien impulsó una férrea defensa de sus espacios al interior del Frente, bloqueando a la corriente crítica que encabezaba Sergio Ramírez, ex vicepresidente, y, en ese momento, jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional.

Las coordenadas de la discusión giraron en torno a dos aspectos centrales: la forma en que se concebía el liderazgo del sandinismo en las nuevas circunstancias, la estructura de la dirección y la estrategia de lucha en el plano nacional, y la visión general del objetivo sandinista en el corto, en el mediano y en el largo plazo, esto es, cómo ubicar las coordenadas de la batalla política frente a la nueva administración neoliberal de Violeta Chamorro.

Así, entre el congreso nacional de 1991 y la sesión extraordinaria de esa misma instancia realizada en 1994, se van tejiendo dos grandes corrientes al interior del Frente, las cuales, finalmente, protagonizarán la división: *Izquierda Democrática Sandinista*, encabezada por Daniel Ortega, y *Por un Sandinismo de las Mayorías*, de Sergio Ramírez. Ferrari (1992) se refiere a esa situación, y expresa:

El debate abierto con respecto a la democratización, incluye, sin embargo, dos percepciones. Una, que subraya limitaciones, producto sobretodo

(sic) de inexperiencia y en el marco de un proceso de transición que no culmina en julio... La segunda mucho más crítica, que considera a la democratización como “un proceso trunco”; subraya la frustración producida internamente por las imperfecciones, critica el verticalismo de la dirigencia -y la escasa permeabilidad de una democracia realmente participativa desde abajo- y se manifiesta escéptica por las posibilidades futuras del FSLN (pp. 103 y 104).

La ruta de los debates públicos en el contexto del Congreso Extraordinario de 1994, se centró en las diferencias con respecto a la estrategia de lucha, la reformulación programática y la estructura interna, las cuales se resumen a continuación:

Diferencias políticas entre las dos corrientes

| Estrategia del Frente Sandinista | |
|--|---|
| <p><u>Izquierda Democrática Sandinista</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Movilización popular sin cuartel • Mayor beligerancia de la movilización, sin dejar a un lado el diálogo | <p><u>Por un Sandinismo de las Mayorías</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento del parlamentarismo • No a la promoción o justificación de la violencia; la lucha debe darse bajo el marco de la Constitución |
| Retorno al poder | |
| <p><u>Izquierda Democrática Sandinista</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Por la vía electoral, pero es un asunto de vida o muerte para la Revolución | <p><u>Por un Sandinismo de las Mayorías</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Por la vía electoral a través de la recuperación del consenso popular |
| Plataforma política del FSLN | |
| <p><u>Izquierda Democrática Sandinista</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Restablecimiento, defensa y perfeccionamiento del Estado de Derecho y Justicia Social bajo una orientación socialista | <p><u>Por un Sandinismo de las Mayorías</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Construir una sociedad justa, solidaria y democrática, que sea firme frente a toda forma de opresión social |
| Estructura interna | |
| <p><u>Izquierda Democrática Sandinista</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantener el principio de dirección colegiada, partido abierto a todos los sectores, renovación y revocación de sus autoridades | <p><u>Por un Sandinismo de las Mayorías</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirigencia sin caudillismos, respetuosa de los órganos colectivos, en consulta permanente con las bases, espacios de participación, debate y discusión |

* **Elaboración propia.** Basado en los documentos centrales de ambas corrientes. Tomado y ampliado de mi libro *La Ruptura del Frente Sandinista*.

Sin embargo, la confrontación verdadera se concentró entre los dirigentes de ambas corrientes, sobre todo a través de los medios de comunicación que habían quedado en manos del FSLN, llegando a descalificaciones personales, calumnias y críticas políticas sobre las actuaciones en el pasado revolucionario.

Una parte importante de los ataques de la corriente de Daniel Ortega a la de Sergio Ramírez, se dirigió contra las posturas que este último asumió como jefe parlamentario del sandinismo, con el apoyo de la mayoría de los diputados, ante el paquete de reformas constitucionales que se estaba negociando con el gobierno de Chamorro y sus legisladores, en aras de darle forma política a la transición y eliminar ciertos vestigios del llamado centralismo democrático, imperante durante la década de los 80. Ortega Hegg & Córdova Macías (1996) se refieren a la situación creada a lo interno del sandinismo, y expresan:

Las reformas constitucionales rompieron los lineamientos tradicionales de los partidos políticos y la polarización sandinismo-antisandinismo; esto se hizo factible por la división del FSLN en un sector al que se le ha denominado <<ortodoxo>>, y un sandinismo democrático ~con mayoría en la Asamblea Nacional frente al sector ortodoxo~, y que apoyó e impulsó decididamente las reformas. La alianza de este sector democrático del FSLN, convertido hoy en el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), con la Unión Demócrata Cristiana (UDC), partidos liberales y conservadores de la UNO, y otras fuerzas políticas, confrontaron al llamado Grupo de Centro (diputados pro-gobiernistas), y el sector ortodoxo del FSLN, que, pese a declaraciones de apoyo a las reformas, ha tenido hasta hoy una posición contraria, y ha acusado a los miembros del MRS de traidores al FSLN y al pueblo por su apoyo a las mismas (pp. 63-64).

Después del Congreso Extraordinario de 1994, en el cual Sergio Ramírez fue separado de la Dirección Nacional electa en 1991, el FSLN quedó completamente bajo la hegemonía de Daniel Ortega, quien se mantuvo como Secretario General, y sus cuadros más cercanos en los puestos más importantes. Así, las contradicciones internas por fin estallaron con la profundización de los ataques personales contra Sergio Ramírez, *obligándolo*, finalmente, a la separación. Ramírez (1996) lo expresa de esta manera:

Mi ruptura con el FSLN, y la de mis compañeros, con quienes nos fuimos a formar un nuevo partido, el MRS, está historizada en estos hechos, que son la materia de este libro. Y esa ruptura tuvo antes que nada motivos éticos. No podría explicarlo de otra manera. Los presupuestos fundadores de la revolución habían sido rotos y la lucha popular había pasado a ser un concepto retórico detrás del que se ocultaban ya los negocios y los vicios de la política tradicional. La defensa de cuotas de poder, para sostenerse de alguna manera en el poder, había abierto ya grandes boquetes a la credibilidad del sandinismo oficial, que empezaba

a hacer agua sin remedio. Y los grandes presupuestos morales del inicio: fraternidad, solidaridad, entrega, desprendimiento, humildad, rechazo a la acumulación de bienes materiales, habían sido malversados (p. 20).

Tras el convulsionado Congreso Extraordinario y el inicio de las renuncias al FSLN, el 10 de septiembre de 1994 se anuncia la formalización del Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Entre esta fecha y los meses siguientes, sale del Frente el grueso de la militancia sandinista ubicada en el ámbito intelectual, académico y artístico, además de una modesta porción de bases en diferentes municipios del país.

Personalidades como los exministros y hermanos Ernesto y Fernando Cardenal, la escritora Gioconda Belli, los comandantes Luis Carrión, Henry Ruiz y Dora María Téllez, el periodista Carlos Fernando Chamorro, y el dirigente de esta corriente, Sergio Ramírez, constituyen parte de los fundadores del MRS, el nuevo partido político que aparece en Nicaragua compitiendo en las elecciones presidenciales de 1996.

El debate interno en el Frente, planteado inicialmente para mejorar la organización bajo una lógica democrática, terminó con una división que solo reflejó el peso de los intereses individuales y de grupo frente a las necesidades políticas que la sociedad nicaragüense, sobre todo aquella de filiación sandinista, esperaba de esta fuerza en el contexto de la ola neoliberal que pulverizó toda prioridad social para Nicaragua en un corto tiempo.

La discusión política inicial entre las dos corrientes terminó en una guerra de acusaciones personales entre sus más reconocidos dirigentes, y la reconstitución programática quedó en un conjunto de postulados que al final no tuvieron peso en preservar la otrora hegemonía política nacional, incluso, dejando a un lado el liderazgo que había alcanzado el sandinismo dentro de la izquierda latinoamericana. Así lo expresa Pérez Baltodano (2005):

El esfuerzo teórico de enriquecer al sandinismo como filosofía y como visión del desarrollo social nicaragüense fue prácticamente abandonado a partir de la derrota electoral de 1990. El FSLN mantuvo su postura y su discurso revolucionario durante la etapa inicial de la transición, para luego irse acomodando -pragmática y resignadamente- a la nueva realidad nacional y al peso del neoliberalismo (p. 25).

Ese debate también es importante ubicarlo en el contexto internacional de la caída del bloque socialista de Europa del Este y la desintegración de la URSS, así como en el proceso de la imposición del neoliberalismo en el mundo, destacando la región latinoamericana. Era la época del llamado fin de las ideologías y de la historia, que daba cuenta que fracasado el socialismo, el mundo no tenía más horizonte que el *providencial* sistema capitalista.

En esa crisis ideológica de la izquierda mundial, el FSLN no logró superar las visiones encontradas a partir de esa coyuntura, y tampoco vislumbrar una

postura renovada que rescatara sus contenidos históricos, ubicándose en la nueva realidad política internacional.

Con el paso del tiempo, el Frente se fue convirtiendo en un partido *controlado* por Daniel Ortega, quien permanentemente fue el candidato presidencial, hasta ganar las elecciones en 2006 e imponer su reelección en 2011, sin dejar de ser el Secretario General del FSLN, abandonando los principios que lo habían identificado durante la Revolución Sandinista, y ubicado como uno de los principales referentes de la izquierda latinoamericana.

Un estudio de Nítlapan (2007) señala que:

Las sucesivas crisis por las que ha atravesado el FSLN después de la derrota electoral de 1990 -no nacidas precisamente de reflexiones sobre principios o valores políticos ni de debates sobre programas o estrategias de izquierda, sino de luchas por imponer el poder de Ortega, y concluidas con la separación de dirigentes o el aislamiento de los “disidentes”, crisis caracterizadas por el abandono de la educación política de las bases y por el pragmatismo de las decisiones de la cúpula, incluido el indigno pacto con Alemán- condujeron a la burocratización del FSLN y a la entronización y el culto a la personalidad de Daniel Ortega, reduciendo el actual sandinismo del FSLN a “danielismo” u “orteguismo” (p. 6).

La ruptura del Frente Sandinista constituyó un parteaguas en la realidad política nicaragüense. A pesar de que el grueso de la militancia se mantuvo en el FSLN, el MRS se convirtió en una especie de referente ético y moral, pese a las claras contradicciones que mostró en el futuro.

Otra historia se fue tejiendo con el paso de los años para el sandinismo dividido, pero aquel partido que cada 19 de Julio entonaba orgulloso su himno, en la entonces Plaza de la Revolución, el partido que reivindicaba a sus héroes y mártires que caían luchando contra el imperialismo yanqui, el *enemigo de la humanidad*, ya no volvió a ser el mismo, y tampoco logró enarbolar con similar orgullo su histórica bandera *rojinegra*. El *destino* pintó diferente.

El MRS, un difícil camino

El Movimiento Renovador Sandinista (MRS) surge el 21 de mayo de 1995, sellando la ruptura del Frente Sandinista. Impulsado inicialmente por Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal, Dora María Téllez, Luis Carrión, Mirna Cunningham y Carlos Fernando Chamorro, entre otros, en el MRS se integra el grueso de la intelectualidad sandinista, líderes de Organismos No Gubernamentales, movimientos sociales y diversos sectores de la cultura.

El nuevo partido sandinista se formó a nivel nacional, participando en las elecciones presidenciales de 1996, con Sergio Ramírez como candidato. En esos comicios, a pesar de encontrarse en un principio encabezando algunas encuestas, termina en un lejano lugar, ante la *tradicional* polarización política

nicaragüense que se dio en esa ocasión entre el FSLN y el neosomocista PLC, obteniendo tan solo un 0.44% de los votos.

En los comicios de 2001, el MRS establece una alianza con el FSLN bajo el nombre de Convergencia Nacional, en la que participaron otras fuerzas políticas, decisión, sin duda, controvertida, tomando en cuenta los motivos que lo llevaron a separarse del Frente, y la fuerte crítica al pacto político establecido entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, apenas dos años antes, en 1999. También polémicos fueron los términos de la alianza, pues el MRS la aceptó sin tener candidatos propios. Sobre esa decisión, a la cual por cierto Sergio Ramírez se opuso públicamente, Dora María Téllez explica las razones centrales en entrevista que concede a Envío (2001):

Destruída la Tercera Vía, el MRS decide entrar a la Convergencia por las mismas razones con que enfrentamos el pacto. Queríamos abrir espacios a una plataforma propositiva al sistema institucional surgido del pacto. Se lo planteamos con claridad al FSLN que el MRS siempre había sido partidario de una alianza amplia y plural que acogiera a fuerzas diversas que le presenten al país una propuesta nacional. El FSLN dijo tener esa misma voluntad. El embrión de la Convergencia que ya existía tenía esa misma disposición. En tercer lugar, le planteamos al FSLN que el MRS tuviera participación en los procesos de toma de decisión en un eventual gobierno y en la Asamblea Nacional. El FSLN decidió no negociar ningún espacio en la Asamblea, pero sí se comprometió a darnos espacios en un futuro gobierno (p. 38).

Para las elecciones de 2006, el MRS se presentó separado del FSLN, con una alianza en la que se integró una nueva escisión del Frente, el Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MRS), mejor conocido como RESCATE, encabezado fundamentalmente por los comandantes Henry Ruiz, Víctor Tirado López y Mónica Baltodano, así como por otros cuadros históricos, como Víctor Hugo Tinoco y Herty Lewites, quien fuera Alcalde de Managua y candidato presidencial hasta su muerte (durante la campaña). Fue relevado por Edmundo Jarquín.

El Centro de Investigaciones de la Comunicación, CINCO (2006), presenta la siguiente conclusión, referida a la ruptura FSLN-MRS:

El MRS actual se conforma no sólo de una ruptura con el FSLN, sino también a partir de la rearticulación de sectores que han recorrido un camino político dentro y fuera de su partido de origen. La lucha interna en el FSLN por abrir las oportunidades para denominación de candidaturas presidenciales diferentes a la de Daniel Ortega, llevaron a Herty Lewites a asumir el liderazgo de la corriente, su pronta separación del partido y su lanzamiento como candidato a la presidencia. Esta posibilidad hizo converger en una alianza a las sucesivas olas de críticos y sectores sociales que en estos años habían luchado por aumentar la

democracia, el pluralismo, los derechos y la participación desde una perspectiva autónoma (p. 3).

En estos comicios, Lewites se encontraba en las primeras posiciones de las encuestas, compitiendo con Ortega (FSLN), Montealegre (ALN) y Rizo (PLC), pero su repentina muerte desplazó a la alianza a un lejano cuarto lugar. Aun así, en estas elecciones el MRS obtuvo su mejor votación y logró cinco diputados, estableciendo un grupo parlamentario en la Asamblea Nacional, aunque para abril de 2009 este, finalmente, se desintegró ante la salida de tres legisladores, por diferentes motivos.

En particular, Mónica Baltodano, una de las principales dirigentes del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, se separó de la bancada del MRS el 15 de abril de 2009, bajo un conjunto de señalamientos críticos contra esta última fuerza. En un Comunicado emitido la fecha antes citada, se destaca el hecho de que:

(...) en ocasión de las elecciones municipales del 2008 cuando el RESCATE llamó a VOTAR NULO, el partido MRS y su vocero llamaron a votar por el PLC. Esta nueva contradicción política rompió los límites que definían aquella alianza: luchar contra el pacto, los pactistas y la corrupción pública. Por tanto, la Alianza en la práctica desapareció... Las posiciones de Edmundo Jarquín como vocero del MRS sobre los asuntos electorales de El Salvador, rebasaron nuestra paciencia al conocer la licencia con la que asumió su papel práctico de respaldo a ARENA.

Así, en términos generales, el MRS se ha mantenido como una fuerza política nacional con reducida fuerza electoral que no ha logrado diferenciarse sustancialmente del propio FSLN, y mucho menos contrarrestar la hegemonía de Daniel Ortega como representante del sandinismo.

Aunado a ello, el MRS tampoco ha logrado consolidarse políticamente bajo una alternativa programática sólida, que pueda reivindicar la esencia sandinista con los nuevos tiempos a través de una propuesta que convenga a la población de apoyar electoralmente a esta vertiente del sandinismo. En el proceso de 2006, esta situación quedó evidenciada cuando Lewites encabezaba las encuestas, pero tras su muerte, las preferencias por el MRS disminuyeron notablemente, a pesar de que Edmundo Jarquín y Carlos Mejía Godoy asumieron las candidaturas para Presidente y Vicepresidente, respectivamente. Baltodano (2007), se refiere a esos hechos de la siguiente manera:

La Alianza MRS integrada por distintas agrupaciones y movimientos políticos con distintos niveles de radicalidad se expresó como una fuerza que ofrecía acabar con el pacto, la corrupción, con la subordinación de las instituciones a la lógica de los caudillos. Pero no se presentó con un programa que incorporara una propuesta alternativa a los gobiernos neoliberales, dispuesta a acabar con la subordinación al consenso de

Washington. Si bien denunciaba a los gobiernos anteriores, el uso del aparato del Estado para favorecer a las elites empresariales, en especial del sector financiero, y ofrecía una política tributaria y distributiva más justa, no se interesó en perfilarse como una fuerza de izquierda (p. 3).

Para el proceso electoral de 2011, el MRS se diluye en la alianza opositora que postuló a Fabio Gadea, candidato del derechista Partido Liberal Independiente (PLI), acción con la cual ideológicamente se disolvió en una plataforma común y políticamente dispersa, con planteamientos que en realidad terminaron de *lapidar* su esencia originaria.

Esta es la ruta que siguió el MRS como formación partidista, con importantes altibajos, una política programática difusa, un desarrollo atacado permanentemente por la maquinaria de los medios de comunicación del FSLN, y un pragmatismo que ha difuminado la fuerza y los motivos que inspiraron su creación.

Las nuevas configuraciones políticas del FSLN

Tras la salida de las corrientes que desembocaron en el MRS y después en el RESCATE, el conjunto de dirigentes que siguieron en el Frente Sandinista se plegaron de forma completa al liderazgo de Daniel Ortega -destacando entre ellos Tomás Borge, Bayardo Arce, René Núñez, Lenín Cerna, y otros de menor dimensión política-, quien se mantiene como Secretario General de la organización, cargo que ocupa desde 1979.

En realidad, el Frente se fue reduciendo de manera paulatina a la figura de Daniel, a sus discursos y a sus acciones. Muchos lo seguían por su liderazgo, otros por intereses pragmáticos, pero finalmente quienes se mantuvieron en el Frente -la mayor parte de la dirigencia y la gran mayoría de las bases-, en los hechos, se transformaron de sandinistas en danielistas. Así lo indica Baltodano (2007):

El FSLN sin los referentes claves de un partido de izquierda, ideología, conducción colectiva, principios, formación política, debate político, cuenta con una base que simplemente se adhiere a la tradición de ser sandinista a partir de la figura de Ortega. *Hoy se puede decir que hay sectores que son más danielistas que sandinistas y casi otorgan a Ortega categoría de deidad.* Este fenómeno unido a la cooptación por dependencia de puestos y prebendas, fortalecen la sumisión y explican la capacidad para mantener el status quo al interior del partido (p. 3).

Pero el proceso que desemboca en el control total por parte de Daniel Ortega no se genera a partir de la ruptura interna, sino que data de las formas políticas que adquirió la propia Revolución Sandinista durante la década de los 80, y está relacionado directamente con una errónea interpretación del *centralismo democrático*, “modelo político” emanado de la forma en que la

burocracia guió los destinos de la Unión Soviética durante su existencia, y que derivó en concentrar el poder en un solo hombre y en un pequeño círculo a su alrededor, esto es, en términos estructurales, la fusión partido-Estado con un individuo al frente.

La propia dinámica de resistencia frente a la agresión militar estadounidense así lo exigía, pero el problema es que se fueron perdiendo las prácticas de la democracia participativa que en un principio existieron, como los famosos encuentros *De cara al pueblo*, en los que la dirigencia sandinista consultaba la opinión social a través de actos de intercambio directo con la población.

Los líderes se fueron alejando de esta modalidad de participación, y las grandes decisiones comenzaron a concentrarse, hasta el grado de recaer fundamentalmente en Daniel. Bajo este mecanismo, el Comandante comenzó a capitalizar su popularidad a través del ejercicio unipersonal del poder que esa realidad permitía, aunado al importante apoyo que recibía no solo de los aliados externos, sino también del amplio movimiento de solidaridad que existía a nivel mundial con la Revolución Popular Sandinista y su líder. Baltodano (2007) observa así la transformación ocurrida en el FSLN:

De la conducción colectiva se involucionó hacia el caudillismo de Daniel Ortega, quien termina controlando completamente el aparato del partido y las direcciones de las organizaciones populares afines. El control fue posible gracias a la sucesiva expulsión y toma de medidas represivas contra quienes disientan de su línea y forma de operar. Además de ser el único secretario general del partido, desde 1979, Daniel llegó a establecer el principio de que sólo él puede ser el candidato del FSLN, prácticamente para él “el partido soy yo”. Pública y oficialmente ha declarado que él es el eterno candidato porque sin él “solo queda el caos para el sandinismo” (p. 2).

El Frente también se va desdibujando ideológicamente, perdiendo el sustento que lo había caracterizado durante la Revolución y como gobierno. Las ideas centrales que tenían cierta cercanía con el socialismo desaparecieron luego de la derrota electoral de 1990; además, su esencia libertadora se diluyó por completo en el trajinar electoral, caracterizado por el pragmatismo que vivió la organización en las sucesivas contiendas presidenciales de 1996, 2001, 2006 y 2011, y por la centralización del poder interno por parte de Daniel Ortega. Martí i Puig (2009) destaca que:

En el período 1996-2006 se dio un proceso creciente de concentración del poder en las manos de Daniel Ortega y su entorno informal (llamado también “anillo de hierro”), reduciendo drásticamente la influencia de los cuadros partidarios y de los miembros. Un hecho gráfico -y más que significativo- de este proceso fue el traslado de la sede del FSLN en la misma casa (en la parte posterior) del Secretario General, Daniel Ortega,

y la relevancia que han adquirido progresivamente su mujer, Rosario Murillo, y sus hijos en el FSLN (p. 119).

En plena Revolución, el discurso de la dirigencia sandinista hacía referencia a la justicia social, al desarrollo productivo para beneficio del pueblo, a la propiedad colectiva tanto de la tierra como de los medios de producción, al fomento al cooperativismo, y al papel central del Estado en la economía como regulador principal y actor preponderante. Después de la derrota electoral de 1990, la postura central se desplaza al ámbito contrario, y se comienzan a adoptar paulatinamente las reglas básicas del modelo neoliberal, en boga en aquellos años. La visión social de la economía mixta se traslada a una visión gerencial a partir del Estado neoliberal. Siempre Martí i Puig (2009) señala:

Durante los últimos 16 años el FSLN de Daniel Ortega terminó por ser un aliado indispensable en la aplicación de las políticas neoliberales en Nicaragua. Los gobiernos pedían gobernabilidad y daban a cambio seguridad personal, espacios institucionales y ventajas en los negocios y propiedades recién adquiridas a los nuevos capitales sandinistas, ligados al caudillo. Todos los planes de ajuste, las condicionalidades del FMI, las privatizaciones de las comunicaciones, la energía, la seguridad social, fueron aprobados sin resistencia alguna. Para el año 2005 y -a manera de culminación de este proceso-, siendo presidente del parlamento René Núñez, dirigente danielista, se introdujo al parlamento por decisión política de Daniel Ortega la aprobación del TLC con Estados Unidos (DR-CAFTA) y a principios del 2006 fueron los votos de la bancada del FSLN los que permitieron que entrara en vigencia, con la aprobación de las llamadas leyes complementarias (p. 119).

La ruta seguida en el ámbito económico acabó por diluir el carácter transformador que había caracterizado a la Revolución Sandinista en el pasado. Ya no solo era un asunto de la obsesión de Daniel Ortega por regresar al poder por la vía electoral, aun abandonando los principios, sino el de toda una corriente política que privilegió sus intereses personales y de grupo por sobre la posibilidad de reencauzar un movimiento político a partir de las demandas sociales más sentidas de la población. El nuevo *empresariado* sandinista resultaba altamente beneficiado por las políticas neoliberales que estaba desplegando el capital transnacional a través del gobierno de doña Violeta.

En el terreno electoral, el viraje danielista está orientado a borrar la imagen *bélica* del Frente, esto es, a desplazar su esencia revolucionaria por un nuevo rostro acoplado a los parámetros básicos de la democracia occidental en su fase neoliberal, sobre todo, buscando que la Casa Blanca pudiera confiar en el *nuevo* sandinismo que pretendía regresar al poder. A nivel interno se repetía esta lógica, aunada a la alianza con los antiguos enemigos de la Revolución, lo mismo empresarios neosomocistas y jerarquía eclesiástica, que líderes de la

contra. Bendaña (2002) afirma al respecto, que:

Convencer a los elementos escépticos dentro del electorado de Nicaragua y a la vez, convencer a Washington se convirtió en una sola cosa. Las banderas rojas y negras Sandinistas dieron paso a las de color rosa; el puño en alto dejó paso a las flores; los bigotes de Pancho Villa de Ortega fueron sustituidos por uno mucho más fino; las camisetas fueron sustituidas por trajes y corbatas; el discurso de la resistencia y del anti-neoliberalismo cedió ante uno que hablaba de amor y de Dios. La plataforma del Partido Sandinista llegó a ser, en esencia, no muy distinta a la del Partido Liberal; la promoción de la libre empresa, la adherencia a la disciplina de la macroeconomía, la integración rápida al Área de Libre Comercio de las Américas (FTAA por sus siglas en inglés) y el apoyo al Plan Puebla Panamá en su esfuerzo por hacer de las maquiladoras la vitrina de las economías de Centroamérica y del sur de México, eran puntos defendidos por ambos partidos. A los banqueros y a los grandes capitalistas les fueron prometidos el control sobre las carteras de inversión económica y bancaria claves del país en un eventual gobierno Sandinista. La oferta de los Sandinistas llegó a ser conocida como la opción de la Convergencia en tanto les fueron prometidos puestos en el gobierno a cambio de su apoyo a deshonestas figuras del pasado de Nicaragua, incluidas algunas que habían formado parte de la Guardia Nacional de Somoza.

Bajo estos preceptos, el FSLN compite en los procesos electorales de 1996, 2001, 2006 y 2011. El siguiente cuadro resume la historia del Frente en los comicios presidenciales, partiendo desde las primeras elecciones que se dan durante la Revolución Popular Sandinista en 1984.

**Participación del FSLN en elecciones presidenciales
(1984-2006)**

| Partido | 1984 | 1990 | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 |
|---------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| FSLN | 735,067 67% | 579,886 40.8% | 665,142 37.8% | 915,417 42.3% | 930,862 38% | 1,569,287 62.4% |
| PCD | 154,327 14% | | | | | |
| UNO | | 777,552 54.7% | | | | |
| PLC | | | 896,289 50.9% | 1,216,863 56.3% | | |
| ALN | | | | | 693.391 28.3% | |
| PLI | | | | | | 778,889 31% |

Elaboración propia. Solo se presenta la votación obtenida por el FSLN y las fuerzas que le ganaron o quedaron en segundo lugar en cada elección. El sombreado tenue indica al vencedor. Siglas: **FSLN** (Frente Sandinista de Liberación Nacional); **PCD** (Partido Conservador Demócrata); **UNO** (Unión Nacional Opositora); **PLC** (Partido Liberal Constitucionalista); **ALN** (Alianza Liberal Nicaragüense); **PLI** (Partido Liberal Independiente).

Fuentes: Consejo Supremo Electoral (CSE) y Base de Datos Políticos de las Américas, Georgetown University y OEA.

La maquinaria electoral del Frente se centró fundamentalmente en la imagen de Daniel Ortega, quien en todo momento operó con un alto grado de pragmatismo político, acercándose a figuras emblemáticas del antisandinismo en la época de la Revolución, como su compañero de fórmula -con el que triunfa en las elecciones de 2006-, quien se desempeñó como vicepresidente de Nicaragua hasta el 10 de enero de 2012, “Jaime Morales Carazo, un empresario ex somocista, veterano jefe de la <<contra>> mercenaria, conservador y abiertamente proestadounidense”. (Torres-Rivas, 2007, p. 8).

Al respecto, Efe, Reuter y Afp (1996) destacan cómo:

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) retiró su controvertido himno, que incluía frases como “el yanqui es el enemigo de la humanidad”, y lo sustituyó por la oda a la alegría, de Beethoven, a la que consideró acorde con la época actual, una vez concluida la guerra fría. El ex presidente y actual aspirante a la jefatura de Estado, Daniel Ortega, consideró que el viejo himno era una “reliquia del pasado”, cuando los sandinistas y el gobierno estadounidense eran enemigos jurados. Ortega, que gobernó Nicaragua entre 1984 y 1990, señaló que Washington ha modificado sustancialmente su política exterior en los últimos años, lo que le permitiría incluso mantener buenas relaciones con un nuevo gobierno sandinista (p. 52).

Tras la derrota electoral en 1990, y la ruptura del FSLN en 1994, los grupos de poder dentro del sandinismo se van reconfigurando alrededor de intereses políticos y económicos, pesando más estos últimos. Según José Luis Rocha (2004) destacan dos corrientes centrales: los empresarios y los populistas. La primera, beneficiada en principio por la *piñata*, pero también por las propias políticas neoliberales puestas en marcha por Violeta Chamorro, cuenta con un gran capital y con un discurso cercano a los intereses de los organismos financieros multilaterales. La corriente populista, identificada como el danielismo, controla el partido, maneja el discurso político, las relaciones con las bases y el accionar de algunos movimientos sociales. Así, expresa que:

Entre populistas y empresarios no existe una brecha significativa. Es más bien una relación de simbiosis salpicada de breves períodos de inestabilidad y hasta de hostilidad. La cara populista gana votos entre los empobrecidos y desesperados y la empresarial determina propuestas atractivas para la comunidad internacional y los empresarios nacionales. La mano populista mantiene el poder -juzgados, magistraturas, instituciones- para que la mano empresarial goce de un clima adecuado para sus negocios (p. 35).

Tras la ruptura, el FSLN ha tenido una vida *partidaria* a la sombra del Secretario General, sin debate político ni producción teórica, simplemente una compleja maquinaria dedicada de manera exclusiva a los compromisos electorales, situación que se reflejó plenamente en la dinámica de su vida interna, tal como ha sucedido con los congresos. Martí i Puig (2009) se refiere a esa situación, y señala:

En cuanto a los congresos nacionales del FSLN desde la escisión, se celebraron seis. En 1996, se celebró el II Congreso extraordinario, en mayo de 1998 el II Congreso ordinario, en febrero de 2001 el III Congreso ordinario, en marzo de 2002 el IV Congreso ordinario, en marzo de 2005 el III Congreso extraordinario y en mayo de 2006 el IV Congreso extraordinario. A diferencia de los anteriores, estos congresos se desarrollaron con extrema placidez, lo que indica el control y la docilidad del aparato partidario. La excepción a esta dinámica fue el Congreso de 2005 donde se marginó a dos importantes dirigentes sandinistas -a Herty Lewites, quien fuera alcalde de Managua, y a Víctor Hugo Tinoco, ex miembro de la DN y ex diputado sandinista- debido a su intención de postular una candidatura a la Presidencia de la República para 2006, y cuyo desenlace fue la “salida” de ambos del FSLN (p. 118).

El FSLN se transforma sustancialmente a partir de su derrota y del inicio de la etapa neoliberal, y presenta una esencia política completamente distinta al espíritu revolucionario que lo había caracterizado. No solo se trataba de un cambio de imagen, sino de una reconfiguración ideológica profunda. Por ello,

se habla de la conformación de una nueva elite política en Nicaragua, integrada por las fuerzas que controlan al Estado, sean estas sandinistas o neosomocistas, y que se caracterizan por el uso *tradicional* del poder público, esto es, que practican la corrupción y el nepotismo.

Los grandes escándalos generados por estas prácticas en la etapa posrevolucionaria, de alguna manera iniciaron con la famosa *piñata*, y con la conversión casi “mágica” de muchos dirigentes sandinistas en importantes y prósperos empresarios ~como ejemplo, tenemos a Francisco López Centeno, conocido como Chico López, quien es dueño de Tecnologías y Servicios Sociedad Anónima, TECNOSA, tesorero del FSLN, directivo del gobierno en Unión Fenosa, vicepresidente de Albalinisa, empresa de alimentos creada con recursos venezolanos y, hasta diciembre de 2009, Presidente de la estatal Empresa Nicaragüense del Petróleo, Petronic-, dueños de fábricas, de medios de comunicación y de cuantiosas fortunas. Algunos comandantes de la Revolución ahora forman parte de un nuevo y boyante sector social acomodado.

¿Cómo poder imaginar al estratega militar de la guerrilla y después jefe del Ejército Popular Sandinista, Humberto Ortega, exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN, convertido en uno de los hombres más ricos de Nicaragua, ya alejado de la *política* y viviendo en Costa Rica? ¿O al también comandante y exmiembro de la Dirección Nacional, Bayardo Arce, quien además de desempeñarse como asesor económico del presidente Ortega está dedicado desde hace tiempo al mundo empresarial? Fue accionista de Interbank (luego absorbido por Promerica); es dueño de AGRICORP, la mayor importadora de arroz de Nicaragua, la cual *fundó* tras la derrota electoral de 1990; y también dueño, junto con el canciller Samuel Santos, del hotel Best Western Las Mercedes, en Managua. Martínez (2009) escribió al respecto:

La crisis financiera internacional que tanto pregona el Gobierno del presidente Daniel Ortega, para justificar la recesión económica nacional que ahoga a los nicaragüenses, parece no afectar a sus funcionarios. Se trata de Bayardo Arce, quien levanta una hermosa mansión en un alejado y tranquilo paraje ubicado al sur de Managua... Arce es el rostro más representativo del club de empresarios sandinistas, un poderoso grupo que, teniendo como raíz de sus fortunas el saqueo ocurrido en 1990 conocido como “La Piñata”, se erige como el músculo financiero del Frente Sandinista... La mansión tiene unos 800 metros cuadrados de construcción, lo que vendría a significar que el costo puede rondar más de medio millón de dólares, sin tomar en cuenta el terreno de más de una manzana y otros agregados que la llevan a incrementar su valor a cerca del millón de dólares.

La denuncia contra Daniel Ortega, por parte de de su hijastra, por abuso sexual, contribuye a incrementar este cuadro de deterioro ético en el entorno del Frente. Zoilamérica Narváez Murillo acusó en marzo de 1998 a Ortega de

haber abusado sexualmente de ella, desde los 11 hasta los 23 años (1978-1990) y de acoso durante su matrimonio (1990-1998). Daniel Ortega nunca ha aceptado dicha acusación, y Rosario Murillo, madre de Zoilamérica, defendió en todo momento a Ortega, afirmando que lo señalado por su hija era una falsedad. La acusación fue llevada por Zoilamérica a tribunales nacionales e internacionales, y luego retirada por ella misma ante la falta de resultados. A pesar de haber sido *controlado* en su momento, el caso siguió teniendo importantes repercusiones. Oettler (2009) se refirió a estos hechos:

A mediados de agosto de 2008, Daniel Ortega sufrió un descalabro enorme en el escenario internacional. Poco antes de la solemne entrega de mando al nuevo presidente de Paraguay, Fernando Lugo, la futura ministra de la Mujer en ese país, Gloria Rubin, había firmado una petición que decía: “Repudiamos la presencia en calidad de invitado oficial del violador Daniel Ortega Saavedra, que por 20 años esclavizó sexualmente a la hija de su esposa”. El gobierno nicaragüense no presentó al respecto ningún dictamen oficial, pero canceló el viaje presidencial a última hora, lo que representó un triunfo para la hijastra del presidente nicaragüense y del movimiento feminista, el cual exige, desde hace muchos años, el enjuiciamiento de tales crímenes (p. 179).

Más allá de las acusaciones en el ámbito de lo privado sobre su principal dirigente, lo que ha caracterizado a esta nueva etapa del Frente en las dos últimas décadas es el pacto con el neosomocismo y el rumbo pragmático seguido por Ortega, lejano a toda alternativa política y económica al neoliberalismo. En el fondo, se trata del resurgimiento de la oligarquía en Nicaragua, una oligarquía *sui generis* por sus contrastes políticos, sobre todo en el discurso, pero finalmente rescatando la esencia que tiene marcada en la historia de esta nación centroamericana. Vargas (2004) expresa que:

A partir de 1990, Nicaragua pasó del régimen sandinista dirigido por nueve comandantes al del pequeño grupo de familias concentradoras del poder económico. La soledad en la que los comandantes sandinistas solían definir las políticas económicas y sociales, basadas en un conjunto de reglas no escritas, que ellos mismos imponían, fue sustituida por una elite que dicta y concentra tanto las reglas del poder como las principales decisiones políticas y económicas. El gobierno no manda, el gobierno es el comisario político de la oligarquía (p. 100).

A pesar de sus transformaciones oligárquicas, durante esta nueva etapa el FSLN continúa con la retórica de la justicia social y de la democracia para ejercer su control en las redes de la política tradicional interna, mientras en el ámbito latinoamericano mantiene un discurso en el espectro de la izquierda, aunque sometido, en realidad, a las estrategias neoliberales. No hay duda, y a pesar de todo, de que el Frente sigue siendo la fuerza política nacional más

organizada del país, factor que, entre otros aspectos, le ha permitido conservar un gran poder económico, político y militar en Nicaragua, y que hoy lo tiene de nueva cuenta en el gobierno nacional.

Las esferas sociales del sandinismo: organizaciones populares y ONG

El movimiento popular fue parte fundamental de la Revolución, uno de sus principales motores tanto en la lucha contra la dictadura somocista como durante el gobierno revolucionario en la década de los 80. Las masas populares, los trabajadores, los sectores organizados, por primera vez en la historia de Nicaragua, fueron protagonistas centrales.

Al triunfo de la Revolución, surgen innumerables organizaciones populares, movimientos sociales y Organizaciones No Gubernamentales que serán parte esencial del proceso que envolvió al país durante 11 años. Mujeres, estudiantes, jóvenes, campesinos, profesionales, indígenas, obreros y sectores urbanos se organizaron en espacios diversos, no solo para reivindicar sus demandas históricas, sino para hacerlas realidad como parte intrínseca del proyecto de transformación. Martí i Puig (2009) refiere:

El tercer pilar del aparato sandinista reposó en la existencia de vínculos orgánicos con las OM (Organizaciones de Masas), donde se incluían sindicatos y organizaciones sociales como las de vecinos, jóvenes, niños o mujeres. El FSLN siempre consideró que “las masas” tenían que integrarse en organizaciones gremiales que, sin estar en la estructura partidaria, tuvieran vinculación orgánica con ésta. Estas organizaciones tuvieron un rol muy importante en la vinculación de grandes colectivos en las tareas de la revolución, aunque las funciones que les asignó el FSLN nunca estuvieron claramente definidas, si bien los estatutos del partido decían que su tarea era la de “velar y trabajar por el fortalecimiento de la revolución y la de ser los verdaderos instrumentos de expresión y canalización de las demandas más apremiantes de las masas” (p. 109).

Sin embargo, tras la derrota electoral del 25 de febrero de 1990, la situación de los movimientos sociales cambia drásticamente. En primera instancia, hacia el final del gobierno sandinista, muchas organizaciones ya habían perdido parte de su autonomía al encontrarse supeditadas a la dirigencia del FSLN y a las *necesidades* de la Revolución y de la guerra. Estaba reducida sustancialmente la capacidad de lucha autónoma, y, en consecuencia, las vías propias para realizarla, pues en realidad se habían convertido en receptoras y ejecutoras de las decisiones “de arriba”, de la Dirección Nacional. Aunado a ello, la misma crisis económica también había golpeado la capacidad de convocatoria de las organizaciones y disminuido sustancialmente la efectividad en la resolución de las demandas.

Aun así, se va formando un conjunto de espacios que ampliarán el rostro sectorial de la sociedad civil, y que se aglutinarán en diferentes tipos de alianzas, con posturas encontradas y estrategias disímboles. “Entre esos ‘bateadores emergentes’ están el movimiento de mujeres, el movimiento indígena organizado en torno a la autonomía, el movimiento juvenil, las organizaciones de derechos humanos, los emigrantes... y las ONG y las redes civiles”. (Montenegro, 2002, p. 17).

El movimiento social nicaragüense, que en su gran mayoría era de militancia sandinista, termina por dividirse, más o menos bajo la misma pauta que lo hace el propio Frente, aunado a ciertas organizaciones gremiales conservadoras de menor dimensión movilizadora, pero de importante respaldo en la derecha neosomocista, sobre todo a través de los medios de comunicación. Núñez (2007) expresa que:

A medida que las contradicciones políticas, económicas y sociales arreciaban, la sociedad civil se fue dividiendo hasta conformar tres grupos cívico-políticos cada vez más diferenciados. Un grupo llamado Movimiento por Nicaragua manifiestamente afiliado a la oligarquía conservadora y a sus organizaciones partidarias (ALN-PC), muy minoritario en afiliados, pero con cuadros muy influyentes en los medios de comunicación. Un grupo llamado Coordinadora Civil compuesto en su mayoría por ONGs (sic) cuyos dirigentes principales se inclinan cada vez más hacia las posiciones del partido político Movimiento de Renovación Sandinista. Un tercer grupo llamado Coordinadora Social compuesto en su mayoría por movimientos sociales, gremios y sindicatos, manifiestamente cercanos al Frente Sandinista.

De esta forma, el otrora poderoso movimiento popular, baluarte de la Revolución, se difuminaba en dos grandes concepciones políticas del trabajo social. Por un lado, la Coordinadora Civil, más apegada a la visión del MRS, e integrada fundamentalmente por ONG, inclinó su dinámica a impulsar la autonomía y la autogestión en los espacios sociales, bajo un enfoque apegado a las reglas establecidas por la Constitución, y con un importante apoyo externo por parte de las grandes fundaciones europeas, lo cual se explica a partir de la amplia solidaridad internacional que existió con el proyecto revolucionario durante la década de 1980, sobre todo, proveniente de Europa occidental.

Una parte importante de los cuadros de dirección del FSLN y de funcionarios del gobierno que se quedaron sin trabajo tras la derrota electoral, se vieron *obligados* a insertarse en el mundo de las ONG y de las organizaciones populares, tanto para darle continuidad política a su labor social, como por la propia lógica de la sobrevivencia económica individual. Grigsby (2005) comenta que:

El fenómeno organizativo más importante de estos 16 años de restauración capitalista ha sido la proliferación de las Organizaciones

No Gubernamentales. La gran mayoría fueron fundadas por militantes sandinistas ex funcionarios del gobierno revolucionario, y les sirvieron de tabla de salvación después de quedarse sin empleo y/o sin ingresos para sobrevivir. Casi todos rompieron sus vínculos partidarios con el FSLN durante la crisis de 1994, y si bien al principio se enfilaron con el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), hoy mantienen en general un comportamiento autónomo y algunos hasta se han convertido en instrumentos conscientes del gobierno o de los organismos multilaterales (p. 22).

Y señala, además, que las ONG nicaragüenses, como sucede en muchos países donde predomina el modelo neoliberal, funcionan bajo la dinámica de un doble juego, pues mientras:

...ayudan a paliar las deficiencias del Estado en materia social ~salud, educación, vivienda~ han servido al mismo tiempo objetivamente como muros de contención del descontento popular contra el gobierno y contra el sistema, pues la gente, en lugar de luchar por sus derechos, espera la limosna que llega de allende las fronteras (p. 22).

Por otro lado, en la Coordinadora Social participa el grueso de las organizaciones que se forjaron durante la Revolución, sobre todo, la Central Sandinista de Trabajadores (CST), que aglutina a la mayor parte de la fuerza laboral del país, y un conjunto de movimientos sociales que plantean la lucha y la protesta en el plano de la acción directa, a través de marchas, mítines y huelgas.

Sin embargo, en la Coordinadora Social ha prevalecido la dinámica del control férreo por parte del Frente, concretamente de Daniel Ortega. Los mecanismos de relación entre partido y movimiento que se generaron durante la Revolución, sobre todo cuando la agresión estadounidense se profundizó y se dio un importante sacrificio de las demandas sectoriales en aras de la defensa de la nación y del proyecto revolucionario, se mantuvieron tras la derrota electoral, acompañados de la carga desmovilizadora que ese acontecimiento generó en el ánimo de la participación de la población, y a partir de la dinámica de supervivencia que impuso el neoliberalismo en Nicaragua.

(Mónica Baltodano, en conversación en abril de 2008, expresó que cuando la gente se organiza por sus reivindicaciones, pero mantiene una subordinación de su lucha a lo dictado por los partidos, pierde su capacidad de beligerancia y de acción. En el caso de Nicaragua, la mayoría de las organizaciones han permanecido subordinadas al Frente Sandinista, y se han colocado como diputados los principales líderes, pero estos tienen cinco o seis cargos, hay uno que es famoso aquí, que es diputado, Coordinador de la Federación de Trabajadores de la Salud, Coordinador de los Consejos de Poder Ciudadano, Coordinador del Comité Económico de Desarrollo Social; o sea, tiene como

quince sombreros la misma persona. Los líderes de las organizaciones no se renuevan, son los mismos).

Así, el movimiento social nicaragüense se encuentra frente a diversos factores que le han impedido convertirse en un actor determinante dentro del desarrollo político nacional, pues por un lado está mediatizado por el danielismo, con lo que se limita su incidencia real, y, por el otro, se encuentra inmerso en la dinámica de las ONG, contexto que finalmente limita las coordenadas de acción y metas determinadas que cuestionan la estructura de desigualdad que el sistema capitalista mantiene en esta nación centroamericana.

A pesar del avance que significa que la sociedad civil esté organizada en variados espacios, en su conjunto actúa bajo parámetros diferentes, y esta situación impide que su actividad pueda tener mayores resultados, sobre todo, en un país como Nicaragua, tan golpeado por su historia reciente y por su propia condición económica subdesarrollada.

Lo más grave es que después de haber transitado por una Revolución como la sandinista, que trastocó importantes estructuras del poder capitalista y amplió derechos históricamente relegados en el trabajo, la salud, la educación y la cultura, no se haya consolidado una fuerza social que tejiera su *destino* a través de la capacidad movilizadora que sí tuvo durante los 80.

(Andrés Pérez Baltodano, en una entrevista en julio de 2008, expresaba: ¿Pero qué pasó con toda esa red y toda esa movilización, en una Revolución que movilizó miles de jóvenes para la cruzada de alfabetización, para la campaña de salud, para las organizaciones de mujeres? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Y cómo se explica, por ejemplo, que la aprobación del CAFTA hubiera pasado sin protestas, sin conocimiento, y en Costa Rica casi lo rechazan? Entonces, para mí, ese momento, el de Costa Rica y Nicaragua, refleja que las organizaciones populares conducidas por la Revolución se manejaron como un apéndice del Estado, que al caer el Estado caen las organizaciones participativas, y eso facilita la construcción de lo que llamamos la democracia tutelar a partir de 1990, que es una democracia que viene desde arriba hacia abajo, un modelo que se impone de arriba hacia abajo. Hay alguna movilización en los primeros años del gobierno de Chamorro, que da la impresión de que sobrevive algo de esas redes de organizaciones del sandinismo, pero es una ilusión, un espejismo del sandinismo que después desaparece).

Tras la derrota sandinista y la imposición avasalladora del neoliberalismo, los movimientos sociales nicaragüenses desvanecen su labor hacia intereses concretos, limitados por las cúpulas del sandinismo y del neosomocismo, con pequeños destellos de lucha y espacios de organización, pero sin el empuje y arrastre popular que los había caracterizado durante la Revolución. Nuevamente, el pactismo actúa para determinar las acotaciones y los alcances del movimiento social, como en los viejos tiempos del somocismo.

II. LA DERECHA NEOLIBERAL EN EL GOBIERNO

Violeta Chamorro, neoliberalismo y cogobierno

El 25 de abril de 1990, dos meses después de haber derrotado al sandinismo en las urnas, la candidata de la Unión Nacional Opositora (UNO), Violeta Chamorro, asume la presidencia de Nicaragua en un escenario de posguerra marcado por una economía devastada y por una acelerada imposición del neoliberalismo a nivel mundial.

En realidad, el principal capital político que Violeta Chamorro tenía era haber sido esposa de Pedro Joaquín Chamorro, pues sus capacidades políticas eran bastante limitadas. Durante la campaña presidencial de 1990, fue evidente su falta de conocimiento sobre los problemas centrales del país, deficiencia reflejada, por ejemplo, en las conferencias de prensa, donde cada vez que un periodista formulaba una pregunta de contenido, ella contestaba una frase corta y superficial, e inmediatamente pedía a sus asesores que “ampliaran” la respuesta.

Martí i Puig & Close (2009) expresan que:

Antes de derrotar al FSLN en 1990 y ser presidenta, doña Violeta no era política pero era conocida por ser la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, el editor y periodista opositor al somocismo que fue asesinado por orden del dictador en 1978. También lo era por haber ocupado fugazmente el cargo de miembro de la JGRN, pero desde entonces no había tenido ninguna responsabilidad política hasta su nominación como candidata de la UNO. La designación de doña Violeta se debió a que su figura no generaba grandes controversias, no estaba ideologada y era conocida en todo el país (p. 22).

El gobierno de Violeta Chamorro tenía como objetivo fundamental dismantlar las estructuras básicas de la Revolución Sandinista a través de la imposición del modelo neoliberal, y terminar de pacificar al país. La meta no era fácil, pero tenía como respaldo no solo a Estados Unidos, sino a una buena parte del aparato de la derecha que la había llevado al gobierno.

Vargas (2004) refiere cómo:

El gobierno Chamorro se aplicó, con afán digno de mejores causas, a dismantlar lo construido por el sandinismo y, con ello, el país entero. Desaparecieron la línea aérea nacional, la flota pesquera y la marina mercante; los grandes proyectos industriales, en los que se habían invertido sumas millonarias, fueron demolidos y las fábricas y maquinarias vendidas o simplemente desaparecidas; el ferrocarril centenario fue dismantlado y las viejas y bellas locomotoras vendidas como chatarra. Todo lo recibido como bienes del Estado pasó a manos privadas y el dinero ingresado se hizo humo. En su fiebre destructiva, incluso los rieles y durmientes del ferrocarril se desvanecieron. El aparato estatal fue reducido drásticamente y los programas sociales dismantlados (p. 33).

Sin embargo, la nueva presidenta se encontró con una realidad inobjetable: el poder real seguía en manos del Frente Sandinista, esto es, las principales instituciones del país (Ejército, Policía, sistema judicial, aparato burocrático del Estado) estaban bajo control del sandinismo, por lo que se vio obligada a negociar, a tal grado, que su Administración tuvo que aceptar implícitamente un cogobierno con quienes había derrotado en las urnas.

Este cogobierno, entre otras cosas, se tradujo en pactar importantes modificaciones institucionales, como la reorganización del Ejército Popular Sandinista (EPS) y la Policía Sandinista (PS), cuyos nombres fueron cambiados por el de Ejército de Nicaragua y por el de Policía Nacional, respectivamente, además de su papel dentro del poder nacional y de sus connotaciones políticas, a cambio de que los respectivos jefes surgieran de forma autónoma al gobierno.

Ortega Hegg & Córdoba Macías (1996) destacan:

El Ejército ha tenido un proceso de institucionalización a través de la Ley Militar aprobada en 1994, como una fuerza profesional, nacional, apartidista y sometida al poder civil. En cumplimiento de la misma, el 21 de febrero de 1994 se dio el retiro del General de Ejército Humberto Ortega y su sustitución por el General de Ejército Joaquín Cuadra. Es la primera vez que se da en Nicaragua un proceso semejante (pp. 62-63).

Así, el gobierno derechista de Violeta Chamorro se caracterizó por una política ambigua que no logró mantener a flote la llamada gobernabilidad. Fue un período de constantes enfrentamientos políticos que derivó, en un momento extremo, en la existencia de dos constituciones, ante la coyuntura que se dio por un paquete de reformas a la Carta Magna, que se impulsó desde 1993 y

que se consumó en 1995. La mandataria, que no estaba de acuerdo con dichas reformas, se negó a publicar el decreto del cambio constitucional, frente a lo cual -y como hecho inédito-, en plena parálisis política y legislativa, Nicaragua vivió varios meses con dos cartas magnas.

García Laguardia (2001) subraya cómo:

En el propio programa de gobierno de la coalición que apoyó a Chamorro estaba la reforma total, cuyo primer intento se dio, sin éxito, en 1991. Sin embargo, una fuerte coalición dentro de la Asamblea inicia a partir de la segunda mitad de 1993, el proceso de la reforma parcial, que involucra en un conflicto generalizado a todos los poderes del estado. En un primer momento se reforma la Constitución suprimiendo el requisito de que la iniciativa de reforma parcial debería ser conocida en dos legislaturas, decisión de dudosa legalidad y, firmemente decidida, la Asamblea aprueba en noviembre de 1993, en primer debate el texto, y en un segundo debate, en febrero de 1995, la reforma definitiva (p. 153).

Las reformas constitucionales, impulsadas por diputados de varios partidos y sobre todo por la fracción parlamentaria del FSLN, que en aquel momento coordinaba Sergio Ramírez, en contra de la voluntad de Daniel Ortega, transformaron aspectos centrales del Estado nicaragüense creado por la Revolución, abocándose sobre todo a los siguientes: limitar las atribuciones presidenciales aumentando las del Poder Legislativo, fortalecer la democracia representativa, disminuir la rectoría económica del Estado, expresar reglas claras para evitar el nepotismo, combatir de manera frontal la corrupción, y proteger algunas conquistas sociales de la Revolución.

Vargas (1995) se refiere a esta situación y concluye que:

La Constitución reformada parte del principio de que hay que buscar un mejor equilibrio entre los poderes del Estado, no se puede continuar con la «dictadura presidencial» que hasta la fecha ha permitido que el gobierno haga mayores concesiones hasta los sectores afines al gobierno y no a los sectores populares. La Constitución reformada garantiza ciertas conquistas sociales para los sectores populares, y trata de orientar al país en un sentido más democrático suprimiendo la «arbitrariedad presidencial» instaurada por el sandinismo. La Constitución reformada busca poner un dique definitivo a la política de restauración conservadora del gobierno y a la corrupción administrativa eliminando el encubrimiento, la impunidad y la protección de los poderosos (p. 9).

Además de las reformas constitucionales y de la inestabilidad que ello representó para el país, el gobierno tuvo serios conflictos dentro de la propia derecha que postuló a Doña Violeta y la llevó al triunfo. En efecto, desde un principio, el enfrentamiento interno se genera ante la negativa de Chamorro de borrar por completo al sandinismo del ámbito público, pues su *obligada*

necesidad de pactar con el FSLN, limitó la sed de venganza de los sectores más reaccionarios de la derecha gobernante.

Dicha situación se empieza a gestar a partir de la propia exclusión del vicepresidente Virgilio Godoy, del ala más dura del antisandinismo (a pesar de haber sido Ministro del Trabajo durante la Revolución, de 1979 a 1984), quien nunca logró realmente ejercer su cargo a cabalidad, pues ni siquiera se le permitió despachar en sus propias oficinas dentro de la Casa Presidencial. Estas diferencias se mantuvieron en todo momento durante la nueva Administración.

Montenegro (2002) expresa cómo:

En este escenario, durante el gobierno Chamorro el sistema político se caracteriza por una coalición frágil en el poder, por un gobierno tecnocrático, por un marco jurídico e institucional insuficiente, y por una oposición fuerte, constituida no sólo por el FSLN, sino por los “perdedores” en la UNO, el grupo que aglutinará Alemán tras la bandera del PLC (p. 15).

Estos conflictos también se expresan en la destitución de Alfredo César (quien fue miembro de la JGRN de 1978 a 1982, presidente del Banco Central de Nicaragua, “contra” y diputado desde 1990, y que en ejercicio de este último cargo se convirtió en el hombre de confianza de Violeta Chamorro) de la Presidencia de la Asamblea Nacional en 1993, lo cual *orilla* a varios partidos de la UNO a pasar a la oposición. Esta problemática tan solo contribuyó al aislamiento de un gobierno débil ante el conjunto de las fuerzas políticas nicaragüenses, que, de alguna manera, hicieron lo que quisieron con la mandataria.

Vargas (1995) expone al respecto:

La política neoliberal, el empobrecimiento generalizado y el uso indiscriminado de la «dictadura presidencial», contemplada en la Constitución de 1987, fue incrementando el aislamiento político del gobierno. Este aislamiento creciente acentuó (sic) su terquedad en la política de restauración de bienes a los somocistas (la apertura de una oficina de reclamaciones en Miami lo confirma) y ha permitido mantener la influencia de algunos de los representantes desprestigiados del anterior gobierno sandinista, en los que ha buscado sus puntos de apoyo para contener el descontento popular. Esto a su vez ha acrecentado su aislamiento (pp. 8-9).

Por otro lado, a pesar del desarme de la contra, que se dio al principio de su mandato, Violeta Chamorro debió enfrentar un complejo proceso de violencia en el que aparecieron diferentes grupos armados: exmilitares sandinistas (*recompas*), excontras (*recontras*), y delincuentes comunes, quienes se mantuvieron por varios años activos, llegando a la toma de algunas ciudades como Estelí y Ocotol. Incluso, hacia el final de este período de alzamientos,

los *recompas* y los *recontras* actuaban unificados, bajo el nombre de *revueltos*. Los hechos provocados por estos grupos acentuaron la inestabilidad, los cuales el Inter Press Service, IPS (1992), da a conocer:

Un grupo de más de dos mil rebeldes, tanto ex contras como ex sandinistas, ocuparon hoy militarmente la población de Ocotol, en el norte de Nicaragua, y bloquearon varios tramos de la carretera que comunica con Honduras... Durante casi un año de accionar rebelde en el norte del país, esta es la primera vez que recontras y recompas se unen para realizar este operativo de gran envergadura... Las principales demandas de los realzados en armas son la entrega de tierras, vivienda, créditos para la producción agrícola, reestructuración de la deuda de los campesinos cooperativizados y eliminación de minas en miles de hectáreas en la región fronteriza con Honduras (p. 15).

Algunas de las causas del alzamiento de los *recompas* se relacionaban con su profundo desacuerdo en torno a la entrega del poder por la vía pacífica al enemigo, tras todo el peso y sacrificio que había implicado la Revolución. Como parte de los Acuerdos de Transición, el Ejército redujo sus filas en decenas de miles de soldados, lo que se reflejó en una percepción de abandono tras su entrega completa al proceso revolucionario.

Castro (1993) realiza una entrevista sobre los hechos que se suscitan, al jefe del Ejército, Joaquín Cuadra, quien expresa:

Muchos se preguntan qué es lo que pasó con la revolución, pues al haber sido sacados del ejército pasan una situación angustiada desde el punto de vista material para su familia. Estos problemas los han hecho caer, me parece a mí, en posiciones políticas radicales, y como por ser militares y haber estado involucrados en la guerra, son guerreros, la expresión más rápida de su radicalismo político es a través de las armas (p. 34).

Para 1993 existían alrededor de 368 bandas armadas en sus diferentes modalidades. En julio de ese año, Violeta Chamorro envió a la Asamblea Nacional una segunda Ley de Amnistía -ya se había promulgado una en 1990, como parte de su estrategia de pacificación- y, además, se dispone la vía del enfrentamiento directo del Ejército con los grupos armados.

También, en este período de gobierno se profundizó la crisis que empujó a más sectores a la pobreza. Es importante recordar aquí que ya a partir de 1987, el FSLN había comenzado a aplicar algunas recetas de corte neoliberal, que imponía el FMI, a cambio de préstamos financieros. A esto se sumaban los estragos de la guerra de agresión que Estados Unidos provocó a esta nación centroamericana.

Así, al asumir Violeta Chamorro la presidencia, el país se encontraba en ruinas. Para completar este panorama, Washington no cumplió con su promesa de destinar millones de dólares para supuestamente reactivar la economía

nicaragüense en cuanto la derecha asumiera el gobierno, por lo que las políticas neoliberales comenzaron a ser aplicadas con enorme rapidez y disciplina por parte del nuevo grupo en el poder.

Ortega Hegg & Córdova Macías (1996) señalan cómo:

El gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro... creó las políticas necesarias para que Estados Unidos y las fuentes multilaterales de crédito apoyaran nuevos esfuerzos de estabilización económica y ajuste estructural. Esto le ha permitido a este gobierno implementar cuatro programas de estabilización (dos en 1990, uno en 1991 y otro en 1992) y tres programas de ajuste estructural (1991-1994), con resultados poco satisfactorios en términos de las mismas metas propuestas por el gobierno (p. 54).

52

Aunado a ello, se da la privatización de las empresas del Estado, la desarticulación de las políticas sociales que más o menos habían sobrevivido a la Revolución Sandinista, así como una reducción de la burocracia, la adopción de la concepción macroeconómica y una completa subordinación a los intereses de la Casa Blanca.

La Administración de Violeta Chamorro representó para Nicaragua un franco retroceso social, un período de gran inestabilidad política, a pesar de alcanzar hacia su final una completa pacificación, y la inserción del país en la órbita estadounidense. En términos generales, fue un gobierno que no logró encontrar sus coordenadas políticas, y mucho menos una identidad y una fuerza propias que le permitieran marcar un rumbo político definido en bien del país.

Vargas (1995) expresa que:

El gobierno ha sido cauteloso, astuto y sin importarle las sutilezas ideológicas y doctrinales, ha tomado ideas y consignas prestadas tanto de la derecha como de la izquierda y las ha cambiado, a menudo con mucha incongruencia. En esto ha resistido gran parte de su fuerza, se las ha arreglado para hacer confusos todos los problemas y todos los debates. A los críticos que lo atacan por cualquiera de sus pronunciamientos, siempre ha sido capaz de presentar otra afirmación que exprese exactamente lo contrario, sus fórmulas eclécticas han sido una dádiva de la burocracia a los indecisos habituales; pero al mismo tiempo han atraído a muchas mentes honradas, pero tímidas o confundidas (p. 8).

Sin embargo, su gestión nunca logró destacar en términos de la misma institucionalidad ni en un proyecto político coherente. La utilidad política de su candidatura había cumplido con la misión central: sacar a los sandinistas del gobierno, aunque como tal, la derecha inició mal su camino, con una gestión gris que afectó de manera profunda a Nicaragua.

Aun así, hay que señalar que la Administración de Chamorro logró rearticular cierta convivencia social a partir de la pacificación del país, mantuvo

abiertos los canales de la participación política y de la libertad de expresión, y contuvo los deseos revanchistas de los sectores más recalcitrantes de la derecha nicaragüense. Tal vez estos sean sus principales (¿y únicos?) aciertos políticos durante su paso por el gobierno.

Arnoldo Alemán, corrupción y consolidación oligárquica

Arnoldo Alemán, reconocido somocista que apoyó a la dictadura hasta el triunfo de la Revolución Sandinista, y que, obviamente, se opuso a esta durante toda su existencia, ganó *fácilmente* las elecciones presidenciales de 2006, después de haber sido alcalde de Managua (1993-1995), bajo el sello de un profundo revanchismo antisandinista.

Principal dirigente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) desde 1991, Alemán alcanzó la alcaldía en las elecciones municipales de 1993, y desde ese momento comenzó su ascenso político, basado fundamentalmente en la demagogia, en el autoritarismo y en la corrupción. En 1995 renuncia a ese cargo público y lanza su candidatura presidencial, consiguiendo el triunfo en las elecciones del 20 de octubre de 1996, venciendo a Daniel Ortega, del FSLN (Alemán obtiene el 50.9% y Ortega el 37.8% de los votos). Toma posesión como presidente de Nicaragua el 10 de enero de 1997.

El gobierno de Arnoldo Alemán es representativo de las más retrógradas prácticas de la política que conoce la historia latinoamericana, muy parecidas a las desarrolladas por la dictadura de Somoza, con la única salvedad de que el poder militar no fue usado como elemento represivo contra la oposición, pues todo el sector más importante de esta, es decir, el FSLN, comenzó a tejer un pacto con él para compartir el ejercicio real del poder.

Vargas (2004) se refiere al gobierno de Alemán en los siguientes términos: Autoritarismo, arrogancia, desprecio por los derechos de la población, concentración excesiva del poder fueron algunas de las características del estilo de gobernar de Arnoldo Alemán. El abuso del poder fue una constante del gobierno liberal, así como la pérdida del control al crecer en forma inmoderada el enriquecimiento de sus principales funcionarios, respondiendo a la ambición de los segundos, terceros e innumerables segundones ávidos de participar en el festín, pero, ¡eso sí!, sentados en la misma mesa principal. La historia política de Nicaragua nos enseña que cuando se rompen los límites, la catástrofe es inevitable (pp. 33 y 34).

El discurso político con el que Alemán llegó al poder, manejaba dos vertientes fundamentales: el antisandinismo, incluyendo el manejo *sicológico* del miedo a ver de nuevo a Daniel Ortega en la presidencia, y un conjunto de promesas de corte socioeconómico que *mejorarían* la situación del país. Sin embargo, no había un proyecto verdadero que pudiera cumplir con su discurso demagógico, con sus falsas promesas y con las enormes expectativas

de desarrollo, sino un vacío programático que se vio reflejado durante todo su mandato.

Pérez Baltodano (2005) reafirma los rasgos antes citados del gobierno liberal:

Alemán logró proyectar una imagen anti-elitista y presentarse como el líder de un movimiento político opuesto a la lógica económica impuesta por los organismos financieros internacionales y a las ambiciones de los sectores sociales asociados al conservatismo. Pero ni Alemán, ni su partido el PLC, ni la Alianza Liberal que lo llevó al poder, contaban con una visión y una filosofía política que sirviera de ancla y norte normativo a su gobierno. La desnutrición teórica de los liberales, además, les impedía articular y agregar las demandas de sus simpatizantes y contribuir a la creación de un consenso nacional que sirviera de base a la democracia electoral del país (p. 23).

La aplicación de las políticas neoliberales fue más severa, el despilfarro de recursos fue notorio, y los grados de corrupción fueron escandalosos y cínicos. La idea de Alemán era continuar con las reformas de Violeta Chamorro para su beneficio personal y el de su grupo más allegado, aunque, en realidad, uno de sus principales objetivos era crear “una élite económica liberal capaz de competir con la élite conservadora que había sido la principal beneficiaria del proceso de privatización impulsado por Barrios de Chamorro; y con la élite sandinista que se formó con la piñata” (Pérez Baltodano, 2005, p. 7).

El derroche de los recursos del Estado fue indetenible. Baltodano (2009) señala cómo:

Entre 1999 y el 2000 se consolidaron las privatizaciones de las telecomunicaciones, la energía, y la seguridad social, el arriendo de la empresa estatal Petróleos de Nicaragua (PETRONIC), y el otorgamiento de concesiones de todos nuestros principales recursos naturales y devoluciones de propiedad, incluyendo a la propia familia Somoza, como ocurrió con la Cementera Nacional (p. 112).

El régimen alemanista gobernó Nicaragua bajo el sello de la corrupción y del desastre social. Inmerso en la fase más severa de la aplicación de las políticas neoliberales en América Latina, Alemán también aplicó una política autoritaria que cerró algunos espacios a la oposición y a importantes sectores de la sociedad civil, sobre todo la organizada en las ONG. Montenegro (2002) expone algunas observaciones sobre el gobierno de Alemán:

A falta de policía, ejército y censura, el gobierno Alemán aplicó, como mecanismo de control y de coerción, el famoso “terrorismo fiscal” desde la Dirección General de Ingresos dirigida por Byron Jerez. A las ONG y a los medios de comunicación más beligerantes y a la empresa privada cuando se oponía a cualquier política gubernamental, se les aplicaba esta

forma de terrorismo. Si el gobierno Alemán buscó debilitar a la sociedad civil con leyes y con el control fiscal, los dos polos autoritarios buscaron someterla forzándola a una alineación bipartidista (pp. 16-17).

Otro de los actores que es importante destacar en el período de Alemán es la Iglesia católica, manejada históricamente por el cardenal Miguel Obando. La Iglesia apoyó abiertamente a Alemán durante su campaña y durante todo su mandato. Ante el temor compartido de un probable regreso de Daniel Ortega al poder, la Iglesia también mantuvo una posición de complicidad en relación con la corrupción, a cambio de “considerables beneficios estatales”, posición que benefició al gobierno, dado que “la influencia ideológica de la Iglesia promovió la pasividad que mostró la población nicaragüense frente al saqueo del Estado” (Pérez Baltodano, 2005, p. 7).

Por otro lado, durante el régimen alemanista se aprobaron importantes reformas constitucionales entre su bancada y la del FSLN, respondiendo a un conjunto de negociaciones entre él y Daniel Ortega, mejor conocidas como “el pacto”, que limitaron la participación de los partidos políticos pequeños dentro del sistema y dividieron de forma bipartidista a las instituciones del Estado.

Arnoldo Alemán terminó su mandato bajo serias acusaciones de corrupción, fue encontrado culpable y sentenciado en la siguiente Administración a 20 años de cárcel, que, sin embargo, logró canjear por una prisión domiciliaria, después abierta a Managua y luego al resto del país, gracias a sentencias favorables de jueces bajo el control de Daniel Ortega, como parte de ese pacto. García (2004) comenta:

En la segunda mitad del año en curso (2004) se cumplirán dos años desde que el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, fuera denunciado por la Procuraduría de Justicia (PJ) por el desvío de más de US\$97 millones en fondos del Estado a sus cuentas personales y de trece personas más entre amigos, familiares y ex funcionarios del gobierno. El ex mandatario que estructuró una amplia red para lavar cantidades millonarias en dólares de 15 instituciones del Estado, utilizando como mecanismo una cuenta de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), en Panamá, para luego triangularlos a las cuentas bancarias de sus hombres en la red (p. 19).

El período de Alemán quedó marcado por el sello del fracaso, de la corrupción y de la restauración oligárquica, signos también de una democracia secuestrada y de una sociedad apagada, controlada y orillada a luchar por sobrevivir a cualquier costo. Así lo refleja Vargas (2004):

En sus cinco años, el gobierno de Arnoldo Alemán transitó del desarrollo económico prometido al estancamiento y del estancamiento a la recesión, de la esperanza ciudadana, al desencanto social. Algunos especialistas dicen que en una escala de 10, apenas alcanza la calificación de cuatro. Atrás quedaron las promesas de mayor empleo, del granero de la región

centroamericana, del incremento del poder adquisitivo y de mejores salarios (p. 43).

Arnoldo Alemán selecciona a su vicepresidente, Enrique Bolaños, como candidato para las elecciones de 2001, confiando en mantener la complicidad con respecto a sus actos de corrupción. Sin embargo, en aras de marcar su propio rumbo, Bolaños, ya como presidente, rompería este acuerdo y daría un giro importante al destino político de Alemán.

Enrique Bolaños, el presidente *contra*

56

Enrique Bolaños, veterano líder del somocismo, se ubica en el tercer ciclo de los gobernantes de la derecha nicaragüense, también bajo las coordenadas del antisandinismo, de la aplicación de las políticas neoliberales y de la incondicionalidad con respecto a Estados Unidos. Empresario dirigente de la oligarquía tradicional somocista, Bolaños en realidad fue el más beligerante político antisandinista tras la Revolución, que resalta por sus características personales. Según Nitlapan (2001):

Un patrón de hacienda, de mano firme y voz persuasiva, exitoso en sus negocios y en su familia, un viejo experimentado que hace “un trato” con la gente: da trabajo y exige trabajo, dando y dando, ayúdame que yo te ayudaré. Una positiva imagen masculina y patriarcal, equivalente a la positiva imagen femenina y matriarcal de Violeta Chamorro en 1990. Bolaños, un hombre tradicional y de carisma algo anacrónico calzó con el imaginario político mayoritario de un país de cultura rural en busca de un buen patrón (p. 7).

El eje central de la campaña electoral que desarrolló Bolaños en 2001 estuvo ligado al agotado pero efectivo discurso del *peligro* que representaba para Nicaragua el regreso del Frente Sandinista al gobierno. Bendaña (2002) destaca que el nuevo mandatario buscó la polarización del electorado

(...) para hacer de la diferencia social entre ricos y pobres, algo menos importante que la diferencia entre Sandinistas y anti-Sandinistas. ‘Soy un Contra’, gritó Bolaños durante uno de sus primeros discursos de campaña, ‘seré el primer Contra elegido presidente democráticamente. Y gobernaré en interés de los Contras’ (p. 5).

Bajo esta dinámica, Bolaños también establece un conjunto de promesas similares a su antecesor en la lógica de insertar al país en el proceso de la globalización para *acceder* al desarrollo económico y *resolver* los graves problemas sociales. De igual forma, el candidato del PLC se benefició ampliamente del abierto apoyo de la Casa Blanca. Así lo expresa Rocha (2001):

Ganó con el descarado apoyo del embajador estadounidense Oliver Garza,

quien llegó al extremo de acompañar a Bolaños en una gira para distribuir ayuda a los campesinos damnificados por la sequía, para que no quedaran dudas de que le daba el espaldarazo a Bolaños, un hombre-símbolo del antisandinismo, no sólo por su habitual discurso confrontativo sino por su trayectoria en los años 80 al frente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Quedó claro que las declaraciones y actividades de Oliver Garza fueron mensajes dirigidos a los nicaragüenses con parientes que residen y trabajan en Estados Unidos y que reciben esas remesas en dólares que tan vitales resultan para la sobrevivencia de sus familias y para cubrir la brecha comercial del país (p. 16).

Enrique Bolaños gana las elecciones de 2001 con el 56.3% (Daniel Ortega obtuvo el 42.3%). Toma posesión de la presidencia el 10 de enero de 2002. Su mandato se caracterizará por la profundización de las políticas neoliberales en medio de una fuerte crisis económica que azota a Nicaragua en estos años, por un amplio beneficio hacia el sector empresarial y por ínfimas políticas de corte social.

En el terreno político, Bolaños se distanció de Alemán bajo la bandera de la lucha contra la corrupción, aunque antes, al parecer, como su vicepresidente no solo lo había encubierto, sino que también participaba de los actos delictivos. García (2004) refiere que, en 2002, Arnoldo Alemán reviró que Bolaños también había sido parte de la corrupción:

De ese robo millonario, ni Enrique Bolaños, Presidente de Nicaragua, se salvó, cuando Alemán denunció que ‘mientras Bolaños fue Vicepresidente de la República, recibió mensualmente un estipendio de US\$7,500, además de su salario en nómina; igualmente recibió mensualmente en gastos de la Vicepresidencia, US\$40,100 (y sabe perfectamente que la FDN le entregó fondos para la campaña electoral y capacitación de miles de fiscales del PLC, durante las elecciones de noviembre de 20012’ (p. 19).

Sin embargo, a pesar de los rumores, Bolaños inició un proceso de investigación que finalmente terminaría con la encarcelación de Alemán. Pérez Baltodano (2005) señala cómo:

Para sorpresa de muchos, el presidente Bolaños decidió aplicar el peso de la ley a Alemán y a muchos de sus más cercanos colaboradores. Bolaños contaba con el apoyo de la población, que reclamaba el castigo de los culpables, y con el de EEUU que quería limpiar la deteriorada imagen del PLC para enfrentar la amenaza del retorno del FSLN. La decisión del nuevo mandatario de aplicar la ley también obedecía a un imperativo práctico: neutralizar el poder de Alemán, quien desde su nueva posición en la Asamblea Nacional amenazaba con convertirlo en un presidente simbólico (p. 9).

El procesamiento de Alemán también buscaba forjar una identidad que le permitiera marcar un rumbo independiente con respecto a su *tutor*, consolidar su propia fuerza política y lograr debilitar la alianza que el Frente Sandinista tenía con su antecesor, en aras de protagonizar él mismo esa estrategia para acercarse al poder que Daniel Ortega poseía. Sin embargo, destaca también Pérez Baltodano (2005), que tales intenciones no resultaron, y, por el contrario, Bolaños fracasa en sus objetivos, y durante su mandato se queda aislado frente a la recomposición del pacto Alemán-Ortega, aunado a un control alemanista del PLC, de *parte* de los poderes del Estado y de la fuerza parlamentaria de la derecha en la Asamblea Nacional. La falta de autoridad política y su incapacidad para tejer alianzas con las dos fuerzas reales existentes en el país, representadas por Alemán y por Ortega, se expresaron en la inoperancia de su gobierno. Ortega Hegg (2007) expone que:

El gobierno de Enrique Bolaños finaliza su período con un sello de gobierno sin partido, dada su ruptura temprana y su posterior enfrentamiento con el partido que lo llevó al poder (PLC). El estilo presidencial de Bolaños fue gobernar de cara al gran capital nacional y transnacional, al gobierno norteamericano y los organismos financieros internacionales, subestimando las bases internas de su poder. Ello lo llevó a crisis sucesivas de gobierno por su poca capacidad para negociar exitosamente con las fuerzas políticas mayoritarias en oposición. La ausencia de una bancada legislativa propia le hizo difícil gobernar, pues tuvo grandes dificultades en lograr hacer avanzar su agenda legislativa (p. 215).

Tales circunstancias políticas y su abierta vocación neoliberal, mantuvieron elevados niveles de marginación en el país. El escenario de pobreza y de crisis económica bajo Bolaños se podía comprobar, dramáticamente, con la existencia de los llamados “campamentos del hambre”, que eran pequeños asentamientos de campesinos que abandonaban sus tierras para instalarse en las carreteras de Nicaragua, sobre todo en el Norte, Matagalpa y Jinotega, para pedir cualquier ayuda a quien pasara. Muchos niños y ancianos murieron de hambre y de enfermedades curables en esos campamentos. De acuerdo con un artículo de Flores (2002):

El hambre se apodera nuevamente del Tuma-La Dalia. Aproximadamente 1,800 trabajadores cafetaleros entre hombres, mujeres y niños, están instalados en cuatro plantones a lo largo de la carretera entre este municipio y Matagalpa, demandando al gobierno trabajo permanente, alimentos, viviendas, tierras para producir, y medicamentos para sobrevivir a la crisis económica que enfrenta el país... Los trabajadores cafetaleros asentados en los cuatro plantones dijeron que el gobierno no ha solucionado la crisis cafetalera que los mantiene en el desempleo y viviendo un verdadero calvario en el Municipio del Tuma-La Dalia, del Departamento de Matagalpa... En los cuatro plantones visitados se

observó que la mayoría eran niños hambrientos y enfermos de diarrea, infecciones en la piel como quemada de puro, catarro, calenturas y desnutrición.

La Administración de Enrique Bolaños, el presidente *contra*, transitó políticamente desapercibida, jugando un vergonzoso papel en el plano exterior ante su abierta sumisión a las políticas de Estados Unidos (bajo la etapa de George W. Bush), tal como sucedió con el envío de soldados nicaragüenses a Irak en 2003, y cerrando la pinza del período neosomocista que destruyó las conquistas esenciales de la Revolución, disminuyendo los parámetros democráticos a sus mínimos niveles.

La derecha neoliberal en el gobierno, una época regresiva

Los gobiernos de la derecha neoliberal cumplen con dos grandes objetivos: desarticular el legado político, económico, social y cultural de la Revolución Popular Sandinista, y reconfigurar el sistema capitalista, siguiendo incondicionalmente las pautas del modelo neoliberal, todo ello bajo la recomposición del poder de la oligarquía nicaragüense que existió durante la dictadura. Baltodano (2007) señala que:

Los gobiernos conservadores y neoliberales que gobernaron Nicaragua desde entonces se concentraron en el restablecimiento pleno del modelo capitalista y su economía de mercado, en restaurar al gran capital criollo, revirtiendo todas las transformaciones políticas y sociales que pudo hacer la revolución. Se emprendió un abierto proceso de cooptación del liderazgo sandinista. La paz, se convirtió en la paz de los sepulcros para la mayoría y una nueva minoría tomaría las riendas del país (p. 1).

Los tres regímenes que emergieron tras la derrota electoral del sandinismo en 1990, lograron tales metas a través de sendas reformas constitucionales, de un cogobierno con el propio Frente Sandinista durante la Administración Chamorro, de la aplicación obediente de todas las recetas neoliberales, y del uso de un discurso político demagógico que simplemente administró la pobreza de las grandes mayorías, proceso acompañado de una reconcentración de la riqueza en unas pocas manos, y de una clara limitación al desarrollo democrático iniciado durante la Revolución.

Bendaña (2002) se refiere a los hechos:

Las políticas de “libre mercado” produjeron lo que ni Estados Unidos ni la Contra pudieron conseguir con la fuerza de las armas —ni lo que Chamorro ni los gobiernos de Alemán intentaron conseguir con la fuerza de la ley— esto es, la reconcentración de la tierra, de la riqueza y del poder en menos manos. Sin acceso a créditos ni a facilidades de devolución de pagos y sin la protección de las importaciones baratas, los granjeros,

las cooperativas y las pequeñas industrias disminuyeron en número e influencia. Muchos se trasladaron al sector informal, que con el tiempo, creció más que el llamado sector económico formal. Los revolucionarios e incluso la oposición política cedieron la capacidad de colaboración estratégica entre el FSLN y el gobierno a los caciques del Partido Liberal. Las voces de izquierda dentro del FSLN fueron amordazadas de manera efectiva. El modelo de desarrollo democrático no se veía por ningún lado (p. 3).

Las privatizaciones jugaron un papel clave en la recomposición del poder neosomocista. No solo es importante destacar el proceso que se realizó alrededor de la “piñata”, separando la justa entrega que había hecho la Revolución de propiedades a campesinos y habitantes de las ciudades, y que no estaban regularizadas, sino la venta indiscriminada y corrupta de empresas estatales -muchas de las cuales fueron de Somoza-, que desarticuló la capacidad económica del Estado, limitando profundamente el cumplimiento de sus responsabilidades sociales y fortaleciendo la hegemonía económica de los sectores neosomocistas.

Vargas (2004) destaca que:

Quizá nunca Nicaragua había sufrido un saqueo político comparable al de la década pasada. Con la complicidad y el amparo del FMI y del BM, siempre exigentes de austeridad y transparencia, varios miembros de los gobiernos neoliberales robaron hasta las herraduras de los caballos al galope. En los años de las privatizaciones rifaron todo, hasta los rieles del ferrocarril y los leones de los zoológicos, y todo lo evaporaron. El país fue entregado para conseguir la condonación de la deuda externa, según mandaban los que de veras mandan, pero la deuda, misteriosamente, se multiplicó, en las manos ágiles de Alemán y muchos de sus amigos. Y los ciudadanos, los invisibles, se han quedado sin país viable, con una inmensa deuda (externa e interna) que pagar, platos rotos de esa fiesta ajena, y con gobiernos que no gobiernan, porque están gobernados desde afuera (p. 103).

Además, la mayor parte de las privatizaciones se realizaron de forma fraudulenta, garantizando espacios para grandes actos de corrupción entre los funcionarios de gobierno y los políticos del PLC y del FSLN. En este período se remató casi todo lo que tenía el Estado: teléfonos, energía eléctrica y empresas de variado tipo. Esta dinámica se da sobre todo con los gobiernos de Violeta Chamorro y de Arnoldo Alemán, bajo el sello de la impunidad, pues fueron contados los personajes castigados por la ley. Núñez (2007) se refiere a lo ocurrido:

La restauración contrarrevolucionaria y neoliberal (1990-2006) facilitó en Nicaragua todo el proceso de privatización. Combatir al FSLN sirvió

para legitimar la ofensiva neoliberal. El discurso de la nueva derecha coincidía plenamente con el discurso renovado de una parte de la vieja izquierda que hoy priorizaba la democratización del sistema por encima de las reivindicaciones en torno a la justicia social. La privatización llevó la corrupción a los niveles más insospechados. Los gobiernos extranjeros fueron muy complacientes con los gobiernos neoliberales y la corrupción gubernamental sólo fue señalada para aquellos grupos liberales que entablaron acuerdos parlamentarios con el Frente Sandinista, teniendo como denominador común el enfrentamiento político con la vieja oligarquía conservadora y pro-norteamericana (p. 5).

Los gobiernos derechistas vivieron continuamente bajo un contexto de ingobernabilidad ante el elevado nivel de conflicto político en el seno de sus propias fuerzas. Durante el régimen de Violeta Chamorro, la disputa por el control de la Asamblea Nacional en 1993, por ejemplo, llevó al traslado de los diputados de la UNO a la oposición, y a una permanente crisis parlamentaria que continuó durante el proceso de las reformas constitucionales que culminaron en 1995.

De igual forma, durante el período de Alemán hubo un reacomodo de las fuerzas neosomocistas con el desprendimiento de algunos sectores que no fueron favorecidos con la repartición de espacios gubernamentales. Con Bolaños, el enfrentamiento con el expresidente Alemán se reflejó en su procesamiento penal y en una completa división de la derecha que, entre otras cosas, terminó expresándose en las elecciones de 2006 a través de dos candidaturas, situación que finalmente permitió el triunfo de Daniel Ortega, a pesar de los descarados esfuerzos de Washington por evitarlo.

En el plano económico, estos gobiernos derechistas no solo desarticulaban las atribuciones sociales de la Revolución a partir de la imposición del neoliberalismo, sino que estancaron la capacidad productiva de la economía nicaragüense, orillando al país prácticamente a subsistir de los préstamos internacionales y de cualquier tipo de ayuda externa. No existió ni siquiera la visión de un desarrollo propio que aprovechara las exiguas fuerzas económicas del país.

(Andrés Pérez Baltodano, en una entrevista en julio de 2008, expresa cuál fue el actuar de los tres gobiernos derechistas: Chamorro, Alemán y Bolaños. Señala: En lo que respecta a la gestión económica de los tres gobiernos, no se encuentran grandes variaciones. De nuevo es un país en donde la política económica utiliza los marcos normativos de los organismos financieros internacionales. En Nicaragua se ejecutan, pero se piensan afuera. El equipo de Chamorro era más capaz de implementar los marcos normativos de los organismos internacionales que el equipo de Alemán. El de Bolaños fue bastante débil, muy débil, al punto que en ese proceso de adaptación llegaron a producir una cosa que se llamó “Plan Nacional de Desarrollo”. Aquí hay varios

artículos, y se dice que está tomado de la página web del Banco Mundial, son definiciones, algunas cosas no fueron traducidas, usan términos en inglés, por ejemplo, y supuestamente es un plan que se iba a discutir con todo el pueblo de Nicaragua, y en Nicaragua no se habla inglés).

Bajo esta misma lógica, se da la incorporación de Nicaragua al Plan Puebla Panamá, hoy Proyecto Mesoamérica, y al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). Tales decisiones, sin duda, más que beneficiar económicamente al país, terminan de hundir a la economía nicaragüense en una plena dependencia de la economía estadounidense, situación propia de un estatus colonial.

Indicadores económicos y sociales de Estados Unidos y Centroamérica

| Indicadores | EU | Guatemala | Honduras | El Salvador | Nicaragua | Costa Rica |
|---|--------|-----------|----------|-------------|-----------|------------|
| Población (millones) ¹ | 280 | 11.9 | 6.8 | 6.5 | 5.3 | 4.1 |
| PIB por habitantes (dólares) ² | 34,000 | 1,989 | 986 | 2,325 | 484 | 4,200 |
| Población en situación de pobreza (%) ² | 12 | 65 | 71 | 43 | 63 | 19 |
| Población en pobreza extrema (%) ² | 0 | 33** | 47 | 18 | 36 | 8 |
| Lugar en el índice de desarrollo humano ³ | 7 | 119 | 115 | 105 | 121 | 42 |
| Tasa de analfabetismo (%) ³ | 3* | 30.8 | 24.4 | 20.8 | 33.2 | 4.3 |
| Mortalidad infantil (por 1,000 niños) ³ | 7 | 43 | 31 | 33 | 36 | 9 |
| Esperanza de vida al nacer (años) ³ | 77 | 65 | 69 | 70 | 69 | 78 |
| Número de médicos y médicas por 1,000 habitantes ³ | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.8 |
| Personas desnutridas (por cada 100) ³ | 0 | 25 | 21 | 14 | 29 | 5 |
| Población con acceso sostenible a medicamentos esenciales (por cada 100) ³ | 95-100 | 50-79 | 0-49 | 80-94 | 0-49 | 95-100 |

Fuentes: 1. CEPAL, Información Básica para el Sector Agropecuario, 8 de enero de 2004.

2. CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2003, mayo de 2004.

3. PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 2003.

* CIA, The World Fact Book 2001.

** <http://www.terra.com/finanzas/articulo/html/fin870.htm>

Tomado de ¿Cómo quedó el TLC de Centroamérica con Estados Unidos?, Asociación Equipo Maíz, El Salvador, julio de 2004, p.2, e incluido en mi libro *Del Plan Puebla Panamá al Proyecto Mesoamérica. Un espejo de la globalización neoliberal*, México, Plaza y Valdés, 2009.

La concentración de la riqueza en pocas manos, signo inequívoco de las administraciones neoliberales que van de 1990 a 2006, aunada a las consecuencias negativas que en el terreno social dejó la agresión militar estadounidense, hundieron a los nicaragüenses en la pobreza absoluta. Vargas (2007) señala cifras al respecto:

Entre 1990 y 2006, más de 2 millones de personas se han incorporado a la pobreza. El 82% de la población, es decir, más de 4.2 millones de personas, viven por debajo del umbral de la pobreza y más de 2.1 millones de nicaragüenses malviven en la indigencia (45.1%). Estas cifras, tremendas e insoportables, se dan en el marco del descenso per cápita del gasto social (al haber definido los gobiernos neoliberales como prioritario el servicio de la deuda, se marginó a la inversión social) y de una caída significativa en la eficacia de su empleo. Así, según la CEPAL, los recursos por habitante dedicados a salud, educación, vivienda y protección social han disminuido desde 1990 (pp. 139-140).

Los 16 años de gobiernos de la derecha nicaragüense de Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, implicaron una clara regresión política, económica, social y cultural para Nicaragua; fue una época perdida, en la que además se generó un profundo retroceso en el ejercicio real de la democracia. Si bien existen ciertas diferencias entre el período de Chamorro frente al de Alemán y al de Bolaños, sobre todo con respecto a su relación con el FSLN, y los límites que la mandataria impuso al revanchismo que sí aplicó (en un principio) Alemán, las tres administraciones comparten, finalmente, elementos comunes: el antisandinismo, sobre todo relacionado con lo que fue la Revolución, el conservadurismo social, la democracia liberal (representativa), el modelo económico neoliberal, y una abierta sumisión a la hegemonía estadounidense.

De la mano de la Casa Blanca, estos personajes no solo le borraron el nombre a la Plaza Parque Carlos Fonseca, en Managua, poniendo en su lugar el de Juan Pablo II, y derrumbaron monumentos erigidos en los barrios en honor a los Héroes y Mártires de la Revolución Popular Sandinista, entre otras tantas acciones revanchistas y denigrantes para la memoria colectiva, sino que también desarticularon la dinámica de crecimiento político de una sociedad que había logrado derrotar 45 años de una atroz dictadura, que pretendía ser protagonista de su propia historia y que tenía la esperanza de un futuro justo y libre.

III. LA DEMOCRACIA DE LAS ELITES

La ruta de los pactos

Bajo la óptica de un pragmatismo radical, amparado en la obstinada idea de que solo Daniel Ortega podía garantizar el regreso del FSLN al gobierno nacional a través de las elecciones, pero también en la lógica de ir *recuperando* espacios formales del poder dentro del Estado, surge la determinación de la cúpula del Frente y de su líder de pactar un acuerdo con el sector más duro de la derecha nicaragüense: el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), encabezado por Arnoldo Alemán. Envío (2001) se refiere a este hecho del acontecer político de Nicaragua:

En la noche del 17 de agosto de 1999 se hicieron públicos los 33 acuerdos surgidos del pacto libero sandinista. Todos, orientados a consolidar el bipartidismo y el bicaudillismo. Todos, cambios destinados a oxigenar a los dos caudillos, que traducían las debilidades de ambos grupos negociantes y la incapacidad de cada uno para imponer al otro sus intereses. Nada ni nadie logró detener el pacto ni modificar sus contenidos. Ni las críticas al interior del FSLN, ni las voces de alarma de sectores sociales y pensantes en los medios de comunicación ni las encuestas de opinión pública ni las tímidas advertencias de algunos sectores de la comunidad internacional (p. 31).

Los lineamientos centrales de este entendimiento estuvieron justificados en garantizar supuestamente una *governabilidad* al país, a partir del argumento de que las dos principales fuerzas políticas no tuvieran enfrentamientos directos, priorizando la política del *consenso* para buscar *resolver* los principales problemas nacionales.

(René Herrera, en conversación en abril de 2008, expresa desde la óptica liberal, que con esta estructura de pacto el liberalismo pasa a tener una cuota que no tenía, ni en el Poder Judicial ni en el Electoral, ni en el poder del Estado. En todos los poderes nos empatamos, eso para nosotros fue una victoria, para el Frente una derrota. Pero en el plano de la realidad fue una forma de darle gobernabilidad al país).

Por su lado, desde el FSLN, la argumentación radicaba sobre todo a partir de la estrategia del cogobierno aplicada durante la Administración de Violeta Chamorro, asegurando espacios de poder representativos de su fuerza electoral, a pesar de las consecuencias políticas de un entendimiento de semejante naturaleza. (Orlando Núñez, en conversación sostenida en abril de 2008. Afirmó: La alianza con los liberales para nosotros es para sobrevivencia de los programas. Como ganamos las elecciones en la mayoría los dos, pues nos dividimos las instituciones, es lo que hacen en todo el mundo, y como somos mayoría en el parlamento hacemos acuerdos, mientras podemos y nos ponemos de acuerdo. Ellos siguen siendo liberales y nosotros seguimos siendo sandinistas. Procuramos de otra manera, pero no podemos. Porque sin ellos no pasa la ley, entonces por supuesto que aquí le llaman pacto, no sé cómo le llamen en México, pero es un acuerdo con dos fuerzas que margina a la tercera fuerza, a eso se le llama pacto. A los sandinistas nos acusan de que estamos haciendo pacto con los ladrones, y a los liberales los culpan que están haciendo pacto con asesinos comunistas. Y, por supuesto, buscamos nosotros un denominador común que es marginar a la oligarquía, a los terceros).

Sin embargo, el pacto implicó determinaciones muy diferentes a las justificadas por los actores en cuestión. En primer lugar, habría que señalar su esencia antidemocrática, pues además de que obviamente no hubo ningún tipo de consulta ciudadana al respecto, ni siquiera la acción respondió a una decisión partidaria. Se trató de un acuerdo entre las cúpulas, y, en particular, entre sus líderes. Así, el pacto consolidó un bipartidismo que marginaba desde la propia ley a las fuerzas minoritarias o emergentes, con lo que también se afianzaba un *bicaudillismo*, a través de las figuras de Daniel Ortega y de Arnoldo Alemán; limitaba la participación popular en la lógica de estar controlada desde las burocracias partidistas, y, finalmente, canceló cualquier posibilidad de reconstruir la democracia popular y participativa que se había estado gestando durante la Revolución Popular Sandinista.

El pacto dispuso un conjunto de reformas constitucionales con las que se modificó el sistema electoral en 2000, para que solo dos fuerzas, el FSLN y el PLC, tuvieran el acceso a los diferentes espacios de poder, cerrando las posibilidades a los partidos minoritarios. Envío (2001), señala las consecuencias de las referidas reformas:

La reforma electoral pactada actuó contra el municipalismo, la descentralización y el surgimiento de líderes locales, eliminando las asociaciones de suscripción popular en la elección de alcaldes. Actuó

contra el pluralismo diseñando obstáculos casi insalvables para el surgimiento de nuevos partidos políticos, para la pervivencia de los existentes y para la creación de alianzas entre los partidos. Actuó contra la democracia representativa y contra la democratización a lo interno de los partidos cancelando la posibilidad de elegir directamente a los diputados y estableciendo que sólo podrán ser candidatos quienes vayan en las “planchas” confeccionadas por los partidos. La Ley redujo el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta de 45% a 40%, e incluso a 35% si el partido del segundo lugar no superara el 30% (p. 31).

Con esta estructura, que en realidad terminó de consolidar al partido político en Nicaragua como la única herramienta para que un ciudadano pueda ejercer sus derechos políticos, el PLC y el FSLN aseguraron el control del poder en el país, en todos los niveles, desde los principales cargos en el Estado hasta el ámbito municipal. Precisamente, uno de los tres aspectos que definían a la Revolución era la reivindicación del pluripartidismo, bajo la óptica del pluralismo y como parte de la democracia participativa que se estaba construyendo.

Téllez (2008) se refiere a esta situación de la siguiente manera:

La democracia representativa en Nicaragua nos da el derecho de expresarnos políticamente a través de organizaciones políticas, no solamente de partidos políticos. Esto significa que “pluralismo político” no sólo es pluripartidismo. El pluralismo garantizado por la Constitución implicaba que la gente podía asociarse por suscripción popular y presentar candidaturas municipales. El primer golpe político del pacto fue reducir el pluralismo a pluripartidismo (pp. 12-13).

Los espacios del Estado que acordaron repartirse fueron la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, el directorio de la Superintendencia de Bancos, el Instituto de la Vivienda, los jueces del Ministerio Público, y los magistrados de Apelaciones, entre los principales.

Para que los dos partidos tuvieran *suficientes* cargos para repartirse, se acordó la ampliación de varias instancias, con lo que además creció de manera importante el aparato burocrático del Estado, y, por lo tanto, la partida del presupuesto público para salarios y compensaciones.

Envío (2001) señala que:

El pacto aumentó la burocracia estatal de altos funcionarios con megasalarios, causando un notable incremento en el presupuesto y bipartidizando todas las instituciones; en el Consejo Supremo Electoral los magistrados pasaron de 5 a 7, en la Corte Suprema de Justicia los magistrados pasaron de 12 a 16 y la Contraloría General de la República se conformó con 5 contralores en vez de uno (p. 31).

De igual forma, el pacto alcanzó el ámbito económico, pues se aprovechó para consolidar a los principales grupos de poder que giran alrededor de ambas fuerzas políticas. Por ello, se continuó con la visión neoliberal de privatizar empresas estatales, algunas de ellas catalogadas durante la Revolución como Área Propiedad del Pueblo, proceso iniciado por el régimen de Violeta Chamorro.

Baltodano (2007) da su versión de lo que ocurre en el país en ese momento:

El pacto se expresó también, aunque calladamente, en numerosas negociaciones subterráneas en torno a la propiedad. Con ellas se incrementó el capital del emergente grupo económico sandinista, integrado también por ex-dirigentes obreros y campesinos, que ya para entonces usufructuaban propiedades negociadas en los Acuerdos de Concertación con el gobierno de Violeta Chamorro y ahora repartidas en el pacto con Alemán. Estas oscuras negociaciones permitieron también, sin ninguna denuncia u oposición del FSLN, que Arnoldo Alemán desplegara la corrupción más galopante nunca antes vista en Nicaragua. Así creció el nuevo grupo económico emergente liderado por Alemán, el nuevo socio de Daniel Ortega (p. 246).

Además, el pacto incluyó la *exoneración* judicial para que Arnoldo Alemán, sentenciado por el delito de corrupción por más de 100 millones de dólares, pasara su sentencia bajo la figura de arresto domiciliario, y luego con la libertad de transitar por Managua y, finalmente, por el país, como lo habíamos señalado, gracias a los jueces leales a Daniel. Incluso, sus derechos políticos fueron plenamente reintegrados con el tiempo, al grado de volver a presentarse como candidato presidencial en los comicios de noviembre de 2011.

El polémico acuerdo entre liberales y sandinistas del FSLN también deja en claro el *secuestro* de la democracia nicaragüense, al ubicar el alcance de las decisiones cupulares por sobre la voluntad de la sociedad, así como la *ventaja* de aceptar los mecanismos de la política *tradicional* para asegurar los espacios del poder.

De Castro (2007), entrevista a Orlando Núñez, quien se refiere al pacto y expresa:

Pero aquí el verdadero pacto es el del 90 en el que la izquierda aceptó disputar el poder a través de las elecciones. En el Protocolo de Transición, cuando perdimos la batalla electoral, hicimos un arreglo con doña Violeta (Chamorro), que es el acuerdo de gobernabilidad con el que estamos ahora. Ahí aceptamos el disputar el poder solamente a través de las elecciones. Y aceptamos vivir en una economía de mercado. A partir de ahí todo lo que pasa está contra nosotros. Es difícil para un partido de izquierdas, enfrentar al sistema a través de las elecciones. ¿De dónde vas a agarrar los 5 millones de dólares que vale una campaña? Tienes que pedirselos a Kadafi o a Fidel, o a los empresarios cercanos. No se

puede ser tan puro. Si lo fuéramos no hubiéramos firmado el Protocolo de Transición. Estaríamos como antes: guerra al mercado y guerra a la democracia burguesa (pp. 45-46).

En cualquier país del mundo existen pactos políticos de diversa índole. Sus fundamentos están determinados por razones particulares, relacionadas con las necesidades de quienes los protagonizan. Las partes en cuestión ceden y se benefician de lo que se acuerda. Sin embargo, para el caso nicaragüense, el pacto se volvió muy polémico, no solo por los parámetros ideológicos tan aparentemente distantes entre sus impulsores, sino porque constituyó un golpe estructural a la incipiente democracia que se venía construyendo en el país centroamericano desde la Revolución Sandinista.

Además, ambos partidos no tuvieron la capacidad de generar por sí mismos la fuerza necesaria para convencer a la mayoría de la población en las elecciones, y con ello ocupar los espacios en disputa, lo que también refleja la ausencia de una propuesta política propia que fuera convincente, esto es, tuvieron que recurrir al adversario para sostenerse en el poder, aunque para este país la cultura del *pactismo* no era novedad. Sobre este tema, Baltodano (2009) señala que:

La historia de los partidos políticos en Nicaragua ha estado jalonada por la historia de los pactos. Desde la ruptura del pacto federal de 1838, pasando por el pacto de 1857 entre Martínez y Jerez, transitando por los pactos Dawson, discurriendo por el pacto Chamorro Bryan, por el Pacto del Espino Negro de 1927, por el pacto Somoza-Cuadra Pasos, por el pacto de los generales Somoza-Chamorro de 1950 y luego por el pacto libero-conservador Agüero-Somoza de 1971 (p. 91).

El pacto Ortega-Alemán, así como el efímero pacto Ortega-Bolaños, y los que históricamente se dieron en esta nación, constituyen un ejemplo claro del carácter elitista de la política latinoamericana, salvo contadas excepciones como la propia Revolución Popular Sandinista, la Revolución Cubana, el gobierno de la Unidad Popular del presidente Allende, en Chile, y, en general, los procesos de transformación hacia el socialismo que se viven en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Tras la consolidación del pacto en cuestión, Nicaragua presenció las consecuencias de ese acto de poder *bicaudillista*, destacando como las más importantes tanto la impunidad para Alemán como el triunfo de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de 2006 y su *reelección* en 2011.

Caudillismo y pragmatismo en la cultura política nicaragüense

Tras los procesos de independencia, los Estados latinoamericanos se erigieron a partir de las estructuras políticas *heredadas* de las metrópolis, prevaleciendo en el siglo XIX y en buena parte del XX la hegemonía de las oligarquías que se formaron en ese proceso, y que en su origen provenían de quienes concentraban *~realmente~* el poder colonial. Sin embargo, la cultura política predominante en aquella época no ha desaparecido por completo y, hoy, en pleno siglo XXI, algunos países continúan manteniendo dicha característica. Nicaragua es representativa de tal situación.

La fuerza de los liderazgos regionales, conformados como verdaderos poderes locales, que en muchas ocasiones sustituyen la hegemonía del centro político-administrativo, así como las figuras de los caudillos *~que prevalecen en las circunstancias más complejas~*, son representativas de las estructuras originadas en la época colonial. En este sentido, la consolidación de la oligarquía en América Latina sienta las bases de los llamados Estados oligárquicos que, bajo versiones *renovadas*, predominan en muchos países de la región, como en el caso centroamericano. Respecto de las oligarquías, dice Vilas (1994), que:

El viejo término oligarquía mantiene su pertinencia para conceputar a estos grupos tradicionales y al mismo tiempo de gran dinamismo económico, en cuanto sintetiza el amplio arco de dimensiones que dan identidad a la clase: la economía sin dudas *~y ante todo la propiedad terrateniente~*, pero también la política, la ideología, la educación, los estilos de vida, la continuidad histórica; la articulación de identidades de clase con prácticas de patronazgo y fomento de clientelismos; la organización empresarial montada sobre redes de parentesco. Este conjunto de factores, materiales y culturales, ayuda a explicar la solidez y al mismo tiempo la maleabilidad de los grupos dominantes centroamericanos, y su particular concepción de la política y el Estado. Se trata, en la concepción oligárquica, de la vigencia de una superioridad que no es sólo económica y política sino, ante todo, histórica, cultural y racial; el ejercicio del poder político se deriva de esa superioridad y resulta legitimado por ella (p. 89).

En el caso nicaragüense, de igual forma, el desarrollo político atraviesa por el tiempo bajo el sello de los caudillos, como representantes máximos de las oligarquías, que mantienen su liderazgo por sobre las instituciones, aunque en realidad, como ha sucedido en la región latinoamericana, las oligarquías constituían las instituciones en sí mismas.

El mejor ejemplo de ello lo representa la dinastía somocista, la cual controló durante 45 años el poder político y económico del país, aun sin estar todo el tiempo de manera *formal* en las estructuras políticas. Antes de los Somoza, también las familias Sacasa, Chamorro y Zelaya, entre otras, acapararon los espacios del poder nacional. En la actualidad, para el período

que estamos analizando, habría que agregar también los apellidos Ortega y Alemán, a pesar de que, gracias a la Revolución Sandinista, Nicaragua construyó una institucionalidad que respetó los tiempos establecidos para el traspaso del gobierno, hasta que en 2011 se interrumpe el proceso tras imponerse la reelección de Daniel Ortega, en contra de lo establecido por la Constitución.

La singularidad del desarrollo histórico nicaragüense *facilita* la consolidación de caudillismos en su clase política. Sin embargo, es importante separar el período de la Revolución Sandinista, en la que, aun con los errores cometidos, prevalecía una participación popular inédita, por la vía de una democracia participativa, así como una dirección colegiada, con todo y la existencia de un presidente, aunque al mismo tiempo, sobre todo hacia el final de los años 80, pueda ubicarse a la Dirección Nacional como un *caudillo colectivo*, y al presidente como el *caudillo mayor*, por aquello de “Dirección Nacional, ordene”, consigna que también se entiende en un contexto de unidad en torno a la defensa del proceso revolucionario y del país frente a la agresión del imperio.

Así, el proceso político que se vivió durante la Revolución, rico y paradójico -tanto por su alcance como por sus límites y deficiencias-, debe valorarse en esa dimensión, y que, tras la derrota de 1990, terminó por diluirse ante el agresivo retorno y la hegemonía que impuso la política tradicional. Por ello, sorprende la incorporación del sandinismo en esta lógica, porque, precisamente, uno de los motivos centrales de su lucha era la democratización de la política, a través de la participación popular y de los mecanismos participativos. Rocha (2004) señala que:

El caudillismo es un factor permanente de demolición de la escasa institucionalidad nacional y convierte al FSLN en un reproductor de los vicios de la cultura política nacional. La intolerancia ante los liderazgos alternativos al interior del partido rojinegro es sólo una rama más de la intolerancia que también se expresa en el FSLN ante otras posiciones y líderes políticos y sociales. Como Marx ya observó, al reflexionar sobre el fin del culto napoleónico en la Francia de principio del siglo XIX, *se necesita una revolución espiritual para abolir el cesarismo*. Mientras no se supere el caudillismo en el FSLN, no sólo no surgirán otros liderazgos sandinistas, tampoco veremos un cambio en el desempeño político de esta organización. Y, a fin de cuentas, será Nicaragua la que pierda (pp. 34-35).

El caudillismo contemporáneo en esta nación centroamericana está relacionado directamente con el pragmatismo político, sobre todo en el sentido de las coordenadas de la estrategia de las fuerzas e individuos que desarrollan esta práctica. La obsesión de mantener el poder, sin duda, tiene que ver con las formas y los medios, como en el caso del pacto Ortega-Alemán. En esencia, bajo esta visión no importan las diferencias políticas-ideológicas, sino asegurar los espacios de poder a costa de lo que sea. (Al respecto, René

Herrera, en conversación en 2008, en Managua, señalaba que en Nicaragua el realineamiento estratégico de la política se lo dan los dos liderazgos dominantes. Cede la presión ideológica, se abandona la presión ideológica y el sandinismo articula sus luchas por conservar el poder bajo la bandera antiimperialista, y el liberalismo reconstruye sus fuerzas bajo la bandera del antisandinismo. Los dos usan retóricas. Daniel va a las elecciones del 96 cuando nosotros ganamos, va con un discurso despojado de mucho contenido ideológico. Va por el poder. Y reconstruye su partido, logra ganar 38 puestos en la Asamblea Nacional impidiendo que nosotros con 53 pudiéramos hacerle reformas a la Constitución. [...] Y la consecuencia fue la negociación. Y los dos líderes habiendo triunfado están obligados a hablar).

Por ello, en Nicaragua las grandes decisiones nacionales de las últimas dos décadas han sido tomadas por las cúpulas políticas, y, específicamente, por sus representantes principales. El pueblo ha sido prácticamente un simple observador del proceso. No ha tenido mayores canales de expresión, participación y decisión, salvo su voto en los procesos electorales. Orozco (2007) señala:

Los partidos políticos carecen de institucionalismo democrático y excluyen sectores representativos como los jóvenes, las mujeres y las minorías étnicas. Los líderes de estos partidos gravitan hacia el oportunismo político, no atienden las necesidades sociales, y protegen el *status (sic) quo* tradicional y el caudillismo a expensas de las prioridades nacionales (p. 53).

En Nicaragua, el caudillismo, el pragmatismo y la democracia pactada han deteriorado el nivel de la conciencia política de la sociedad, la discusión de las ideas y el debate sobre los grandes problemas nacionales, lo cual se refleja concretamente en la apatía política que prevalece entre la ciudadanía y la sociedad en su conjunto. Por ello, Rocha (2004) expone:

Con los golpes asestados a la institucionalidad, el FSLN y el PLC han ensanchado la brecha entre Estado y sociedad, abonando a la fragilidad del país frente a las tendencias negativas de la globalización y el neoliberalismo. Los gremios, movimientos sociales, ONG y la ciudadanía perciben que, con reglas del juego que oscilan al capricho de los caudillos, se les escapan las decisiones fundamentales y su participación en la política queda restringida a legitimar con sus votos unas elecciones convertidas en lo que Pérez Baltodano llama la *rifa quinquenal del derecho a la impunidad*. Hay crisis de la democracia porque los ciudadanos se ven expuestos al efecto de decisiones que no controlan. El FSLN y el PLC son responsables de la apatía política que de todo esto se deriva. Y el saldo es obvio: a mayor apatía, menor representatividad de los diversos intereses y menor democracia (p. 39).

Tal situación se fortalece ante la notable ausencia de una producción teórica y programática entre los partidos políticos nicaragüenses, característica también presente en otros países latinoamericanos y caribeños. En el ámbito partidario, prácticamente, no hay debate teórico, ni reflexiones en torno a la crisis económica, ni análisis sobre la democracia y sus estructuras políticas. Por ello, la falta de proyectos nacionales basados en contenidos ideológicos termina por desaparecer las fronteras entre los partidos políticos, y la diferencia se reduce al *marketing*: la mejor sonrisa, la frase *pegajosa*, la capacidad de movilización y la cantidad de recursos, destacando como elemento prioritario el espacio y el alcance de los medios masivos de comunicación.

Pérez Baltodano (2005) se refiere a la importancia de configurar verdaderos partidos políticos, y afirma:

Sin filosofía democrática no pueden existir partidos democráticos porque los partidos son eso: organizaciones que representan visiones de la sociedad. En Nicaragua, donde priva una profunda inconsciencia sobre el valor del pensamiento como fuerza constitutiva de la historia, hay que reiterarlo: sin filosofía democrática, sin articulaciones filosóficas democráticas que hagan sentido de la realidad, no pueden existir verdaderos partidos políticos porque un partido político no es simplemente una sigla pronunciable, una bandera, y una oficina-cuartel. Un partido es una organización que ofrece una visión *teórica* de la realidad y una estrategia de acción para materializarla. ¿Por qué una visión teórica? Porque como dice la canción: *Para construir el futuro, hay que soñarlo* -teorizarlo, diría yo- *primero* (p. 22).

El carácter restringido y excluyente de la democracia nicaragüense se entiende con mayor claridad cuando contrastamos la actualidad con el reciente pasado revolucionario, en el que las ideas predominaban por sobre las formas tradicionales de la lucha por el poder. Para la derecha, este tipo de democracia limitada no tiene mayor problema, pues es parte de su propia esencia definitoria: no debe existir una relación directa con el pueblo, con las *masas* y sus necesidades, su sentir. Para la derecha y los dueños del capital, lo que en realidad debe prevalecer es una *relación* basada únicamente en las coyunturas electorales, y a través del filtro que representan los medios de comunicación. Del ámbito económico y social de la democracia, de la inclusión y de la equidad, de la justicia social, ni una palabra.

Por el contrario, la izquierda en Nicaragua, en la actualidad identificada una parte importante de ella ~y a pesar de todo~ con el sector del sandinismo ubicado en el FSLN, tiene un origen popular, ligado con sus demandas históricas y con planteamientos de transformación estructural en los diversos espacios de la vida nacional, con la búsqueda de la justicia social, de la libertad, de la democracia integral y del fin de la explotación. Por ello, es tan grande la sorpresa del nivel de reconfiguración del Frente, como el profundo alejamiento de la esencia que lo creó.

Baltodano (2007) comenta que:

Este viraje de Daniel se expresó primero marginando a los principales dirigentes de la corriente Izquierda Democrática, congelando la lucha popular y la lucha ideológica. Progresivamente optó por sustituir la lucha social por la lucha por los espacios de poder. Reemplazó la lucha cotidiana por el electoralismo. La lucha popular por el Pacto. La utopía por el pragmatismo. El llamado realismo político ocupó el lugar de la conciencia crítica. La dirección colectiva, por la promoción exclusiva de su liderazgo. Sustituyó en la dirección del partido a cuadros político-ideológicos por empresarios sandinistas. Sin ofrecer resistencia, favoreció desde el parlamento las políticas de privatizaciones, la legislación que restauraba la plenitud de la economía de mercado (p. 245).

De esta forma, la sociedad nicaragüense resulta la principal perjudicada a partir de las consecuencias prácticas de esta reconfiguración, esto es, la principal fuerza partidista que la defendía y que luchaba por su bienestar, que emergió de sus propias entrañas, terminó por adoptar las coordenadas operativas de la política tradicional que siempre ha utilizado la derecha, abandonando las reivindicaciones fundamentales de su pasado revolucionario.

Otra repercusión trascendental está ligada directamente al descrédito de la política y a su percepción como un espacio utilitario de beneficio personal. ¿De qué otra forma podría impactar la imagen de un expresidente que robó millones de dólares, y al que se *condena* de forma privilegiada, dejándolo finalmente en libertad, y viéndolo en los comicios de 2011 nuevamente como candidato? Por ello, “frente a una realidad en la que ciertas necesidades objetivas y subjetivas son cada vez más difíciles de cubrir por medios socialmente aceptados, los medios ilícitos se convierten en una opción para alcanzar las expectativas de ascenso y prestigio social” (Vargas, 2004, p. 136). Lo anterior, sobre todo, ante el ejemplo contundente que ofrecen quienes detentan el poder en Nicaragua.

Orozco (2007) explica que:

La naturaleza estructural de la corrupción es aún más evidente si se considera la profunda desigualdad de la sociedad nicaragüense comparada con el enriquecimiento generalizado de los funcionarios, mediante el uso ilícito de los fondos públicos. En un país donde el salario mensual promedio es menos de 100 dólares, los ministros y asesores ganan entre 5000 y 15000 al mes. Estas cifras son comparables e incluso exceden a los ingresos de los ejecutivos en el sector privado, que generalmente no pasan de 8000 (p. 59).

Así, el caudillismo y el pragmatismo constituyen dos elementos centrales para entender el secuestro de la democracia en este país centroamericano. El alto nivel de religiosidad en el pueblo nicaragüense, con sus consecuentes valores conservadores, el poder de los medios de comunicación en la defensa del actual

statu quo (salvo los medios críticos y alternativos, que los hay), y la indudable simpatía que una buena parte de la sociedad tiene por Daniel Ortega, explican de igual forma la realidad existente.

El caudillismo también se entiende a partir del objetivo real que se persigue para estar en el poder, y los actores económicos con los que se tiene el compromiso verdadero, además de las prácticas verticales. Las reelecciones presidenciales, aprobadas por voluntad popular, no representan ningún problema en la medida en que beneficien a la sociedad. No importa que un líder político pueda estar en el poder muchos años, importa qué es lo que hace por su pueblo y que se mantenga por una decisión soberana de la ciudadanía, con ética y honestidad. Para el caso nicaragüense, específicamente con respecto a Daniel Ortega, ya no se diga de Arnoldo Alemán, el carácter caudillista y la idea de seguir gobernando se cuestiona por la forma y el fondo, así como por los magros resultados sociales de su gestión en el período 2007-2012.

Para ejemplificar esta situación, se puede leer lo que expresa el estudio de Ramón Padilla que aparece en una página de la CEPAL (2009):

(...) la tasa de desempleo abierto nacional repuntó al pasar de 4.9% en 2007 a 6.1% en 2008. La población económicamente activa aumentó a una tasa mayor (5.6%) que la de ocupación (4.3%). De acuerdo también con datos de la encuesta de hogares, la tasa de ocupación informal subió ligeramente de 62.7% a 63.5% de la población ocupada. El salario promedio nominal se elevó 7.8%, lo que no compensó la inflación promedio observada en 2008, por lo que el salario promedio real disminuyó 10.2%.

A lo anterior, se agrega el *espíritu antagónico* de la sociedad nicaragüense, el nivel de polarización que históricamente ha tenido, y los largos períodos de conflicto por los que ha atravesado el país, aspectos que sin duda han afectado profundamente su desarrollo, tal como ha sucedido en otros países de la región.

Serrano Caldera (1993) concluye que:

Somos una sociedad en permanente coyuntura, en la que la discontinuidad y la ruptura constituyen la característica dominante, esa situación ha impedido realizar el desarrollo que nos es propio y que exige una mínima estabilidad producto de la concertación y del acuerdo social (p. 30).

Lejos de la visión conservadora en torno al caudillismo, para el caso nicaragüense estamos ante un fenómeno relacionado con la férrea obsesión por el poder bajo la figura de dos líderes de origen político opuesto, adversarios durante muchos años, pero aliados en torno a la repartición del poder, con un fundamento político basado en el pragmatismo, y totalmente responsables del descrédito creciente que la sociedad tiene de la política, así como de la degradación de la democracia que se ha dado en Nicaragua.

Las elecciones presidenciales de 2006 y el regreso de Daniel Ortega

Las elecciones presidenciales de 2006 llegaron, y, en su cuarto intento, Daniel Ortega alcanzó la victoria. Independientemente del conjunto de factores internos y externos que facilitaron este resultado, el hecho en sí mismo constituye un viraje político trascendental para Nicaragua, después de 16 años de gobiernos neoliberales, surgidos tras la derrota sandinista del 25 de febrero de 1990.

Ortega Hegg (2007), se refiere a los resultados de los comicios y expresa: Los resultados del Consejo Supremo Electoral indican que Daniel Ortega ganó por el 38.07% de los votos frente al 29% de la derechista Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) de Eduardo Montealegre, al 26.21% del candidato también derechista del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), José Rizo y del 6.5% del candidato del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Edmundo Jarquín. AC no logró llegar al 1% de los votos. Las elecciones en términos generales fueron aceptadas por todos como legítimas y los incidentes ocurridos no se consideran que invaliden los resultados (p. 212).

En esta campaña presidencial no se dio la histórica polarización sandinismo-antisandinismo que había existido desde las elecciones de 1984, acontecimiento que sin duda resultó altamente benéfico para Daniel Ortega, pues el FSLN, a pesar de sus profundas transformaciones, logró mantener el voto duro de su militancia, tomando en cuenta que este partido ha seguido siendo el más grande y mejor organizado del país, con todo y que el MRS obtuvo en estas elecciones su más alta votación, tras su primera participación en 1996. Así lo reseña Ortega Hegg (s.f.):

En las elecciones de 2001, Daniel Ortega obtuvo 42.3% de los votos y perdió, y hoy está ganando con el 38%. Por el contrario, el voto no danielista unificado en 2001 permitió la victoria de Enrique Bolaños, candidato del PLC y actual presidente, con casi el 56.3% de los votos. Una cifra similar a la que daría la suma de los votos obtenidos por ALN, disidencia del PLC, que obtuvo en esta ocasión el 29%, y los votos obtenidos por el PLC (26%) en las recientes elecciones del 5 de noviembre de 2006 (pp. 3-4).

Sin embargo, el triunfo de Daniel Ortega se explica a partir de cuatro elementos centrales, en orden de importancia: a) la división de la derecha; b) el porcentaje mínimo de votación para considerar el triunfo presidencial, modificado a partir del pacto; c) los compromisos de campaña en torno a la situación socioeconómica; y d) la política de alianzas.

En primera instancia, el PLC y la ALN —esta última apoyada por importantes empresarios nacionales y, para esta coyuntura, por el gobierno

estadounidense~ no lograron definir una candidatura común para los comicios, situación en gran parte originada por la pugna entre Bolaños y Alemán, que se enfrentaron durante todo el período presidencial del primero, envueltos paradójicamente en la dinámica de los pactos con Daniel Ortega, pero también por las obsesiones de controlar los espacios de poder que facilitaron grandes actos de corrupción a estas fuerzas derechistas.

En un análisis del Centro de Investigaciones de la Comunicación, CINCO (2006), se lee que:

La ALN rompe con el PLC en el marco de tres factores: el desgaste político del partido y su liderazgo, la búsqueda de un candidato potable para las elecciones y las presiones de la Embajada de EU por remover el control político de Arnoldo Alemán sobre un liderazgo al que ven con pocas posibilidades de triunfo (p. 2).

A pesar de que en ambas partes existían sectores inclinados a un acuerdo, la derecha marchó dividida a la elección con el obvio desenlace de su derrota. Ni siquiera la intervención de la Casa Blanca, obviamente violando las leyes electorales nicaragüenses, logró unificar las posturas.

López (2006) señala en una nota informativa, los niveles de injerencia de EE.UU.:

El congresista estadounidense Dan Burton instó este domingo a los candidatos a la presidencia por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN, derecha), Eduardo Montealegre, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), José Rizo, y Edmundo Jarquín, del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS, izquierda), a unirse para impedir un eventual triunfo electoral del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). “Les dije que si Daniel Ortega era electo (..) sería muy difícil mantener las relaciones”, dijo Burton, quien preside el Subcomité de Relaciones Internacionales para el Hemisferio Occidental del Congreso estadounidense.

Otro elemento determinante en la victoria de Daniel Ortega es el referido al porcentaje mínimo de votos para obtener el triunfo en una primera vuelta, modificado constitucionalmente en 2000, dentro de lo establecido por el pacto, y que disminuyó del 45 al 40%, y hasta 35%, si el candidato ganador obtenía una ventaja superior del 5% frente al segundo lugar.

Sin duda, con el hecho de una votación de la derecha dividida, aunado a la “ausencia” de la polarización *tradicional*, y con un mínimo de votación relativamente cómodo, las posibilidades de triunfo para el FSLN y su abanderado se consolidaron totalmente en estos comicios.

Las promesas de campaña sobre encauzar desde el gobierno políticas sociales para atacar a la pobreza extrema y resolver el estancamiento económico nacional, tuvieron eco en la sociedad. Los estragos causados por 16 de años de

neoliberalismo habían generado un considerable rechazo social a ese modelo, factor que Daniel Ortega supo capitalizar electoralmente, sobre todo, a partir del voto duro e histórico de la militancia del FSLN.

Ortega Hegg (s.f.) destaca otros elementos que fueron fundamentales para los resultados electorales de 2006:

No menos importantes fueron las enormes expectativas que generó entre sus seguidores el discurso de campaña del candidato Ortega, de la realización de una “revolución espiritual” cuyos resultados iban a ser la erradicación total de la pobreza, con “cero desempleo, cero hambre, cero analfabetismo”, emulando el discurso del presidente brasileño Lula da Silva. Esta revolución incluía la reestructuración de las deudas de todos los deudores, crédito para todos los sectores económicos, al igual que vivienda, salud y educación, incluyendo la educación secundaria gratuita, mantener el 6% del presupuesto de ingresos de la República para las universidades, crédito a los estudiantes, llevar las transferencias municipales del 7% actual al 10% del presupuesto ordinario de la República, tierra, crédito y asistencia técnica para los campesinos, incremento salarial en todo el Estado, incluyendo fuerzas armadas; además de inversiones sustantivas en infraestructura, como energía, carreteras y caminos, puertos, comunicaciones, y la construcción de un canal interoceánico por Nicaragua, entre otros (p. 3).

El Frente determinó buscar acuerdos con personalidades y con organizaciones que pudieran garantizar mayores votos, acorde con una visión pragmática de las alianzas; y estas se hicieron, paradójicamente, con los sectores que durante la RPS conformaban el *enemigo histórico*, con lo cual quedó demostrada la concepción de llegar al gobierno sin importar el precio.

La principal alianza que tejió Daniel Ortega fue con monseñor Miguel Obando y Bravo, el capellán de la contrarrevolución, el otrora crítico más contundente y con mayor peso que atacó los contenidos esenciales de la Revolución, y quien además influyó de manera determinante para que el candidato sandinista perdiera en las tres elecciones anteriores.

No solo se negoció una inclinación pública y abierta hacia el catolicismo por parte de Daniel Ortega y su entorno familiar, olvidando por completo la importancia del Estado laico, sino que se entregó en bandeja de plata una de las principales banderas de lucha de la Iglesia: la penalización del aborto en cualquiera de sus modalidades. El 26 de octubre de 2006, poco antes de los comicios, con el voto de los 38 diputados del FSLN, y obviamente con los de la derecha, se aprobó una reforma constitucional que penalizaba hasta con 20 o más años de cárcel el aborto terapéutico, vigente en Nicaragua desde el siglo XIX. Baltodano (2007) destaca cómo:

En ocasión de la criminal derogación del aborto terapéutico, Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, vocera oficial del partido y del

gobierno, declaró: “somos enfáticos: no al aborto, sí a la vida. Sí a las creencias religiosas; sí a la fe; sí a la búsqueda de Dios, que es lo que nos fortalece todos los días para reemprender el camino”, “el FSLN respalda la posición de la Iglesia Católica y de las iglesias en general contra el aborto en cualquiera de sus formas porque es un atentado contra la fe, contra la vida” (p. 2).

La conversión religiosa de Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, realizada de forma pública y con obvios fines electorales, representó una de las transformaciones ideológicas más sorprendentes de su trayectoria política. El otrora revolucionario sandinista que combatió junto a sacerdotes de la Teología de la Liberación durante la lucha contra la dictadura somocista y durante el período de la Revolución, cuando incluso dos destacados representantes de esa corriente, Ernesto y Fernando Cardenal, fueron ministros de Cultura y de Educación, respectivamente, terminó aliado al sector católico más conservador de Nicaragua.

Guevara (2008) se refiere a los hechos antes expuestos:

Ellos comenzaron marginando el análisis marxista de los fenómenos naturales y sociales, buscándoles explicación en la astrología y en creencias esotéricas análogas. Y aunque nunca fueron grandes marxistas, no pudieron o no quisieron adoptar la teoría marxista para orientar su actividad política. Se puede ser revolucionario sin ser marxista, pero sin el método marxista para el análisis social el revolucionario estará más cerca del aventurero y más proclive a la “conversión”. Después, cortaron su relación con los exponentes de la Teología de la Liberación identificados con el proyecto revolucionario, quienes utilizaron el marxismo como instrumento de análisis de la realidad latinoamericana encontrando que entre cristianismo y revolución no había contradicción y demostrando con su práctica que no la había. Finalmente, Ortega y su gente adoptaron las posiciones político-ideológicas de la tendencia vaticanista de la Iglesia Católica, aliándose al sector católico más fundamentalista, comparsa de todas las derechas en todas las épocas (p. 38).

Además, la llamada *revolución espiritual* que emprendió la pareja Ortega-Murillo, convirtiéndose en la columna vertebral de la campaña de 2006, se mantuvo y se profundizó en el gobierno, representado con el lema “Nicaragua Cristiana, Socialista y Solidaria”, retomado de igual forma en el discurso de la campaña de 2011. El radical viraje también tiene su explicación en la necesidad de anclarse en el reducto religioso del pueblo nicaragüense, de gran proporción, ante el vacío ideológico que caracteriza al danielismo y al FSLN. La estrategia no solo funcionó en las elecciones, sino que se mantiene incluso como política de Estado. Rocha (2009) enfatiza cómo:

En la arena de la construcción del Estado laico, destaca el retroceso manifiesto en el hecho de que el FSLN abanderara la penalización del aborto terapéutico... Fue un alto precio para lograr un acercamiento a la Iglesia católica y sobre todo a su líder más visible, el cardenal Miguel Obando y Bravo. La decoración con estatuas de la Virgen María en todas las rotondas de la capital y salpicar los discursos y rótulos partidarios con “Cumplirle al pueblo es cumplirle a Dios” y otras muestras de cursilería religiosa, fue sólo un corolario cosmético de una opción que atenta contra el carácter laico y no confesional del Estado y se aparta de la colaboración respetuosa y no proselitista que se mantuvo entre líderes sandinistas y religiosos revolucionarios de los 80 (pp. 176-177).

La otra gran alianza que tendió Daniel fue con un sector de la *excontra*, el ejército de mercenarios que financió Estados Unidos durante la década de los 80 para derrotar a la Revolución Sandinista. Eligió a Jaime Morales Carazo como candidato a la vicepresidencia, uno de los principales líderes de ese grupo, buscando proyectar la idea de que su plataforma electoral era la más representativa de la *diversidad* nicaragüense, y que el ánimo de la reconciliación era verídico. Para la Alianza Partido Movimiento Renovador Sandinista, en su Manifiesto Sandinista (s.f.):

Algunos compañeros bien intencionados dicen que votarán en la casilla 2 porque ésa es la casilla del sandinismo. No se dan cuenta que cuando voten en esa casilla lo harán por Jaime Morales Carazo como Vicepresidente, un hombre que fue amigo personal de Somoza y le daba fiestas en su casa, que estuvo al servicio de los grandes banqueros, y después fue promotor de la agresión a nuestro pueblo, luego acompañó a Alemán como padrino y consejero durante su gobierno corrupto y promotor del pacto sucio (p. 6).

La ideología política del Frente ya se había diluido en la década pasada, aunque seguía manteniendo el nombre y algunas de las frases “revolucionarias”, ya despojadas de su contenido radical y transformador. La conversión *conveniente* y su carácter elitista, así como el pragmatismo exacerbado, dan cuenta de ello. Nadie se hubiera imaginado, en plena Revolución Sandinista, que en un futuro cercano los actores principales en conflicto -que hasta protagonizaron una cruenta guerra reflejada en la pérdida de miles de vidas y con altos sufrimientos para toda la población (pero también ejemplo de sacrificio y de heroísmo)- terminarían aliándose para conquistar el gobierno por la vía electoral. Así, Rocha (2009) expone:

La arena de los nuevos amigos y enemigos del FSLN llena de perplejidad al más avisado. ¿Qué pensar sobre el nombramiento, como embajador nicaragüense en Washington, de Arturo Cruz, hijo de un ex líder de la contrarrevolución y asesor del partido salvadoreño de ultraderecha

ARENA? Ser yerno de Humberto Ortega debe ser su mejor credencial. ¿Qué pensar de la relación con los banqueros, a quienes se sigue pagando unos intereses de usura por bonos de cuestionada emisión durante el gobierno anterior? Suponemos que la nueva fase acumulativa del orteguismo, con la adquisición del hotel Seminole y otras empresas, busca cultivar relaciones interesantes. Los hijos de los viejos oligarcas y los nuevos ricos sandinistas se han hecho camaradas durante sus estudios en el Lincoln o el Americano, sus prácticas de tenis en el Club Terraza y sus vacaciones en Cancún. Sus destinos son entretreídos por finas hierbas de convivencia o gruesos lazos matrimoniales (p. 177).

Las alianzas que tejió el Frente Sandinista en 2006, no muy lejanas a las creadas en las campañas anteriores, terminaron por desdibujar los pocos contenidos ideológicos que para ese momento quedaban en la organización. Pero fueron efectivas y dieron el resultado esperado. Además, dice Ortega Hegg (2007):

Esta estrategia combinó esfuerzos con una maquinaria partidaria muy bien organizada, con un tendido territorial nacional muy denso, al cual contribuyó el control de 87 de las 153 alcaldías del país, la propiedad de canales de televisión y la red de radios nacionales y regionales que posee el FSLN y que no tiene ningún otro partido en Nicaragua; además de una disposición de recursos millonarios muy por encima del resto de partidos, según estimaciones independientes (p. 213).

Hay que agregar que las relaciones políticas que Daniel Ortega mantuvo con las fuerzas de la izquierda latinoamericana y con sus líderes, constituyeron un factor que influyó en su victoria, pues le dieron el cobijo político necesario para ubicarse bajo esta tendencia durante la campaña. Sin duda, su cercanía con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con Fidel Castro, de Cuba, y con otros dirigentes más, en un contexto de triunfos de las izquierdas en la región, fue un elemento que favoreció esa imagen a nivel interno.

Antes del proceso electoral de 2006, ya existía una fuerte relación con Chávez, a través de acuerdos comerciales entre las alcaldías administradas por el FSLN y el gobierno venezolano, sobre todo relacionados con el suministro directo de energéticos, fundamentalmente gasolina, para su venta al público a precios menores que en el mercado. Sin duda, ayudó la idea del beneficio económico que podría traer a Nicaragua una relación estrecha con Venezuela.

A pesar de la relativa *facilidad* con la que Daniel forjó su candidatura, se dio un proceso político complejo dentro del FSLN. Un sector encabezado por Víctor Hugo Tinoco, Henry Ruiz y Mónica Baltodano, que postulaban al popular exalcalde de Managua, Herty Lewites, plantearon realizar elecciones primarias dentro del Frente para definir al abanderado presidencial. Ante el completo rechazo de Daniel, se optó por la salida autoritaria y se expulsó del

partido a Tinoco y a Lewites, y los demás terminaron renunciando al Frente. Al respecto, Rosario Murillo (2005) se refirió a Lewites en los siguientes términos, cuando este ya estaba trabajando en torno a su candidatura presidencial independiente al FSLN:

Herty Lewites es un cobarde. Un obsceno manipulador. Un pantano ambulante. Es un servil instrumento de pútridos intereses. De los aberrantes y pérfidos intereses del imperio, y de los ser-viles del imperio. De los reptiles y sanguijuelas, que viven de arrastrarse ante ese imperio, y de chupar la sangre inocente, y heroica, de l@s nicaragüenses... Yo acuso a ese gelatinoso astro de la impostura, a esa figura mediocre, retorcida, y vil, que satura nuestras pantallas, en el chischil y cascabel mediático más grande que hayamos padecido en tiempos recientes. Yo lo acuso de esta guerra mediática indecente, inmoral, pero lógica, en la estrategia imperialista de desandinización, es decir, de despojo, de los ideales y derechos del pueblo de Nicaragua.

Daniel Ortega utilizó su influencia en el Poder Judicial, y Henry Ruiz y otros miembros del FSLN fueron condenados a un año de cárcel, bajo argucias legaloides, solo por haber expresado el apoyo a Lewites. Al final, este fue candidato del MRS y de un sector importante que abandonó las filas del Frente para conformar la Alianza Herty 2006, teniendo como candidato a la vicepresidencia a Edmundo Jarquín.

Desde 2004 hasta principios de 2006, Herty Lewites encabezaba diferentes encuestas (por ejemplo, se puede revisar la encuesta de Borge y Asociados, en la que encabezaba la preferencia con 22%, empatado con Montealegre), por ello el violento rechazo de Daniel Ortega y de Rosario Murillo a su postulación dentro del Frente, aunque ya durante la campaña comenzó a perder posiciones ante el avasallamiento de la maquinaria electoral que desplegaron tanto el FSLN como la derecha con sus dos candidatos. Sin embargo, Lewites murió de un infarto durante la campaña, el 2 de julio de 2006, y fue sustituido por Edmundo Jarquín; Carlos Mejía Godoy se incorporó como candidato a Vicepresidente.

Así, las condiciones políticas que existieron para el triunfo de Daniel se *conjugaron* favorablemente. Además del factor fundamental de una derecha dividida, la muerte de Lewites, el apoyo de Obando y de un importante sector de la *Contra*, facilitaron la victoria. Sin embargo, una vez más, los contenidos ideológicos quedaron en el olvido. No hubo una discusión en la campaña en torno al modelo económico, la situación de la democracia, ni una mínima visión sobre el futuro de la nación que superara el corto plazo.

El regreso de Daniel Ortega al gobierno, en realidad, fue la recuperación absoluta del poder, pues gran parte de éste no se había perdido. El Ejército y la Policía, así como los espacios judiciales y electorales, producto del pacto, ya estaban bajo su control. (René Herrera se refiere a ello, en conversación en abril de 2008: El actual ejemplo: el comandante supremo del Ejército es

un viejo guerrillero, la directora de la Policía Nacional es una vieja guerrillera, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia es un viejo guerrillero. El retorno del sandinismo al poder es solo una figura, en el fondo, conservaron sus estructuras. La oposición nunca pudo porque no tuvimos nunca los 56 votos para pasar una modificación constitucional, y quienes han apoyado a nuestra condición opositora, los Estados Unidos, lo que querían no era destruir al sandinismo, sino institucionalizar al país, pues hoy mediante esa institucionalización del procedimiento electoral el Frente ha regresado al gobierno. No hay ningún misterio, no hay ninguna magia, es un proceso que si uno lo ve desde adentro, era absolutamente predecible, que si se dividía la oposición el Frente regresaba al gobierno).

La victoria de Daniel en 2006 terminó con el período neoliberal que tantos estragos sociales y políticos causó al pueblo nicaragüense. Inició así un gobierno más del FSLN, y de Daniel Ortega, pero con grandes diferencias al de la época de la Revolución. En el ámbito político, las acciones realizadas a partir de ese momento, desgraciadamente, se asemejan a las etapas más oscuras de la historia contemporánea de esta nación centroamericana.

2011: la reelección impuesta. La hegemonía del danielismo

A partir de un recurso de amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por Daniel Ortega y 106 alcaldes, en octubre de 2009, en contra del artículo 146 de la Constitución, que prohíbe una reelección consecutiva y expresa que no se puede ser electo en más de dos ocasiones para el mismo cargo, la Sala Constitucional del organismo resolvió ese año que la norma constitucional era inaplicable. Dicha sentencia fue ratificada en 2010 por el pleno de la Corte.

Los magistrados de la CSJ, la mayoría de ellos de reconocida procedencia sandinista, determinaron la viabilidad de la candidatura de Daniel para las elecciones presidenciales de 2011, señalando que no se puede limitar el derecho del pueblo, en su carácter de instancia soberana, a elegir a sus representantes y gobernantes, y que se violan los derechos humanos y constitucionales de los funcionarios que aspiren a ser reelectos. En torno al impedimento de ya haber ocupado el cargo en dos ocasiones, se advierte que no se puede tomar en cuenta la primera presidencia de Daniel Ortega (1984-1990), pues fue anterior a las reformas (1995) que establecieron los artículos referidos, por aquello de que la ley no es retroactiva. Sobre ello, Carlos Fonseca Terán (2011) respalda el fallo bajo los siguientes argumentos:

La pertinencia en la aplicación del principio constitucional en el cual se basó la resolución de inaplicabilidad de las prohibiciones a la reelección, queda refrendada por el hecho de que al año siguiente de dicha reforma constitucional, en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de autoridades locales realizadas en 1996, todos los partidos que la

promovieron y cuyos diputados la aprobaron, sacaron cada uno menos del 1% de los votos. Esto sucedió porque cuando se hicieron esas reformas, los partidos de derecha con menos apoyo popular hacían mayoría en el Poder Legislativo, mientras que los dos partidos mayoritarios de entonces (el FSLN, de izquierda y el PLC, de derecha) tenían una escasa presencia en dicho poder del Estado, lo cual se debía a que la mayor parte de los diputados sandinistas habían renunciado al FSLN y a que cuando los diputados de entonces fueron elegidos en 1990, aún el PLC no se había convertido en la gran fuerza política que llegaría a ser pocos años después.

Finalmente, con la determinación de las instancias jurídicas y electorales, emanadas e integradas a partir del pacto Ortega-Alemán, el proceso electoral del 6 de noviembre de 2011 siguió su marcha, y la oposición aceptó participar con esas reglas del juego. Fonseca ironiza señalando que “la deslegitimación de las elecciones que la derecha pretende con estos señalamientos queda absolutamente en nada desde el momento en que inscribe a sus candidatos ante esas autoridades cuya legitimidad cuestiona”.

Así, con la mayor parte de las encuestas a su favor, Daniel Ortega inició una nueva campaña en pos de la presidencia de Nicaragua, la sexta (iniciando la cuenta en 1984). Como contrincantes, se presentaron Fabio Gadea, empresario radiofónico, bajo una alianza entre el PLI, el MRS y otros sectores sin registro; Arnoldo Alemán, por el PLC; Enrique Quiñónez, por la ALN; y Roger Guevara, por la Alianza por la República (APRE). Cabe señalar que Gadea intentó convertirse en el candidato único de la oposición, pero las *tradicionales* contradicciones (y las ambiciones) de las fuerzas políticas involucradas impidieron esa posibilidad.

Durante la campaña, algunos exmilitantes del FSLN que terminaron apoyando la campaña de Gadea, como Henry Ruiz y Ernesto Cardenal, plantearon una “reforma a la Ley Electoral para que el presidente sea electo por la mitad de los votos más uno, y a su vez se prohíba la reelección de por vida, para evitar el caudillismo y la dictadura” (XINHUA, 2011). También apoyaron a Gadea los exmiembros de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, Víctor Tirado López y Luis Carrión.

El proceso se desarrolló “normalmente”. Las encuestas, desde un principio, marcaron una clara preferencia para Daniel Ortega, y el FSLN y su alianza, que, como en las anteriores ocasiones, incluyó a sectores de la excontra y a su principal aliado Obando y Bravo. La alianza opositora, liderada por la derecha, no logró convencer a la mayoría del electorado, dada la ausencia de una plataforma integral y de un discurso lo suficientemente original y convincente que consolidara la oferta de un verdadero cambio de la realidad; esta oposición no logró descifrar el código para manejar tres aspectos centrales en el escenario electoral: cómo superar su promedio “tradicional” de votación (40%), cómo enfrentar el voto duro del Frente, también de 40%, y cómo explotar el elemento

de la *ilegalidad* de la candidatura oficialista, para convertir este asunto en una herramienta que se tradujera en crear conciencia en la población, de que en las urnas, con el simple voto, se podía revertir esa postulación *anómala*.

Tomando en cuenta estos hechos, resulta importante también ubicar otras causas del triunfo del danielismo en estos comicios. En primera instancia, el enorme peso de la ayuda venezolana permitió al gobierno manejar en los últimos cinco años un conjunto de programas sociales que, en lo inmediato, garantizaron apoyo para la población: materiales de construcción, becas, créditos para el campo, y mejoras en la infraestructura de las ciudades, entre otros, canalizados a través de los planes Hambre Cero, Usura Cero, Bonos Productivos y Alimentarios, y Casas para el Pueblo. Estas medidas, aunque no resuelven el problema estructural de la pobreza y la marginación que representa el capitalismo, y a pesar de las condiciones socioeconómicas adversas -la más grande, el desempleo abierto-, representaron un *alivio* provisional de cara a los comicios de noviembre de 2011, y, sin duda, un contraste con la ausencia absoluta de cualquier tipo de apoyo gubernamental bajo el período de la derecha neoliberal.

Rocha (2011) expresa que:

Sólo para dar una leve idea de las donaciones e inversiones que pueden suscitar el agradecimiento popular, anotemos en la lista -abrumadora pero en modo alguno exhaustiva- la pavimentación de calles y carreteras en barrios y pueblos de difícil acceso, las Casas para el Pueblo, el Plan Techo, que regala diez láminas de zinc a cada familia pobre, la titulación de terrenos precarios a nombre de sus inveterados ocupantes -antes temerosos de un desalojo inminente-, el parque navideño con juegos de diversión gratuitos y su exótica pista de patinaje sobre hielo, los buses rusos para el transporte en Managua, la congelación del pasaje de bus en la capital -no ha subido en cinco años y es el más barato de Centroamérica-, las vaquillas y otros obsequios del programa Hambre Cero, los préstamos para no ser pagados.

Aunado a ello, habrá que tomar en cuenta la cobertura mediática de todo acto de gobierno, con espacios tanto oficiales como partidarios que estuvieron presentes de forma permanente durante la campaña presidencial; y, sobre todo, el peso de Miguel Obando y Bravo, separado de su cargo como Cardenal de Nicaragua en junio de 2005, situación que relata Salinas Maldonado (2009):

Una llamada telefónica del Vaticano apartó del poder de la Iglesia Católica al cardenal de Nicaragua Miguel Obando y Bravo. El 1 de abril de 2005 a las 3.30, el cardenal Giovanni Battista le anunciaba, desde Roma, que un agonizante Juan Pablo II había aceptado su renuncia como jefe de la Archidiócesis de Managua, la principal del país centroamericano. Obando, como estipula el Código de Derecho Canónico, había puesto a orden del Pontífice su renuncia, pero el anuncio de que éste la aceptaba

era un duro golpe para el hasta entonces hombre fuerte del catolicismo nicaragüense.

El cardenal Obando, en relación con su apoyo a Ortega, hizo, entre otras tantas, las siguientes declaraciones días antes de las elecciones, las cuales publica Fonseca (2011):

Algunos dicen que estoy favoreciendo al gobierno, pero yo he tratado de ayudarlo porque me parece que es una cosa buena. Por ejemplo, darle Plan Techo a la gente pobre (...) Creo que ha hecho un esfuerzo el gobierno y tenemos que reconocerlo. ¡Se ha hecho bien!”, dijo Obando al Canal 13 el pasado 27 de octubre. Y enfatizó: “Voy a votar, naturalmente, si Dios quiere, a menos que de que esté enfermo. Y voy a elegir a la persona que se interesa mucho por la gente que tiene menos recursos” (p. 47).

Tras la celebración de los comicios, el 6 de noviembre, el proceso fue calificado de fraudulento por la oposición, en particular por la alianza PLL-MRS y por diversas instancias, tanto nacionales como internacionales, que de una u otra forma observaron la jornada electoral. Aunque sin pruebas contundentes que tuvieran un impacto irrefutable en las instancias correspondientes, dada la falta de cobertura -por diferentes razones- de alrededor del 30% de las Juntas Receptoras de Votos, se anunció que existía una cantidad suficiente de irregularidades para desconocer la elección en su conjunto y plantear la realización de una nueva.

En primera instancia, la oposición señaló que el FSLN obtuvo una mayor votación para los diputados que para su propio candidato presidencial, situación de alguna forma *anómala*, tomando en cuenta que históricamente los resultados son al revés. De igual forma, al más puro estilo de los históricos fraudes mexicanos (tanto del PRI como del PAN), se denunciaron urnas “preñadas”, que antes de ser colocadas ya tenían votos sandinistas; “embarazadas”, con más votos que las boletas asignadas; “bulímicas”, tuvieron votos opositores que al cierre ya no existían; “Mandrake”, que convirtieron votos opositores en votos nulos; “urnas-segunda mesa”, que recibieron votos para el oficialismo de quienes ya habían sufragado; “necrófilas”, que tuvieron votos de difuntos; “pedófilas”, que permitieron el voto de menores de 16 años, entre otras tantas *denominaciones* (Rocha, 2011).

Siempre sobre ese tema, Fonseca (2011) expresa, por su parte, que:

Una de las evidencias más sorprendentes es una copia del Acta de Escrutinio 06056314-2, correspondiente a una junta de votación del Distrito VI de la capital, en la que se indica que se recibieron 400 boletas, sin embargo ahí el Frente Sandinista ganó con 689 votos. Igual ocurre con el Acta 06052773-1, del Distrito III de Managua, donde también se anota que se recibieron 400 boletas, pero el Frente Sandinista obtuvo 597 votos válidos. La comandante guerrillera Dora María Téllez, ex legendaria

combatiente contra la dictadura somocista y hoy figura opositora al Frente Sandinista, presentó días atrás un informe de incidencias de 10 páginas, que contiene un sinnúmero de irregularidades, abusos y violaciones a la Ley Electoral. Entre ellas, nombres y apellidos de simpatizantes sandinistas, que en la Villa 15 de julio, de Chinandega, al occidente del país, votaron hasta tres veces, en tres diferentes juntas de votación.

Ante este panorama, habrá que reflexionar en torno a las causas de las irregularidades que se dieron en la elección, así como en torno al hecho de que el Frente y su candidato lograron no solo retener su voto duro, sino aumentar el apoyo, pues independientemente de la incertidumbre sobre cuántos fueron los votos reales, es innegable que existió un incremento de su porcentaje histórico promedio (40%), sobre todo si tomamos en cuenta las encuestas previas, así como las que se aplicaron el mismo día de la elección. Respecto del primer caso, Envío (2011) destaca que:

(...) la última encuesta de la empresa CID-GALLUP, la que consideramos más seria, realizada a nivel nacional entre el 11 y el 18 de octubre, tres semanas antes de las elecciones, con el método de ‘caja negra’, que garantiza mayor confianza y secretividad a la intención del encuestado, colocaba a Ortega en primer lugar con el 48%, a Fabio Gadea con el 30% y a Arnoldo Alemán con el 11%. Un 10% reservaba su opinión.

Y en el segundo aspecto, sobre las encuestas practicadas el día de las elecciones, Chamorro (2011) indica que:

Irónicamente, Ortega no necesitaba robarse la elección para ganar la Presidencia, pues de acuerdo a todas las encuestas previas contaba con clara ventaja. ¿Por qué, entonces, descartó la opción de organizar una elección transparente? Hay, al parecer, una razón de arrogancia política, y otra que responde a su *realpolitik*. La primera es que bajo su mentalidad autoritaria, Ortega profesa y practica un rechazo visceral al sistema de democracia representativa; la segunda es que sólo el método del control partidario del aparato electoral le garantizaba plena seguridad de lograr una abrumadora mayoría parlamentaria.

El resultado oficial de las elecciones, pues, plasmó un “triunfo contundente” para Daniel Ortega, quien finalmente asumió la presidencia de Nicaragua el 10 de enero de 2012, comenzando un tercer período de gobierno, y el segundo consecutivo.

Resultados oficiales de las elecciones presidenciales y legislativas 2011

| Partidos | Porcentaje | Votos | Diputados obtenidos** |
|---|--------------|------------------|-----------------------|
| Partido Liberal Constitucionalista (PLC) | 5.91 | 148,507 | 2 |
| Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) | 62.46 | 1,569,287 | 62 |
| Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) | 0.40 | 10,003 | - |
| Alianza por la República (APRE) | 0.23 | 5,898 | - |
| Partido Liberal Independiente (PLI)* | 31 | 778,889 | 26 |

Elaboración propia. Fuentes: Consejo Supremo Electoral (CSE), consultado el 31 de enero de 2012. <http://www.cse.gob.ni/md5/res1dipparl.php> y Prensa Latina, “Instala Nicaragua Nueva Asamblea Nacional”, 09/01/2012,

* El PLI compitió en estos comicios en alianza con el MRS, partido despojado de su registro en 2008.

** La Asamblea Nacional está integrada por 90 legisladores, aunque están contemplados dos lugares más que no aparecen en esta tabla, y que por ley en este caso corresponden al ex vicepresidente Jaime Morales Carazo, que trabajará con la bancada del FSLN, y a Fabio Gadea, por su segundo lugar en la elección nacional para presidente, aunque este último se negó a ocupar su cargo. Por lo tanto, la Asamblea Nacional para el período 2012-2017 tendrá 91 integrantes.

Con un proceso cuestionado de origen, la reelección sin duda muestra una consolidación de la hegemonía danielista en esta nación centroamericana, contando además con la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, al tener 62 de 91 diputados, con lo que el poder en sus manos ya es completo, *ahora sí no falta nada*, a pesar de que el propio Daniel haya declarado que no hará uso de esa mayoría sin consensuar con el resto de la sociedad. Pantoja (2011) se refiere a tal declaración, y señala:

Al respecto, en sus primeras declaraciones tras los comicios, Daniel Ortega “señaló que ‘no estamos locos, no vamos a utilizar la Asamblea Nacional para cambiar el rumbo del país’, pese a ello, el mandatario reconoció que esta mayoría parlamentaria le permitirá fortalecer los programas gubernamentales ‘consultando y concertando con la población y con los empresarios’. ‘Vamos a trabajar para que la Asamblea Nacional sea un instrumento que le sirva al pueblo, a los trabajadores y a los nicaragüenses. Vamos a legislar con consenso’, agregó Ortega.

En relación con los resultados electorales, Chamorro (2011) destaca que: Aunque nunca se sabrá cual fue el verdadero resultado de la elección, el 62% oficial le otorga al FSLN una cómoda mayoría calificada en la Asamblea Nacional, para hacer reformas constitucionales y modificar a su antojo el sistema político. En efecto, Ortega ya no está obligado a negociar, y dependerá de su propio cálculo político si decide o no hacer concesiones. Ahora concentra todos los poderes en un régimen que fusiona estado-partido y familia, y está mitad de camino en la cooptación del ejército y la policía. Sus únicos contrapesos visibles radican en la sociedad civil y la prensa independiente, cuyos espacios se han reducido

drásticamente, y en la Alianza PLI, que aún debe establecer su credibilidad a través de una estrategia coherente de oposición.

Se puede afirmar que el pacto con Alemán cumplió para Daniel y la cúpula del FSLN con todas las expectativas planteadas, y, tras la elección de 2011, en realidad ya no resulta necesario, ni útil, seguir sosteniendo los acuerdos centrales del pacto, referentes, por ejemplo, a la repartición de los espacios del Estado en dos partidos, pues con todo el poder en sus manos y el alemanismo reducido a su mínima expresión, el Frente ya no requiere de esta fuerza para buscar el objetivo ahora alcanzado. Sin embargo, la lógica del pacto no solo se refiere a ese proceso en particular, sino a una ¿nueva? cultura prevaleciente en la clase política tras la Revolución, que se reduce a los acuerdos entre las elites para seguir sosteniendo un sistema político democrático frágil. A esto se refiere Marengo (2011), cuando expone que:

El problema que tenemos en Nicaragua es un problema de valores, que es lo que nadie discute nunca en Nicaragua. Nadie está defendiendo el valor de la honestidad, el valor del respeto al ciudadano, el valor de la convivencia ciudadana. Si nosotros estuviéramos luchando de verdad por lograr una sociedad donde cohabitar todos y tener un país un poco mejor que el que hoy tenemos, con seguridad iríamos por el camino en el que algún día vamos a encontrar la salida. Pero no, toda la discusión es sobre a quién pongo en qué cargo, sobre la repartición de los cargos. Toda la discusión es por si te doy uno en el Consejo y te quito uno en la Corte... Ésa falta de valores es el grave problema que hoy tenemos. La famosa institucionalidad se ha convertido en una repartición de prebendas y de favores para mantener el estatus quo (sic).

Por último, como un elemento que en términos generales influyó en las elecciones presidenciales y legislativas de 2011, resulta importante mencionar el conflicto fronterizo desatado entre los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica hacia finales de 2010. Partiendo de la profunda historia compartida entre ambas naciones (¿cómo olvidar el papel jugado por Costa Rica durante la lucha contra Somoza?), y hoy, cuando alrededor de 800,000 nicaragüenses viven y trabajan en ese país, la crisis diplomática desatada por diferendos territoriales tuvo dos causas concretas: primero, la “complejidad” técnica que contempla la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, de 2009, en torno a que las márgenes del Río San Juan son de Nicaragua, pero que por ellas Costa Rica tiene derecho a navegar, la cual *facilitaba* un diferendo, y, segundo, los intereses y las preocupaciones políticas personales de quienes gobiernan ambos países.

Al perfilar las elecciones de noviembre de 2011, resultaba políticamente redituable para Daniel Ortega revivir un conflicto de estas dimensiones, pues además de que se desatan los más candentes sentimientos nacionalistas, era justo en la etapa en que la CSJ ratificaba su *derecho* a reelegirse. De igual forma,

la mandataria costarricense, Laura Chinchilla, requería con urgencia de una legitimación interna ante el cuestionado e *insípido* inicio de su gobierno.

El *conflicto* entre ambos países, en realidad, tuvo una causa utilitarista de beneficio mutuo para sus presidentes, sin importarles las consecuencias negativas que entre los dos pueblos se generaron, como el odio, la exacerbación chovinista, el patriotismo *distractor*, el factor económico (sobre todo para la migración nicaragüense) y la fractura de una amistad probada por el paso del tiempo. Este conflicto, para Nicaragua, ejemplifica con claridad la libertad ilimitada que tiene Daniel Ortega para mover todas las piezas del tablero en aras de mantenerse en el poder bajo cualquier precio, y, sin duda, cualquiera que haya sido la magnitud de la influencia a su favor en la sociedad nicaragüense, la jugada fue exitosa, valorando los resultados de las elecciones de noviembre de 2011.

Nicaragua, los avatares de una democracia pactada

Democracia, *el gobierno del pueblo*, en realidad resulta una idea difusa frente a sus múltiples interpretaciones, y tergiversaciones. Se trata de un sistema político relacionado con la participación de los ciudadanos, aunque en la actualidad, salvo algunas excepciones latinoamericanas, el modelo continúa siendo la democracia representativa, la cual se limita a convocar a los electores a votar cada determinado período sin ofrecer mecanismos reales que los involucren en torno a las grandes decisiones nacionales y, en la cual, los ámbitos económico y social no son contemplados como parte de esa concepción.

La democracia representativa realmente existente es la herencia de una cultura política forjada tras las *independencias* latinoamericanas por las élites criollas que hegemonizaron el poder político y económico, a partir de una concepción eurocéntrica y liberal, imponiendo un Estado-nación uniforme y monolítico que no reconoció la diversidad étnica y cultural, y forjando un sistema capitalista alrededor del cual privilegiaron sus intereses y no los de las grandes mayorías. En este sentido, la democracia en América Latina tiene que ver sobre todo con el sistema político que las minorías impusieron para el control de las mayorías.

Una idea más avanzada de democracia se encuentra en el modelo participativo que, en esencia, contempla no solo la elección de los gobernantes y representantes legislativos, sino un conjunto de mecanismos a través de los cuales la sociedad incide en las decisiones públicas, además de garantizar controles sobre la gestión estatal. Entre otros, destaca la revocación del mandato, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la rendición de cuentas y el presupuesto participativo. Este es el modelo que en términos generales se practica en Cuba, y que se está construyendo con sus diferencias y contradicciones en Venezuela, Bolivia y Ecuador, por ejemplo, y en experiencias como las desarrolladas por el Movimiento de los Sin Tierra, en Brasil, y por el

zapatismo, a través de las Juntas de Buen Gobierno, en México.

En el caso particular de Nicaragua, la democracia representativa, con todo y que la Constitución establece una mínima combinación con algunas estructuras de la democracia participativa, no ha generado ningún acercamiento efectivo del pueblo en los asuntos nacionales.

Ortega Hegg (s.f.) destaca las particularidades de la democracia en Nicaragua:

La constitución nicaragüense establece una combinación institucionalizada de democracia directa con democracia representativa y las leyes desarrollan de manera más particular esta articulación. La constitución no ve contradicción entre ellas, pero tampoco que una deba sustituir a la otra, sino que las ve como necesarias y complementarias. Frente a los grupos de presión que pudiendo ser minoritarios desde el punto de vista numérico, por su organización y recursos pudieran imponer una posición particular como una posición general, la democracia impone el principio de la representatividad; pero frente a la exclusividad de la representatividad uniforme y universal, la democracia actual impone tomar en cuenta la riqueza de la diversidad, la heterogeneidad, los derechos de las minorías, la particularidad, la tolerancia y el pluralismo. Y ello sólo se concreta con la participación directa. De ahí que deba combinarse esta modalidad democrática con la modalidad representativa. Articular institucionalmente ambas y profundizar sus relaciones de manera incluyente y democrática es el reto de la nueva administración, pero también del resto de la sociedad (p. 8).

El problema de la democracia en Nicaragua no radica exclusivamente en lo que establece la Constitución, en su marco jurídico, sino en el sistema político en sí mismo, en las prácticas políticas que los actores desarrollan, y es ahí donde estas no reflejan un espíritu democrático, incluyente, y mucho menos plantean una verdadera participación de los ciudadanos, aunado a que estos tampoco la demandan con la determinación necesaria.

Estas prácticas políticas se traducen, de igual forma, en una visión patrimonialista del poder, en el sentido de un *mal histórico latinoamericano* que ubica el acceso a las responsabilidades públicas como una oportunidad de ascenso individual, grupal y hasta familiar, y esta realidad no es exclusiva de Nicaragua. Orozco (2007) señala cómo:

Los partidos políticos carecen de institucionalismo democrático y excluyen sectores representativos como los jóvenes, las mujeres y las minorías étnicas. Los líderes de estos partidos gravitan hacia el oportunismo político, no atienden las necesidades sociales, y protegen el status (sic) quo tradicional y el caudillismo a expensas de las prioridades nacionales (p. 53).

Esto explica, en parte, la transformación de la lucha política que el FSLN, y en particular Daniel Ortega, desarrolló tras su derrota en 1990. Se trataba de que solo él fuera quien centralizara las decisiones, y por ello, bajo un exacerbado pragmatismo, modificó los contenidos políticos, pactó con sus anteriores enemigos y se alió en diferentes coyunturas con una parte de ellos.

Torres Rivas (2001) explica que:

Lo de Nicaragua no tiene paralelo en la historia de las transiciones, porque lo único democrático es el acto electoral, y no la función de gobierno. El sentido clientelista de la política o la versión patrimonial atrasada en el ejercicio del gobierno descalifican cualquier propósito democrático. La polarización no es ideológica sino personal, lo que remite a los tradicionales recursos de fuerza del caudillo político ansioso por el poder. La lucha por el poder no califica como democrática a una sociedad, sino su ejercicio en provecho de todos. En otras palabras, se trata de políticos a los que la legitimidad de su gestión interesa menos que el control del poder. Es una pelea por el poder en estado puro, no en la utilidad social de su ejercicio. No se avanza, se vive en un eterno regreso (p. 119).

Las victorias electorales de Daniel Ortega en 2006 y en 2011 son producto de estas circunstancias; finalmente, reflejan que la acción de las cúpulas determina el rumbo central de los acontecimientos, a pesar de contar con el respaldo electoral de una parte de la sociedad. Se trata de un juego de las elites, en el que los ciudadanos son simples espectadores que solo *avalan* con su voto las decisiones tomadas.

Pérez Baltodano (2005) comenta así lo antes dicho:

Esto significa que la democracia nicaragüense tiene que dejar de ser un simple ejercicio electoral para transformarse en un proceso permanente de construcción de aspiraciones colectivas. De este proceso surgiría el verdadero consenso social que necesita Nicaragua: un consenso que trascienda las visiones elitistas de los grupos que hoy controlan el poder y que no comparten el drama existencial que significa ser pobre en Nicaragua (p. 31).

El carácter limitado y restringido de la democracia nicaragüense radica en su visión elitista, en la que los principales partidos políticos se han convertido en grandes maquinarias que monopolizan el poder político en el país, en todos los niveles, amparados en el respaldo del empresariado nacional y de los principales medios de comunicación, algunos de ellos propiedad de las mismas fuerzas.

Por ejemplo, el nivel de concentración del poder en Nicaragua ha llegado al extremo de anular, bajo interpretaciones sesgadas por los magistrados del CSE, el registro de dos partidos políticos que “estorbaban” en este *maquiavélico* juego. El MRS y el PC *perdieron* su registro en mayo de 2008, justo antes de las elecciones municipales de noviembre, a pesar de haber cumplido con todas las

obligaciones establecidas.

Martí i Puig (2008) expresa:

Dicha contienda generó fuertes protestas por parte de la oposición, en las que acusaban al gobierno y al CSE de haber cometido un fraude para beneficiar al FSLN. “En las de noviembre de 2008, según los datos oficiales, el FSLN obtuvo 105 alcaldías de las 150 en juego, y entre ellas las de Managua y León, y todas las cabeceras departamentales con la excepción de Granada, Boaco y Bluefields. Por otro lado, la oposición se alzó con la victoria en 37 municipios. Pero el proceso fue puesto en cuestión por la oposición. Los resultados de Managua y León fueron los más contestados, esgrimiendo que las actas de sus apoderados daban una clara victoria a Montealegre a pesar de que ya a las 11 de la noche del domingo 9 las calles se llenaron de simpatizantes sandinistas con el fin de celebrar la victoria” (p. 526).

Por otra parte Envío (2008) destaca la acción llevada a cabo por la comandante Dora María Téllez ante la exclusión de su partido, el MRS, para participar en los comicios:

En la mañana del 4 de junio, pendiente aún el fallo definitivo del CSE, la guerrillera, protagonista de dos de las más espectaculares hazañas de la lucha antisomocista, ministra sandinista, diputada y dirigente del MRS, Dora María Téllez tomó su decisión... En los predios que rodean la rotonda Rubén Darío, en el centro de Managua, colgó una hamaca entre dos árboles, puso encima unas yardas de plástico negro que la protegieran de la lluvia y del sol, armó una tienda de campaña cercana donde dormir y se declaró en huelga de hambre. ¿Hasta cuándo? No puso plazo. ¿Por qué? Desde el primer momento quedó claro que no aspiraba a convencer a los magistrados del CSE para que cambiaran su decisión de liquidar al MRS. Parecía apostar a otro cambio: la conciencia de la población (p. 4).

Finalmente, después de 13 días de ayuno y por recomendación médica, Dora María Téllez levantó la inédita huelga de hambre sin haber logrado que se modificara la *sentencia jurídica* sobre el MRS, pero sí algunos avances en la dinámica concientizadora. Hubo movilizaciones de solidaridad contra el pacto y a favor de la democracia, pero las elecciones se realizaron sin la presencia de estos dos partidos.

Bajo esta misma lógica, destaca la decisión de prohibir en 2008 la circulación en el país de un libro sobre el destacado poeta nicaragüense Carlos Martínez Rivas, solo porque su prólogo había sido escrito por Sergio Ramírez. Se pretendió encarcelar a Ernesto Cardenal, también bajo argucias judiciales, ante su férrea crítica al gobierno danielista.

También hay que señalar que el proceso que permitió la reelección de Daniel Ortega en los comicios de 2011, criticado ampliamente por la oposición en su conjunto y por importantes sectores de la cultura y de la intelectualidad

nicaragüense, refleja el grado de concentración del poder y la *flexibilidad* que puede tener la democracia pactada en este país. Se trata, en este caso, del uso (y abuso) directo de los poderes del Estado para imponer un interés personal sobre la lógica de una verdad que pretende ser vendida como un deseo general, sin que medie ningún tipo de consulta, sin que existan los medios para que el pueblo exprese verdaderamente su acuerdo o desacuerdo. Ante la maniobra jurídica de la CSJ que permitió la reelección, no pocos han llegado a calificar al danielismo como una dictadura.

Así lo expresa Hugo Torres (2010) figura relevante durante la RPS (General de Brigada en retiro del Ejército nicaragüense, destacado estratega de la lucha guerrillera sandinista, sobre todo por dos acciones mundialmente conocidas: la toma de la casa de Chema Castillo, en diciembre de 1974, y la del Palacio Nacional en agosto de 1978):

Hay tantas similitudes entre el gobierno actual de Daniel Ortega y el tejido que logró armar la dictadura somocista que da escalofríos. Daniel Ortega se ha apropiado del partido de la revolución, el Frente Sandinista, lo ha desnaturalizado y lo ha convertido en su partido, en un partido familiar... A través del pacto con Arnoldo Alemán, Ortega ha ido convirtiendo al PLC en su propio partido zancudo, dándole a estos liberales cuotas de poder, lo que le permite vender la imagen de legitimidad porque tiene "oposición", mientras mantiene dividida al resto de las fuerzas políticas opositoras... También ha venido manejando las mejores relaciones con el gran capital, con la misma máxima del somocismo: "dedíquense ustedes a sus negocios y déjenme a mí la política". Y el gran capital está tranquilo haciendo negocios y no cuestiona al régimen. Y por si fuera poco, Ortega alimenta un mesianismo y un culto a su personalidad escandalosos, superior al que practicaron los Somoza.

La existencia de una reelección indefinida debe legitimarse a partir de una decisión popular, perfectamente regulada en la Constitución, y condicionada a la revocación del mandato ante desviaciones o malos resultados gubernamentales; la reelección no es mala por sí misma, los que importan son los resultados que se entreguen con respecto a la justicia social, el desarrollo nacional, la defensa de la soberanía, el nivel de la democracia, y, sobre todo, en el terreno de la ética y de la honestidad.

Por otro lado, tal como lo comentamos, es necesario reafirmar que la exacerbada catolicidad utilizada por Daniel Ortega (y su esposa) denigra el espíritu laico del Estado y lo aproxima a una tendencia fundamentalista, explotando la fe religiosa de la sociedad nicaragüense como mecanismo de control. Guevara (2008) expresa al respecto:

Otra de las tantas: el presidente Ortega y su esposa hacen invocaciones a las divinidades y exponen íconos religiosos en cada acto político partidario y de gobierno y documentos públicos emitidos por su partido

son facturados de forma muy similar a las homilias. En diciembre de 2007, el presidente Ortega ordenó a todas las dependencias del Estado que rezaran y cantaran a la Concepción de María y él mismo lo hizo en la Plaza de la Revolución. Días antes, Rosario Murillo -la señora cogobernante al 50%- había pedido públicamente a sus partidarios, y a nombre del gobierno, “rescatar la tradición de rezar el Rosario en familia todos los días”, una petición que sólo hacen los sacerdotes a su feligresía dentro de las iglesias (p. 35).

Aquí, cabe destacar el importante papel que juega Rosario Murillo dentro del poder político en Nicaragua. Definida por el propio Daniel Ortega como la Primera Ministra (<http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2010/mayo/28/1.html>), Murillo es jefa de Gabinete, Secretaria de Comunicación y Participación Ciudadana del Gobierno, Secretaria de Comunicación del FSLN, Responsable del Protocolo del Estado, Maestra de Ceremonias del Presidente, y su Secretaria Privada. Mucho poder y muchos cargos depositados en una sola persona, pero *normal* bajo la lógica del danielismo.

Martí i Puig & Close (2009) han señalado que:

Ortega tampoco es el primer presidente en situar a miembros de su familia en puestos de responsabilidad: la presidente Chamorro nombró a su yerno, Antonio Lacayo, ministro de Presidencia. Sin embargo, desde aquella vez la Constitución fue enmendada para ilegalizar dichos nombramientos. Los Ortegas (sic) eludieron esta disposición al no brindarle salario a Murillo. No obstante, en un país que padeció 43 años de dictadura familiar antes de 1979, nombrar al cónyuge presidencial a un cargo gubernamental tan importante desentierra recuerdos poco agradables. Lo más difícil de comprender, sin embargo, es cómo uno de los líderes revolucionarios que puso fin a la tiranía de los Somoza ha optado por reproducir el patrón de dar poder a los <<familiares>>. Así las cosas, la respuesta a la pregunta de <<¿quién gobierna?>> es: los Ortega, a través del FSLN (pp. 427-428).

Otro elemento que sustenta esta democracia pactada por las elites y restringida por quien esté en el poder, una democracia acotada al simple depósito del voto como se vive en muchos países latinoamericanos y caribeños, está relacionado paradójicamente con una estructura creada por decreto presidencial el 29 de noviembre de 2007: los Consejos del Poder Ciudadano. Baltodano (2009) explica que:

En el terreno de la democracia política, esta dinámica del ejercicio privado del poder público se fortalece, día a día. Rosario Murillo, esposa de Ortega, anunció en nombre del Frente Sandinista y del Gobierno, la creación y organización de unos nuevos organismos de base conocidos como Consejos del Poder Ciudadano (CPC). En la cúspide de ellos se coloca la

Primera Dama... Los consejos organizados por el partido deberán erigirse en máxima autoridad en el territorio, sustituyendo las instancias legales establecidas en la Constitución, en la Ley de Participación Ciudadana y en la Ley de Municipios. Las decisiones de dichos consejos deberán ser atendidos por alcaldes y ministros, según se pretende (p. 171).

Sin duda, esta instancia organizada ex profeso para un mayor control directo de las gestiones gubernamentales en todos los niveles por Daniel Ortega y Rosario Murillo, no está relacionada con la idea de ampliar la democracia y la participación popular, sino que pretende corporativizar a la sociedad y profundizar una incondicionalidad política en la medida en que el gobierno nacional, y sus dos figuras principales, resuelven las peticiones de manera directa.

Anunciados en el escenario de la celebración de un aniversario de la Revolución, el del 19 de julio de 2007, los CPC, según Envío (2007), son (...) la expresión de la *democracia directa* donde el *pueblo Presidente* y las *familias de la patria libre* experimentarán *más democracia, más poder*, según reza la propaganda oficial- están llamados a ser los canales para que la gente reclame, demande, solicite, pida, reciba, sea asistida, se convierta en 'cliente' del partido del gobierno y a cambio, respalde las medidas y decisiones que tome la elite gubernamental (p. 7).

Los CPC manejan, entre otros, los programas sociales Hambre Cero, Usura Cero y Desempleo Cero, y son financiados en su gran mayoría con la ayuda venezolana.

Rocha (2009) se refiere a estas estructuras de la siguiente manera:

Los Consejos de Poder Ciudadano son burdas imitaciones de los Comités de Defensa Sandinista, sin su amplia cobertura. Los mal pagados y subalimentados Jóvenes Constructores no tienen ni la sombra del espíritu de sacrificio y arrojo de los Batallones Estudiantiles de Producción, las Milicias Populares Sandinistas o el Ejército Popular de Alfabetización. Y no porque sean menos nobles, sino porque el imaginario juvenil se nutre de otra simbología y porque tienen más hambre y muchas necesidades insatisfechas. EL FSLN quiere introducir los mismos personajes sobre un escenario muy distinto y contratando actores a los que no entrenó y remunera mal (p. 176).

Así, el futuro de la democracia nicaragüense se diluye entre la incertidumbre y la falta de opciones frente a los procesos y hechos descritos. Los gobiernos de la derecha neoliberal desarticulaban por completo las conquistas sociales de la Revolución y las herramientas más avanzadas de la participación popular que se habían comenzado a utilizar en el país, y el FSLN no solo no se opuso a este proceso, sino que se volvió cómplice al participar en él de diversas

formas, pero sobre todo por despojarse de sus principios fundamentales con tal de regresar al poder, y, con ello, perder la posibilidad de reconstruir a la Revolución Popular Sandinista.

La cultura política nicaragüense, como cualquier otra, representa los defectos y las virtudes recreadas en el imaginario popular, como la figura del Güegüense, al que hace referencia Moisés Hassan en su libro testimonial, que gira en torno a la historia política contemporánea de Nicaragua. En esta obra, el exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional realiza una severa crítica a la dirigencia sandinista. En su texto, destaca la interpretación sobre la cultura política nicaragüense, que él relaciona con el Güegüense, personaje de una obra de teatro nicaragüense que representa las peores características de cualquier individuo: corrupto, huérfano de principios, de valores, “un personaje altamente ambicioso, un oportunista para quien no es el engaño obstáculo que pueda interponer entre él y sus fines” (Hassan, 2009, p. 28).

Sin embargo, esta cultura política, en su parte *defectuosa* (que supera por mucho a la *virtuosa*), deja claro que la democracia actualmente no guarda relación alguna con la ética, la congruencia y la honestidad. En realidad, el pragmatismo y el control mesiánico del poder predominan sobre valores democráticos y revolucionarios.

Serrano Caldera (1993) señala que:

Para el nicaragüense, la institución no existe como tal; existe sólo como mecanismo externo, como instrumento para facilitar el ejercicio del poder, para manipular, para justificar. La historia de Nicaragua ha sido de escepticismo acerca del principio de legalidad. Salvo excepciones que confirman la regla general, se puede decir que nadie, ni gobernantes ni gobernados, han creído en el principio de legalidad. En el mejor de los casos lo han utilizado para maquillar y dar cierta apariencia a las decisiones y acciones de facto (p. 90).

Bajo este sustento, la sociedad nicaragüense vive en un permanente estado de crisis y de indefinición política, además de encontrarse siempre a la expectativa de conflictos y de escenarios de polarización. Las limitadas estructuras democráticas se hallan bajo el control de una elite variopinta que ha acaparado los espacios nacionales, provocando también un marcado abandono de la lucha política, de contenidos en torno a proyectos de nación, principios políticos, económicos, sociales y culturales. Todo se reduce a cómo llegar al poder, sacarle provecho y tenerlo bajo control el mayor tiempo posible.

Ante este panorama, con el nuevo período de gobierno del *reelecto* presidente Daniel Ortega, la incertidumbre ronda en el futuro político nicaragüense. Ya las presiones internacionales se han materializado, por ejemplo, en el retiro de una parte de la ayuda económica, y no falta el deseo interventor del imperio para reorientar a su conveniencia el contexto político interno.

Habrá que ver cómo se manejan los actores involucrados en esta historia para vislumbrar cómo se presentarán los nuevos escenarios.

Esta es la situación de la democracia pactada en Nicaragua. Completamente hegemonizada por el danielismo, los avatares de esta democracia determinan momentos complejos que están marcando las coordenadas de la segunda década del siglo XXI. Frente a ella, y como parte de ella, se encuentran una elite política que todo lo controla, una disminuida oposición de izquierda que no logra encontrar la brújula para rescatar al sandinismo de su desdibujada etapa, y una sociedad *atrapada* entre esta realidad política y su propia apatía e inmovilidad.

CONCLUSIÓN

Nicaragua tiene una historia singular que atrapa, sin duda, a propios y extraños. Los internacionalistas de todas las latitudes que pelearon hombro a hombro con los nicaragüenses durante la insurrección y la Revolución Sandinista, así lo reconocen. Es un lugar único en el mundo, en muchos sentidos. Hace tiempo se le llamó el *Macondo nicaragüense*, pues, en realidad, este país es como un retrato del universo que Gabriel García Márquez ilustra en esa novela ejemplar de lo que es América Latina.

Las coordinadas políticas actuales de la democracia que, a pesar de todo y aunque cada vez más como estructura formal, existen en esta nación centroamericana, no son sino el reflejo de lo que también se vive en el resto de la región: una cultura política forjada en un escenario complejo, salvaje, siempre intervenido por Estados Unidos, pero en el que finalmente predominan elites con diferentes intereses peleando por el poder, su poder, frente a las grandes mayorías que tan solo han visto pasar el tiempo, entregándolo todo a esa minoría rapaz: su trabajo y su vida.

Queda comprobada la profundidad de la regresión que tuvo el FSLN en las dos últimas décadas, y en particular Daniel Ortega y su grupo, tras la derrota de la Revolución Popular Sandinista en 1990. No solo se trató de un cambio de piel y de colores, sino uno de contenido, de esencia y de principios. Ahora solo importa lo que interesa a una buena parte de las izquierdas partidistas de nuestros países: qué y cuánto se gana, cuánto poder se tiene y cuánto puede durar.

Ese radical abandono de los principios golpeó severamente la defensa y la propia existencia de los logros centrales de la Revolución, frente a la voracidad de la derecha *triumfante*. El “gobernar desde abajo” que sentenció Daniel tras la derrota, quedó en una frase vacía que, en realidad, se tradujo en movilizar al pueblo para luego negociar con mayor fuerza con la otra parte de la elite, claro, todo en secreto, a espaldas del pueblo.

La reconfiguración del FSLN no se dio a partir de un debate teórico, o de un proceso de reordenamiento de las ideas en torno a los nuevos contextos internos y externos. Por el contrario, el Frente se convirtió en el aparato de una nueva fuerza: el danielismo. El criterio del líder sustentado en *el sandinismo soy yo*, ubicó a Daniel Ortega como un fin en sí mismo, y redujo al partido a un simple cascarón desprovisto de contenidos, salvo el del pragmatismo, ante lo cual aliarse con los antiguos enemigos se convirtió en algo *necesario*, y luego *natural*.

Por su lado, la derecha neoliberal mostró sin tapujos su verdadera esencia: el gobierno solo debe utilizarse para hacer eficiente la reproducción del sistema capitalista, y con ello la explotación, y sirve para enriquecerse, para ser corruptos, por eso lo social resulta completamente secundario, no importa. Los 16 años de regímenes neoliberales mostraron estos elementos de forma cruda, dejando a Nicaragua hundida en la pobreza extrema y en la total dependencia económica del exterior, pero claro, con una *casta* política enriquecida.

Estos dos grandes sectores de la elite política nicaragüense se pusieron de acuerdo, a través de un pacto, en bipartidizar el sistema político nacional y el poder económico, y en definir las reglas de *su* democracia, excluyendo al resto de las fuerzas sin importar su tamaño o tendencia, y, por supuesto, a los movimientos sociales y a la sociedad en su conjunto. Por cierto, para estas elites, solo cuenta la militancia leal, incondicional, controlada o corporativizada.

Y hoy, tras el *resultado* de las elecciones de 2011, el pacto como tal ya perdió sentido ante la aplanadora danielista que ya todo lo controla; ahora Alemán deja de ser importante, y salvo algunas intenciones legitimadoras, fuera del FSLN las demás fuerzas ya no *cuentan*, y, en los hechos, no *existen*. En síntesis, el pacto ha muerto, aunque la democracia siga sustentada en la esencia originaria de esta cultura *pactista*.

La democracia nicaragüense representa la imagen de una buena parte de los países de la región en los que la mayoría de la población ejerce, en el mejor de los casos, una ciudadanía política de segunda, mientras las elites pretenden ignorar que la crisis estructural por la que atraviesan los sistemas políticos se genera, en gran medida, por la falta de una verdadera participación popular y de una democracia económica, esto es, una *democracia incluyente*.

En la región, muchos pueblos han levantado su voz y están actuando desde variadas concepciones y estrategias, siempre en función de su propia realidad. Y en algunos de esos procesos existen líderes fuertes, *caudillos* y *populistas* llamados por sus críticos y por la intelectualidad al servicio del capital, pero lejos de esas diatribas que buscan tergiversar la realidad, son luchadores cercanos a la gente, que responden a sus demandas y emprenden la reivindicación de la soberanía nacional, que tan extraviada se encontraba.

Desgraciadamente, Nicaragua no corresponde a esta tendencia política regional, a pesar de las apariencias. Por el contrario, se encuentra secuestrada por una fracción de la elite, el danielismo, que no parece conocer límite alguno.

Nicaragua está inmersa en un *impasse* de ideas, alternativas y proyectos a corto, mediano y largo plazos. El pueblo, por ahora, se encuentra subsumido en una lucha por la supervivencia en medio de una aguda pobreza colectiva.

Muchas veces se insiste en que la historia no se repite. En gran medida esta idea es cierta. Sin embargo, de nueva cuenta, en Nicaragua, *hoy, el amanecer es una tentación*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alianza Partido Movimiento Renovador Sandinista. (s.f.). *Manifiesto Sandinista*. Recuperado de: http://www.inprecor.org.br/inprecor/components/com_docman/dl2.php?archive=0&file=TUFOSUZJRVNUT19TQU5ESU5JU1RBX1BERi5wZGY=
- Baltodano, M. (2007). ¿La izquierda gobernando en Nicaragua? *Pueblos*. Recuperado el 3 de octubre de 2007, de: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article636&var_recherche=M%F3nica%20Baltodano
- (2007). Sandinismo: sectores populares y encrucijada. En Ricardo Martínez (Coord.). *Los movimientos sociales del siglo XXI* (p. 246). México: Jorale Editores.
- (2009). *Sandinismo, pactos, democracia y cambio revolucionario: contribuciones al pensamiento político de la izquierda nicaragüense*. Nicaragua: IHNCA.
- Bendaña, A. (2002). Washington y los caudillos: cálculos y errores de cálculo en Managua. En *NACLA Report on the Americas*, 35, (4). Recuperado de: www.nacla.org/art_display.php?art=2036&nacla_Session=
- Bermúdez, L. (1987). *Guerra de baja intensidad. Reagan contra Centroamérica*. México: Siglo XXI.
- Bobbio, N. (1985). *El futuro de la democracia*. Barcelona: Plaza y Janés.
- Cardenal, E. (2004). *La revolución perdida*. (2ª. ed.). Nicaragua: ANAMA Ediciones Centroamericanas.
- Castro, V. (1993). El ejército en Nicaragua. *La Avispa*, (13), 34.
- Castro, S. de. (2007). Entrevista a Orlando Núñez, sociólogo nicaragüense. *Tareas*, (126), 45-46.
- Centro de Investigaciones de la Comunicación. (2006). MRS o ALN ¿quién sacará del túnel a Nicaragua? *Suplemento quincenal de análisis político*, (5), 2-3. Autor.
- Chamorro, C. F. (2011). El ‘Golpe’ y la Oposición. *Confidencial*. Recuperado de: <http://www.confidencial.com.ni/articulo/5612/el-ldquo-golpe-rdquo-y-la-oposicion>
- Córdova, R. & Benítez, R. (1990). Reflexiones en torno al Estado en Centroamérica. En P. González Casanova. *El Estado en América Latina. Teoría y práctica* (p. 529). México: Siglo XXI-UNU.
- Dahl, R. (1989). *La poliarquía. Participación y oposición*. España: Tecnos.
- Efe, Reuter y Afp. (1996, 8 de septiembre). Cambian sandinistas su himno antiyanqui por la Oda a la Alegría. *La Jornada*, p. 52.
- Equipo Envío. (2001). El camino a las elecciones: un proceso fraudulento. *Envío*, (236-237), 31.
- (2001). La Convergencia es un proyecto con futuro para la nación y para el sandinismo. *Envío*, (236-237), 38.
- (2011). Elecciones 2011: perdió Nicaragua. *Envío*, (356). Recuperado de: <http://www.envio.org.ni/articulo/4442>
- Equipo Nitlapan. (2001). Elecciones 2001: lo previsto, lo imprevisto, lo incierto. *Envío*, (236-237), 7.
- (2008). Después de 29 años, después de 290 horas. *Envío*, (316), 4.
- Equipo Nitlapan-Envío. (2007) ¿Un proyecto personal, familiar, nacional, internacional? *Envío*, (304), 6-7.
- Ferrari, S. (1992). *Sembrando Utopía*. Managua: Nicarao.
- Flores, M. (2002, 1 de junio). Cafetaleros reinstalan plantones, Nicaragua, *La Prensa*.

- Recuperado de: <http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2002/junio/01/nacionales/>
- Fonseca, R. (2011, 6 de noviembre). Las trampas del orteguismo. *Proceso*, (1827), p. 47.
- (2011, 11 de noviembre). Nicaragua: elecciones y dudas. *Proceso*. Recuperado de: <http://www.proceso.com.mx/?p=287833>
- Fonseca Terán, C. (2011, 17 de noviembre). Elecciones 2011 en Nicaragua y su significado histórico: la ruta del triunfo sandinista. *La República*. Recuperado de: <http://www.larepublica.es/2011/11/elecciones-2011-en-nicaragua-y-su-significado-historico-la-ruta-del-triunfo-sandinista/>
- García, J. F. (2004). Nicaragua: Corrupción danzando en la política. *Panorama Centroamericano*, (197), 19.
- García Laguardia, J. M. (2001). Nicaragua: Constitución, revolución y contrarrevolución. En *Transición democrática y reforma constitucional en Centroamérica*. (pp. 147, 148, 153). Costa Rica: FUNPADEM.
- Grigsby, W. (2005). ¿Por qué hay tan poca movilización social? *Envío*, (280), 22.
- Guevara, O. (2008). Reflexiones ante la diaria y grave violación del carácter laico del Estado. *Envío*, 27, (313), 35, 38.
- Hassan Morales, M. (2009). *La maldición del Güegüense*. Managua: PAVSA.
- Inter Press Service. (1992, 7 de marzo). Recontras y recompas ocupan la ciudad nicaragüense de Ocotal. *El Día*, p. 15.
- Lechner, N. (2003). Estado y sociedad en una perspectiva democrática. *Polis*, 2 (6). Recuperado de: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=30500605>
- López, M./EFE. (2006, 24 de septiembre). Triunfo sandinista pone en riesgo relaciones con EEUU. *El Nuevo Diario*. Recuperado de: <http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2006/09/24/politica/29732>
- López, N. (1996). *La ruptura del Frente Sandinista*. México: Plaza y Valdés-UNAM.
- (2009). *Del Plan Puebla-Panamá al Proyecto Mesoamérica. Un espejo de la globalización neoliberal*. México: Plaza y Valdés.
- López y Rivas, G. (2010). Pablo González Casanova, de la sociología del poder a la sociología de la explotación. *Rebelión*. Recuperado de: <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=112274>
- Marengo, D. (2011). El gobierno debe tomar en cuenta los 800 mil votos por Gadea. *Envío*, (357). Recuperado de: <http://www.envio.org.ni/articulo/4465>
- Martí i Puig, S. (2004). *Tiranías, rebeliones y democracia. Itinerarios políticos comparados en Centroamérica*. España: Ediciones Bellaterra.
- (2009). Nicaragua 2008: polarización y pactos. *Revista de Ciencia Política*, 29, (2), 526.
- (2009). Mutaciones orgánicas, adaptación y desinstitucionalización partidaria: el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 1980-2006. *Revista de Estudios Políticos*, (143), 109, 118, 119.
- Martí i Puig, S. & Close, D. (Eds.). (2009). *Nicaragua y el FSLN (1979-2009). ¿Qué queda de la revolución?* España: Ediciones Bellaterra.
- Martínez Cunill, D. (2004). Sandino traicionado, 25 años después. *Rebelión*. Recuperado de: <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=2207>
- Martínez, M. (2009). Así viven los nuevos oligarcas orteguistas. *Al Día*. Recuperado de: http://www.aldia.cr/ad_ee/2009/agosto/16/internacionales2058922.html
- Montenegro, S. (2002). Nuestra sociedad civil es débil y ha sido debilitada. *Envío*, (242), 15, 16, 17.
- Movimiento por el Rescate del Sandinismo. (2009). Información del RESCATE al pueblo de Nicaragua y a los medios de comunicación. Recuperado de: <http://>

barricada.com.ni/2009/04/15/informacion-del-rescate-al-pueblo-de-nicaragua-y-a-los-medios-de-comunicacion/

- Murillo, R. (2005). *Sin sorpresas en la vida de Pedro (todo sobre sus navajas)*. Recuperado de: <http://www.conamornicaragua.org.ni/Documentos%20Web/SIN%20SORPRESAS%20EN%20LA%20VIDA%20DE%20PEDRO.doc>
- Núñez, O. (2007). El asalto al Estado nacional. *La Primerísima*. Recuperado de: <http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/17200>
- O'Donnell, G., Schmitter, P. C. & Whitehead, L. (Comps). (1994). *Transiciones desde un gobierno autoritario*. España: Paidós.
- Oettler, A. (2009). Nicaragua: orteguismo y feminismo. *Iberoamericana. América Latina España-Portugal*, IX, (33), 179.
- Orozco, M. (2007). Centroamérica: retos, conflictos y perspectivas en el siglo XXI. *TEMAS*, (50-51), 53, 59.
- Ortega Hegg, M. & Córdova Macías, R. (1996). *Centroamérica: Gobierno local y participación ciudadana*. Nicaragua, El Salvador: FLACSO.
- Ortega Hegg, M. (2007). Nicaragua 2006: el regreso del FSLN al poder, *Revista de Ciencia Política*, (27), 212, 213, 215.
- . (s.f.). Los resultados electorales del 2006 en Nicaragua. Recuperado de: http://www.boell-latinoamerica.org/download_es/Articulo_revisado_LOS_RESULTADOS ELECTORALES DEL 2006 EN NICARAGUA.pdf
- Padilla, R. (2009). Nicaragua. *Evolución económica durante 2008 y perspectivas para 2009*. México: CEPAL. Disponible en http://biblioteca.cepal.org/search~S0*spi?/XNicaragua&SORT=D/XNicaragua&SORT=D&SUBKEY=Nicaragua/1,1619,1619,B/1856~b1159536&FF=XNicaragua&SORT=D&4,4,,1,0
- Pantoja, A. (2011, 9 de noviembre). Ortega promete 'no cambiar el rumbo del país'. *El Nuevo Diario*, Recuperado de: <http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/232717>
- Pérez Baltodano, A. (2005a). Democracia electoral sin consenso social: una receta envenenada. *Envío*, (281), 22, 23, 25.
- . (2005b). Un retrato de los partidos políticos (2). La izquierda necesaria para el país posible. *Envío*, (283), 31.
- . (2005c). Nicaragua: un experimento democrático en agonía. *Nueva Sociedad*, (199), 7-9.
- Ramírez, S. (1996). Prólogo. Un sandinismo en el que creer. En Nayar López Castellanos. *La Ruptura del Frente Sandinista* (p. 20). México: Plaza y Valdés-UNAM.
- Rocha, J. L. (2001). PLC: ganador rotundo en las urnas y en el pacto. *Envío*, (236-237), 16.
- . (2004). ¿Hacia dónde ha transitado el FSLN? *Envío*, (268), 34-35-39.
- . (2009). Daniel Ortega now: el retorno de sí mismo. *Iberoamericana. América Latina España-Portugal*, IX, (33), 176-177.
- . (2011). Elecciones 2011-FSLN: por las buenas o por las malas. *Envío*, (356). Recuperado de: <http://www.envio.org.ni/articulo/4445>
- Roitman, M. (2005). *Las razones de la democracia en América Latina*. México: Siglo XXI.
- Salinas Maldonado, C. (2009, 15 de octubre). La conversión del cardenal Obando y Bravo. *El País*. Recuperado de: http://internacional.elpais.com/internacional/2009/10/15/actualidad/1255557601_850215.html
- Serrano Caldera, A. (1993). *La Unidad en la diversidad. Hacia una cultura del consenso*, Nicaragua: San Rafael.

- Téllez, D. M. (2008). Nicaragua está en una situación límite, eso me obligó a la huelga de hambre. *Envío*, (316), 12-13.
- Torres, H. (2010). Las similitudes de este gobierno con la dictadura somocista dan escalofríos. *Envío*, (334). Recuperada de <http://www.envio.org.ni/articulo/4119>
- Torres-Rivas, E. (2001). Los déficit democráticos en la posguerra. Centroamérica hacia el año 2000. En Julio Labastida Martín del Campo & Ludolfo Paramio (Eds.), *Globalización, identidad y democracia: México y América Latina*. (p. 119). México: Siglo XXI.
- . (2007). Nicaragua: el retorno del sandinismo transfigurado, *Nueva Sociedad*, (207), 8.
- Vargas, O. R. (1995). Nicaragua: Peligra la consolidación democrática. *Nueva Sociedad*, (137), 8-9.
- . (2004). *25 años después (1979-2004). De los Comandantes a los Banqueros*. Nicaragua: Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN).
- . (2007). Nicaragua: no se alcanzarán las Metas del Milenio. En A. Serrano Caldera & A. del Romero (Eds.) *La Nicaragua Posible: hacia un Proyecto de Nación. Reflexiones desde la Universidad* (pp.139-140). Nicaragua: Universidad de Alcalá-UNAN León-Hispamer.
- Vilas, C. (1994). *Mercado, Estados y Revoluciones. Centroamérica 1950-1990*. México: CIICH-UNAM.
- XINHUA. (2011, 20 de octubre). Ex sandinistas proponen reforma política en Nicaragua. *La Estrella*. Recuperado de: <http://www.laestrella.com.pa/online/al-minuto/2011/10/20/al-min-ex-sandinistas-proponen-reforma-politica-en-nicaragua.asp>
- Zibechi, R. (2006). Nicaragua: crisis y renacimiento del sandinismo. *Programa de las Américas*. Recuperado de: <http://www.ircamericas.org/esp/3465>

Nayar López Castellanos (1970) es Licenciado en Ciencia Política, Maestro en Estudios Latinoamericanos y Doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la cual es profesor de asignatura desde 1996. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) desde el 2004. Autor de los libros *La ruptura del Frente Sandinista* (Plaza y Valdés-UNAM, 1996), *Izquierda y neoliberalismo de México a Brasil* (Plaza y Valdés-IPN, 2006), *Del Plan Puebla Panamá al Proyecto Mesoamérica. Un espejo de la globalización neoliberal* (Plaza y Valdés, 2009) y *Perspectivas del socialismo latinoamericano en el siglo XXI*, (Ocean Sur, 2012), así como coordinador del libro colectivo *América Latina y el Caribe, una región en conflicto. Intervencionismo externo, crisis de las instituciones políticas y nuevos movimientos sociales* (Plaza y Valdés-UNAM, 2009). Ha impartido diferentes conferencias en México y en el extranjero. Autor de más de 100 artículos y ensayos publicados en revistas y periódicos mexicanos sobre el acontecer político de América Latina y el Caribe.

